

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE EUSKADI.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.-

El proceso de institucionalización de Euskadi, a pesar de haber transcurrido más de treinta años desde la recuperación del autogobierno, está aún incompleto. Efectivamente, culminado el proceso de institucionalización autonómico y foral quedaba pendiente aún la aprobación de la Ley Municipal de Euskadi.

Bajo ese planteamiento, la necesidad objetiva de la Ley Municipal de Euskadi no puede ser puesta en tela de juicio. En Euskadi, actualmente, el marco normativo local está imbuido de una notable precariedad. Es cierto, no obstante, que –dado el sistema interno de distribución del poder político– existe un cuerpo de Normas Forales aprobadas por los Territorios Históricos que regulan un amplio abanico de materias relacionadas con el ámbito local, así como un reducido elenco de disposiciones normativas reglamentarias aprobadas en su día por el Gobierno Vasco. También es cierto que el Parlamento Vasco ha llevado a cabo una importante obra legislativa en ámbitos materiales sectoriales que ha impactado con fuerza sobre las competencias municipales (policía, urbanismo, medio ambiente, servicios sociales, etc.).

Aún así, no cabe duda de la necesidad de un marco normativo general que regule el espacio de gobierno municipal. Por tanto, la articulación interna de Euskadi requería como complemento imprescindible la aprobación de la Ley Municipal que cerrara el proceso de articulación institucional entre Instituciones Comunes, Órganos Forales de los Territorios Históricos y Ayuntamientos.

El municipio vasco, además, debe ser reconocido, de una vez por todas, como uno de los tres niveles básicos de gobierno que actúan en la estructura institucional de Euskadi y, por consiguiente, como un poder público territorial a todos los efectos. El municipio vasco, en consecuencia, necesitaba disponer de una visibilidad institucional efectiva, que le permitiera participar de forma activa –en el marco de los órganos de participación institucional que se prevén en la presente Ley– en el diseño y ejecución de aquellas políticas públicas que afecten directamente a sus ciudadanos y ciudadanas y condicionen el ejercicio de sus competencias municipales. La defensa y garantía de la autonomía municipal es, asimismo, una necesidad objetiva del municipalismo vasco que es cabalmente asumida por el presente marco normativo.

Tal como se reconoce en el artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía, sobre el espacio institucional del nivel local de gobierno la Comunidad Autónoma ejerce competencia exclusiva, sin perjuicio de la legislación básica que dicte el Estado sobre ese ámbito. Pero la distribución interna del poder político derivada de la singular posición constitucional y estatutaria que asumen los Territorios Históricos en el entramado institucional vasco, ha conducido a que, ya sea por previsión del propio Estatuto de Autonomía (artículo 37.3) o ya sea por reconocimiento expreso de la competencia por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (en lo sucesivo, Ley de Territorios Históricos), exista un fondo foral de competencias que se proyecta sobre determinadas facetas del espacio local con incidencia asimismo en importantes aspectos puntuales del régimen jurídico de los municipios. Este

espacio local de configuración foral no puede ser, en ningún caso, desconocido por el Parlamento Vasco en el momento de elaborar y aprobar la Ley Municipal de Euskadi.

Por tanto, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a los Territorios Históricos vascos sobre ese ámbito, la Ley Municipal de Euskadi –aplicando una dimensión reforzada del principio constitucional de autonomía local- tiene por finalidad salvaguardar amplios espacios propios de decisión política a favor del nivel municipal de gobierno, lo que necesariamente ha de implicar una apuesta por establecer unos límites precisos a las potestades de intervención de los poderes autonómico y forales sobre ese ámbito de actuación institucional que representa el municipio.

II.-

Para alcanzar esa finalidad y garantizar la posición institucional del municipio en el entramado de instituciones vascas, la Ley Municipal se articula en torno a unos objetivos de política normativa que, dada su naturaleza transversal, influyen directamente en su contenido y han de servir de guía en su proceso de aplicación.

El primer objetivo de la Ley Municipal es el de mejorar el diálogo entre la institución municipal y sus vecinos y vecinas, así como fomentar un desarrollo sostenible de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos vascos. Los municipios –y más concretamente los Ayuntamientos- son el nivel de proximidad por excelencia y, por tanto, el más sensible a las necesidades de la ciudadanía. La fuente de legitimación institucional del municipio es atender satisfactoriamente las necesidades de sus vecinos y vecinas, así como garantizar una razonable calidad de vida de las y los ciudadanos. Y ello sólo se consigue mediante una articulación efectiva de un sistema de reparto de responsabilidades institucionales (competencias) que sea claro y preciso, así como por medio de la configuración de un sistema de financiación municipal que garantice el correcto ejercicio de sus responsabilidades y una prestación adecuada de los servicios públicos locales.

El segundo objetivo de la Ley Municipal de Euskadi no es otro que el de garantizar plenamente la autonomía municipal, lo que implica no sólo el reconocimiento formal de esa autonomía sino, además, garantizarla materialmente, con el fin de que los municipios vascos dispongan de una real capacidad de ordenar y gestionar sus asuntos propios bajo su entera responsabilidad. A tal fin, la Ley articula un depurado sistema de garantía de la autonomía municipal mediante la inserción de un mecanismo de alerta temprana, que representa una lectura temporalmente adecuada –proyectada sobre el siglo XXI- de los principios recogidos en la Carta Europea de Autonomía Local y es, sin duda, una de las experiencias pioneras en el Estado español a la hora de reforzar el autogobierno local.

El tercer gran objetivo que afronta la Ley Municipal es, como ya se advertía, el de dotar de visibilidad institucional al municipio en el conjunto de poderes públicos vascos. Se trata, por tanto, de reconocer que el municipio es un poder público territorial conformado a través del principio democrático, cuya legitimidad y calidad democrática es, como mínimo, de igual factura a la existente para la conformación de los órganos e instituciones propios de la Comunidad Autónoma o de los Territorios Históricos.

El principio democrático, por consiguiente, está en la base de la configuración de los Ayuntamientos vascos, que disponen además de una batería de instrumentos de participación ciudadana que pueden coadyuvar en la mejora de la calidad del sistema de representación democrática que se configura a través de los procesos electorales correspondientes.

El cuarto objetivo, que se desarrollará con detalle en un momento posterior, es, sin duda, dotar al municipio de un amplio abanico de facultades que se proyectan sobre un sistema de competencias propias configurado como un estándar mínimo de garantía de la autonomía municipal. O, dicho de otra manera, se trata de preservar que el espacio municipal en Euskadi se configure como un poder político claramente delimitado en su marco de actuación sin que los otros niveles de gobierno puedan interferir discrecionalmente su ejercicio de forma puntual o sorpresiva.

Y, en fin, el quinto objetivo, se proyecta sobre la idea fuerza de que el municipio vasco ha de disponer de una financiación adecuada y suficiente para un correcto ejercicio de sus competencias municipales. La financiación municipal, junto con las competencias propias, se convierte así en el eje central de la Ley Municipal de Euskadi. Sin una financiación municipal garantizada no se puede hablar en propiedad de autonomía municipal. En este sentido, debe resaltarse cómo la Ley Municipal de Euskadi, a diferencia de otras leyes autonómicas o, incluso, de la legislación básica del Estado en materia local, es una ley integral del espacio institucional municipal –sin perjuicio de las importantes atribuciones en ese ámbito de los Órganos Forales de los Territorios Históricos- puesto que, junto con la regulación de las competencias propias, se adoptan una serie de decisiones normativas de primer relieve en materia de financiación.

La Ley Municipal se configura, por tanto, como una pieza esencial que forma parte integrante del núcleo duro del sistema institucional vasco y, en consecuencia, dado su importante papel en ese ámbito ha de ser considerada como la Ley que cierra el proceso de institucionalización interno de Euskadi.

Por consiguiente, la Ley Municipal es una ley de claro contenido institucional que, en desarrollo del propio Estatuto de Autonomía, complementa (y, en algún punto específico, corrige o puntualiza) lo previsto en la Ley de Territorios Históricos.

Esta configuración de la Ley Municipal como ley institucional ha de tener, de acuerdo con la doctrina emitida en su día por la Comisión Arbitral del País Vasco en relación con la LTH, consecuencias evidentes en el plano de su relación con el resto de leyes sectoriales aprobadas por el Parlamento Vasco.

Por tanto, cualquier modificación de la Ley Municipal por parte de la legislación sectorial debería, a imagen y semejanza de lo previsto para la Ley de Territorios Históricos, garantizar que toda reforma puntual que se pretenda llevar a cabo de su contenido se materialice mediante una modificación o derogación de forma directa y expresa de la propia Ley Municipal. Dicho de otra manera, la Ley Municipal sería necesariamente la sede formal específica para llevar a cabo cualquier reforma material de su contenido.

Con la expresa caracterización de la Ley Municipal como ley de contenido institucional se pretende, principalmente, proteger su contenido, y especialmente las competencias propias de los municipios

frente a la actuación posterior del legislador vasco, que, sin perjuicio de que pueda en todo caso modificar o derogar lo previsto en esa Ley Municipal, tal modificación o derogación habría de ser directa y expresa, dada la función institucional que esa Ley cumple en el sistema vasco y en el desarrollo del propio Estatuto de Autonomía.

III.-

La Ley Municipal se estructura en un Título Preliminar, siete Títulos específicos sobre otras tantas materias y un Título genérico denominado Otras Disposiciones, así como en una disposición adicional, otra transitoria, otra derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El Título Preliminar tiene por objeto una serie de disposiciones generales que se ocupan del carácter de la Ley, del objeto de la misma, de los principios en los que se inspira este nuevo marco normativo, de la tipología de las entidades locales y del registro administrativo de éstas. No cabe duda que la Comunidad Autónoma dispone de competencias reconocidas estatutariamente para configurar normativamente el sistema local de gobierno y, más precisamente, la regulación del Municipio, tal como prevé el artículo 10.4 del Estatuto.

Bien es cierto que esa competencia autonómica se encuentra limitada, por un lado, por las previsiones que el legislador básico de régimen local ha dictado o pueda dictar en su día, así como por las competencias que sobre distintos e importantes aspectos del ámbito local disponen los Órganos Forales de los Territorios Históricos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.3 del Estatuto y en la Ley de Territorios Históricos. Esta doble limitación competencial no hace precisamente fácil la labor de configuración del legislador vasco en ese ámbito, pero cabe subrayar que la Ley Municipal es plenamente respetuosa tanto con lo previsto en la legislación básica del Estado, que debe considerarse en todo caso como una suerte de “estándar mínimo de autonomía local” y que a través de la presente Ley únicamente se desarrolla o refuerza en algunos puntos, como con las competencias propias de los Órganos Forales de los Territorios Históricos, que en todo momento se salvaguardan debidamente en esta regulación.

Se trata, por tanto, de una Ley que desarrolla las competencias de las Instituciones Comunes sobre ese ámbito institucional. El legislador vasco es muy consciente que, en este punto, dado el reparto externo e interno de competencias, es un legislador limitado en sus márgenes de configuración. Y en ese sentido no aborda más que aquellos puntos para los que la Comunidad Autónoma, entendida en sentido estricto, tiene competencias. Por consiguiente, deberá ser posteriormente el poder normativo foral el que, ya sea través de Normas Forales Municipales o Normas Forales singulares, ejercite sus propias competencias (como, por lo demás, ya lo ha venido haciendo) o desarrolle, en aquellos ámbitos que sea factible, las previstas en la presente Ley.

En el terreno de los principios cabe señalar que la Ley recoge una lista exhaustiva de los mismos, comenzando por el principio de autonomía municipal que es, sin duda, la manifestación más fuerte del principio de autonomía local y que se concreta en la dimensión política que tiene el autogobierno municipal de acuerdo con el principio democrático. El segundo principio es el de suficiencia financiera, que está recogido expresamente en la Carta Europea de Autonomía Local y que se plasma en el derecho que tienen los municipios de disponer de los recursos necesarios para ejercer sus propias competencias. Junto a estos principios, se detallan también el de autoorganización, el de proximidad, el

de solidaridad y sostenibilidad, así como el principio de igualdad de los ciudadanos y ciudadanas en el acceso a los servicios públicos locales y el de autonomía normativa, expresión más fuerte de la autonomía local.

Pero ese listado estaría incompleto sin una concreción de la afectación de tales principios sobre el plano del ejercicio de las competencias. Y es allí dónde la Ley Municipal se hace eco de la dimensión competencial del principio de suficiencia financiera, así como de los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y diferenciación, que juegan un papel trascendental en el momento de ejercer sus potestades normativas tanto por el legislador vasco como por los poderes normativos forales en relación con el ulterior control jurisdiccional que se pueda llevar a cabo, en su caso, de tales disposiciones normativas.

El Título I se ocupa del Municipio y de la Autonomía Municipal. En el sistema de gobierno local vasco no cabe duda que, dada la singularidad de los Territorios Históricos, el municipio es la entidad local por excelencia del modelo. En este Título se parte –de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Europea de Autonomía Local- por definir cuál es el alcance de la autonomía municipal, como expresión más fuerte de la autonomía local, que comprende, en todo caso, la ordenación y gestión de todos los asuntos públicos de la incumbencia del Municipio. Asimismo, se detalla el papel de los Territorios Históricos en el modelo institucional, que sirven –de acuerdo con la legislación básica- de refuerzo del ejercicio de las competencias propias de los municipios. En este Título I se precisan, también, las competencias de los Territorios Históricos en diversos aspectos relativos al municipio.

El Título II tiene por objeto el Estatuto de las vecinas y vecinos, que se descompone en una serie de deberes y derechos, así como en unos principios y reglas relativos a la información y a la participación ciudadana. El apartado de los deberes o responsabilidades ciudadanas ha sido tradicionalmente uno de los menos desarrollados en nuestra legislación local, sin embargo el sentido de pertenencia de las vecinas y vecinos al municipio se acrecienta en función de la libre asunción de tales responsabilidades ciudadanas y de los valores cívicos que acompañan a la propia idea de ciudadanía. El catálogo de derechos es asimismo objeto de la Ley, y en su confección se han tenido en cuenta las Recomendaciones que el Consejo de Europa (Congreso de Poderes Regionales y Locales) ha venido aprobando en los últimos años sobre esta materia. Pero obviamente en ambos casos (deberes y derechos) ha de considerarse que esta regulación complementa y nunca excluye lo establecido en la legislación básica. Se prevé asimismo la posibilidad de que los municipios vascos aprueben, en su caso, Cartas de derechos y deberes tal como ya lo han hecho algunas ciudades españolas, europeas y de otras partes del mundo.

El Capítulo II de ese Título II tiene por objeto regular una serie de principios y algunas reglas en torno a la información y a la participación de las vecinas y vecinos en la actividad municipal. Los criterios generales sobre los que se apoya tal regulación es, por un lado, la necesaria transparencia que debe haber en el actuar del gobierno local, así como, por otro, reconocer que en su mayor parte esta es una materia que debe regularse por el propio municipio en uso de sus potestades normativas y de autoorganización. La participación ciudadana es una de las claves de la gobernanza local y debe, por tanto, impulsarse su uso, sin perjuicio de que las decisiones políticas las han de adoptar los órganos que tienen atribuida la competencia y que responden políticamente por su correcto o incorrecto ejercicio ya sea a través de los instrumentos de control o por medio del escrutinio electoral y de la legitimidad democrática que el mismo ofrece. La Ley Municipal parte, así, por reforzar la participación

ciudadana, especialmente en el campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero se sustenta, tal como se indicaba, en el presupuesto de que han de ser los propios municipios los que elijan los instrumentos y cauces de regulación de tal participación.

El Título III, por su parte, pretende únicamente desarrollar algunos aspectos de la organización municipal que la legislación básica no ha recogido y que, sin embargo, van dirigidos a mejorar la calidad institucional del gobierno local en Euskadi. El presupuesto de partida es, asimismo, muy sencillo: al margen de lo previsto por el legislador básico en esta materia, que está muy desarrollada en la normativa estatal el legislador vasco es plenamente consciente que el desarrollo de tales previsiones ha de ser atribución específica de los propios municipios a través de sus potestades normativas. No obstante, con carácter facultativo y, en todo caso, orientativo, se recogen una serie de previsiones que tienden exclusivamente a fomentar el desarrollo de la organización complementaria de los municipios vascos. El primer Capítulo de este Título III incluye también sendos preceptos relativos a los regímenes especiales de organización previstos para los municipios de gran población y para los más pequeños (el de concejo abierto).

El Capítulo II procura atender a cuestiones prácticas, de carácter organizativo, que se presentan en pequeños municipios y en las asociaciones y agrupaciones de entidades locales. Aquéllos se ven, en ocasiones, con dificultades para prestar servicios que no requieren la provisión de un puesto de trabajo a tiempo completo, por lo que se prevé la posibilidad de que puedan crear puestos reservados a personal funcionario a tiempo parcial. Las asociaciones y agrupaciones de entidades locales precisan, especialmente en sus primeros años de andadura, de un adecuado margen de disponibilidad en el plano organizativo, para lo que se incorpora la previsión de puedan reservar puestos de trabajo reservados a personal laboral, salvo que impliquen ejercicio de autoridad.

El Capítulo III tiene por objeto establecer una regulación complementaria –si bien muy limitada en su alcance funcional- de lo previsto en la legislación básica en lo que afecta al estatuto de las y los representantes locales. La función que cumple esta regulación es, asimismo, complementaria de la prevista en la legislación básica, pues no se puede dudar que el estatuto de las y los representantes locales y el juego entre mayorías/minorías en sede de gobierno local es un ámbito cuya regulación, al menos a nivel de principios y de reglas comunes, compete llevarla a cabo al legislador estatal por medio de la definición de lo básico. Así, en la línea de completar y mejorar el estatuto de tales representantes previsto por la actual legislación básica, se prevén una serie de reglas relativas a los derechos económicos de las y los representantes y a facilitar el ejercicio de la oposición, así como sobre los grupos políticos municipales.

IV.-

El Título IV regula la importante materia de las competencias municipales. En este caso, la Ley Municipal hace una clara opción por apostar decididamente por la mayoría de edad política de los municipios vascos en la línea de lo expuesto por la Carta Europea de Autonomía Local. En efecto, en línea de lo dispuesto en este importante texto, las competencias públicas deben atribuirse por regla general preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, así como tales competencias municipales deben ser normalmente plenas y completas. Además, los municipios vascos han de ejercitar, bajo su entera responsabilidad, todas aquellas competencias que no estén

atribuidas expresamente a otra instancia de gobierno, siempre que vayan dirigidas a atender las necesidades de sus vecinos y vecinas.

Las competencias municipales se configuran en la Ley como propias de los municipios. Ello implica que la Ley municipal, en cuanto ley de contenido institucional, confiere a los municipios vascos un estándar mínimo de autonomía local que, posteriormente, podrá ser mejorado por las leyes sectoriales.

Obviamente, el legislador vasco –en uso de sus atribuciones competenciales sobre ese ámbito o sobre determinados sectores materiales- también podrá, en su caso, limitar excepcionalmente el alcance de tales competencias propias, pero en este caso deberá justificar que la medida es ajustada a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, así como –tal como se ha dicho- llevarla a cabo mediante una reforma expresa y directa de lo establecido por la Ley Municipal.

La Ley incorpora de forma diáfana una cláusula general de competencias a imagen y semejanza de lo previsto en otras leyes del mismo carácter y de acuerdo con lo que prevé la propia Carta Europea de Autonomía Local, al indicar que las entidades locales –dentro del ámbito de la Ley- tienen libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.

Particular importancia tiene el listado de competencias propias de los municipios vascos que se recoge en la Ley. La idea central de ese listado es establecer, por un lado, las potestades genéricas que tienen los municipios sobre determinados ámbitos materiales, y, por otro, garantizar, en todo caso, un estándar mínimo de competencias que se proyectan sobre una serie de submaterias dentro de cada ámbito material específico.

Con el fin de garantizar la autonomía municipal en el plano competencial, el listado de competencias refleja de forma detallada las materias sobre las cuales ya están interviniendo los municipios a través del ejercicio de una serie de potestades sobre esas materias. Por tanto, buena parte de esas competencias ya están previstas en la legislación vigente aplicable, mientras que en otras materias se ha procedido a identificar cuáles eran los ámbitos sobre los cuales se proyectaban las distintas potestades ejercidas por los municipios. La Ley Municipal procura a través de este sistema de articulación de las competencias municipales garantizar un estándar mínimo de competencias de estas entidades locales con el fin de reforzar la seguridad jurídica de los gobiernos municipales a la hora de desarrollar políticas propias, así como servir de medida, en su caso, para dotar a los municipios vascos de la financiación suficiente para su correcto ejercicio.

En ese sentido, es capital la regulación que se hace en la Ley de la efectividad de las competencias municipales, así como la distinción que se lleva a cabo entre competencias municipales y servicios obligatorios, pues ese amplio listado de competencias municipales no representa que todos los municipios deban ejercer todas y cada una de ellas, ni tampoco nos indica la intensidad de su ejercicio, sino simplemente reconoce títulos habilitantes para que los distintos gobiernos municipales puedan priorizar determinadas políticas públicas en función de sus respectivos programas de actuación municipal impulsados por sus respectivos equipos de gobierno. La Ley recoge, también, una regulación de mínimos sobre la delegación y transferencia de competencias, pudiéndose vincular la aplicación de tales institutos al principio de diferenciación. Asimismo, se incorpora un precepto que regula la resolución de los conflictos de competencias entre entidades locales. Finalmente, en el último Capítulo

se incorpora una regulación sumaria del régimen de los servicios obligatorios municipales y el de la dispensa de los mismos.

De notable importancia es, asimismo, la regulación recogida en el Título V de la Ley, donde se prevé la participación de los municipios en la elaboración de las políticas públicas que lleven a cabo las instituciones autonómicas. Con el fin de hacer efectiva esa participación se crea el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales como órgano colegiado que tiene por objeto hacer efectivas las relaciones de cooperación institucional de los municipios vascos con tales instituciones. El Consejo se configura como un órgano de composición paritaria, con autonomía orgánica y funcional, adscrito, a efectos presupuestarios, a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

En el seno del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales se crea la Comisión Municipal de Políticas Públicas, de composición estrictamente municipal, y que tiene por función principal actuar como mecanismo de alerta temprana examinando mediante un informe previo los Anteproyectos de Ley o proyectos de disposiciones normativas reglamentarias, con la finalidad de analizar la adecuación de tales anteproyectos o proyectos a la autonomía local y determinar, en su caso, las modificaciones que procedan. La Comisión Municipal se convierte así en el órgano de garantía por excelencia de la autonomía municipal en Euskadi frente a la actuación de los poderes públicos autonómicos. No obstante, sus funciones se limitan a “alertar” a esos niveles de gobierno de que en sus actuaciones normativas en trámite se puede estar vulnerando el principio de autonomía municipal.

El Título VI consta de dos Capítulos. El primero se refiere a otras entidades locales distintas del municipio, materia para cuya regulación se atribuyen las más amplias facultades a los órganos forales de los Territorios Históricos, siempre que el ámbito territorial de la entidad local no exceda del Territorio Histórico. Queda para la regulación autonómica el supuesto de que la entidad local exceda dicho ámbito territorial. Asimismo, se incorporan, como novedad, las redes de municipios, que pueden ofrecer determinadas soluciones a problemas municipales concretos y configurarse como una fórmula flexible de cooperación institucional. En efecto, como se viene reiterando, las formas de intermunicipalidad están plenamente conectadas con el correcto ejercicio de las competencias municipales, pues en muchos casos serán necesariamente los únicos instrumentos efectivos para asegurar su correcto ejercicio.

En el Capítulo II de este Título se regula la gestión de servicios públicos. Se recoge asimismo una regulación meramente enumerativa sobre las formas de gestión, pero con alguna innovación puntual. No obstante, la premisa de esta regulación de las formas de gestión se asienta en reconocer que se trata de una materia vinculada estrechamente con las potestades de autoorganización y con las potestades normativas de los propios municipios.

La financiación municipal se trata en el Título VII de la Ley. Esta regulación es, sin duda, una de las notas más peculiares que ofrece la Ley Municipal vasca en relación con el resto de leyes tanto estatales como autonómicas que tratan del régimen local, pues en esa legislación, de forma un tanto injustificada –aunque basada en temas competenciales, se ha disociado siempre entre régimen jurídico de la Administración Local y financiación local. Una disociación que ha tenido funestas consecuencias para el desarrollo del nivel local de gobierno en el resto del Estado. Sin embargo, en el caso vasco, dadas las peculiaridades económico-financieras derivadas del propio Concierto Económico y de la regulación recogida en el propio Estatuto de Autonomía, no sólo es conveniente sino también necesario

incorporar una serie de principios y reglas en materia de financiación local, sin perjuicio de reconocer expresamente las importantes competencias que sobre ese ámbito material ostentan los Territorios Históricos.

El citado Título VII recoge en su primer Capítulo una serie de disposiciones generales en las que se prevén los principios de la Hacienda Local vasca, así como la regla de que la financiación municipal será incondicionada, sujetando la financiación condicionada a una serie de requisitos. Asimismo, se incorporan una serie de reglas relativas, entre otras cosas, al régimen de endeudamiento.

El Capítulo II del Título VII tiene por objeto la financiación de los municipios vascos y las demás entidades locales. Y en la regulación de esta importante materia se ha querido partir de un criterio prudente que pretende conciliar los intereses de los diferentes niveles de gobierno existentes en la Comunidad Autónoma (Instituciones Comunes, Territorios Históricos y Municipios); para lo que se da una especial relevancia al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en el que todos ellos estarán representados.

Por último, en el Título VIII se recogen una serie de regulaciones parciales sobre diferentes temas de interés municipal. En primer lugar, con el fin de cumplir con la exigencia constitucional de predeterminación legal, en los procedimientos sancionadores definidos por ordenanza se prevé la posibilidad de que las sanciones pecuniarias puedan ser sustituidas, mediando la voluntad de la persona infractora, por trabajos en beneficio de la comunidad de valor equivalente. Asimismo, se recogen una serie de previsiones relativas a la legitimación de las Asociaciones de Municipios en los procesos de negociación colectiva y, por último, una serie de previsiones en relación con la oferta de empleo público conjunta o con la ejecución por el IVAP de los procesos selectivos de los municipios vascos, previo convenio al efecto.

La disposición adicional tiene por objeto regular algunas cuestiones relativas a la Asociación de Municipios Vascos más representativa del municipalismo vasco y que puede asumir, de acuerdo con lo previsto en la Ley y del desarrollo que se haga de la misma, un importante papel en la gestión política del modelo diseñado en este marco normativo.

La disposición transitoria regula determinados aspectos del régimen jurídico del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal, como complemento normativo necesario de la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hasta que se proceda a su regulación definitiva y completa en la normativa autonómica de la función pública.

Se recoge también una disposición derogatoria. Y, por último, se procede a una modificación puntual de algunos aspectos de la Ley de Territorios Históricos. Esta reforma puntual pretende dar entrada a la representación de los municipios vascos en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas para el tratamiento de algunos asuntos que se determinan en la Ley de forma tasada. No se trata, en ningún caso, de modificar la composición actual del citado Consejo Vasco de Finanzas Públicas en relación con las competencias nucleares que este órgano viene desempeñando, cuya composición principal sigue asentándose sobre la base paritaria de la representación de las Instituciones Comunes y de los Territorios Históricos, sino únicamente adherir a tal Consejo una representación municipal que dispondrá de voto en materias tasadas y, en el resto, sólo será oída en el proceso de deliberación del

citado órgano, pero sin disponer de derecho de voto. Con esta presencia, no obstante, se satisface una de las reivindicaciones típicas del municipalismo vasco de disponer de voz y, en su caso, voto en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Y se cierra, así, un largo proceso que termina con la incorporación definitiva de los municipios en el sistema institucional vasco. Las tres últimas disposiciones finales se refieren a la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de participación municipal en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas; a la constitución y a la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales; y a la habilitación, al Gobierno Vasco, para el desarrollo reglamentario de la Ley.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Carácter de la Ley.

1.- La presente Ley se dicta en ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en relación con la Administración Local, sin perjuicio de las competencias que sobre esa misma materia ejercen los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

2.- A través de esta Ley se determina la posición del municipio vasco en el entramado institucional de poderes públicos territoriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 2.- Objeto de la Ley.

Es objeto de esta Ley:

- a) El reconocimiento del nivel institucional municipal, de su posición y protagonismo en el conjunto institucional de Euskadi.
- b) La defensa y protección de la autonomía local.
- c) El establecimiento del régimen de competencias municipales y un marco legal para la garantía de suficiencia financiera en su ejercicio.
- d) El establecimiento del régimen jurídico mínimo de organización y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales.
- e) La configuración de un sistema de coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en cuanto sean desarrolladas por los municipios y demás entidades locales o requieran de su participación.

Artículo 3.- Principios.

1.- Los municipios adecuarán su actuación normativa y ejecutiva a los siguientes principios:

- a) Principio de autonomía municipal.
- b) Principio de autonomía financiera.
- c) Principio de autoorganización.
- d) Principio de proximidad.
- e) Principio de solidaridad y de sostenibilidad.
- f) Principio de igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos locales.
- g) Principio de autonomía normativa.

2.- Los órganos de la Comunidad Autónoma y de los Territorios Históricos Vascos en el ejercicio de sus competencias deberán respetar los principios recogidos en el apartado 1 del presente artículo.

3.- Asimismo, los órganos de la CAPV y de los Territorios Históricos, cuando regulen sobre materias de interés local deberán adecuar su intervención normativa a los siguientes principios:

- a) Suficiencia financiera de los municipios para el ejercicio de las competencias atribuidas.
- b) Subsidiariedad.
- c) Proporcionalidad.
- d) Diferenciación, siempre que la aplicación del tal principio sea viable en función de las capacidades de gestión de los respectivos municipios o, en su caso, de las demás entidades locales.

Artículo 4.- Entidades Locales.

1.- Tendrán la consideración de Entidades locales, a efectos de lo previsto en esta Ley:

- a) El Municipio.
- b) Las Entidades Locales territoriales de ámbito inferior al Municipio, conforme a las tradiciones y a la normativa foral existente en cada territorio.
- c) Las mancomunidades de municipios.
- d) Cualesquiera otras Entidades que, agrupando a varias entidades locales territoriales, bajo la denominación específica que corresponda, caso de las cuadrillas en el Territorio Histórico de Álava

u otras figuras, hayan sido creadas de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás normativa que sea de aplicación.

2.- Las entidades locales a las que se refiere el número anterior tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 5.- Registro de entidades locales.

1.- Los municipios y demás entidades locales a que se refiere el artículo anterior se inscribirán en el Registro de Entidades Locales de la CAPV que se crea en virtud de esta Ley. Las anotaciones que se practiquen en este Registro se comunicarán al de ámbito estatal que corresponda.

2.- Reglamentariamente se regulará el régimen de organización y funcionamiento de dicho Registro.

TÍTULO I

EL MUNICIPIO: LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Artículo 6.- El municipio.

1.- El municipio es la entidad local básica de la organización territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- El municipio es, asimismo, la primera instancia de representación política y cauce inmediato de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos locales.

Artículo 7.- Autonomía municipal.

1.- Los municipios vascos gozan de autonomía para la ordenación y gestión de una parte importante de los asuntos de interés público en el marco de las leyes y, en su caso, de las normas forales.

2.- Los municipios actuarán, en todo caso, bajo su responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía.

3.- La autonomía municipal en Euskadi se entenderá dotada de contenido político, de tal modo que la capacidad de ordenación y gestión que comprende permita a los gobiernos locales la definición y ejecución de políticas propias que excedan de estricta prestación de servicios.

4.- La autonomía municipal comprende, en todo caso, la ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio del municipio, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y

administración, la organización de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la política y gestión del personal a su servicio, el patrimonio y la recaudación, así como la administración y destino de los recursos de sus haciendas.

5.- Las facultades de coordinación que en su caso correspondan a las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y de los Territorios Históricos no afectarán en ningún caso a la autonomía de los municipios y demás entidades locales de Euskadi.

Artículo 8.- Alteraciones relativas al municipio.

1. La creación y supresión de municipios, la alteración y deslinde de términos municipales, los cambios de nombre y de la capitalidad de los municipios y la adopción y modificación de su bandera, enseña y escudo, así como el otorgamiento de títulos, se regulará por la normativa emanada de los órganos forales de los Territorios Históricos.

2.- Las cuestiones sobre deslindes que se susciten entre municipios pertenecientes a distintos Territorios Históricos serán resueltas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

TÍTULO II

ESTATUTO DE LAS VECINAS Y VECINOS: DEBERES Y DERECHOS. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO I

DEBERES, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LAS VECINAS Y VECINOS

Artículo 9.- Deberes y responsabilidades de las vecinas y vecinos.

1.- Son deberes y responsabilidades de las vecinas y vecinos:

a) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

b) Comunicar a los Ayuntamientos las variaciones de sus circunstancias personales cuando impliquen una modificación de los datos obligatorios de su inscripción registral.

c) Cumplir la normativa local y colaborar en su aplicación informando a las autoridades locales de cualquier infracción que se pueda producir a las normas de convivencia en el espacio público.

- d) Hacer un uso racional y adecuado del patrimonio municipal y de las infraestructuras, servicios urbanos y mobiliario urbano y colaborar en su preservación y recuperación.
- e) Respetar las normas de convivencia ciudadana en el espacio público y, asimismo, respetar los derechos de las demás personas.
- f) Preservar y contribuir a la mejora del medio ambiente, del espacio público y del paisaje urbano, mediante comportamientos ecológicos y sostenibles.
- g) Cualesquiera otros previstos por las leyes y por las ordenanzas municipales, en particular aquellas que regulen los usos del espacio público.

2.- Los deberes y responsabilidades regulados en el apartado anterior, a excepción del previsto en la letra b), serán también exigibles a todas las personas que, sin ostentar la condición de vecino o vecina, se hallen circunstancial o permanentemente en el término municipal.

Artículo 10.- Derechos de las vecinas y vecinos.

Son derechos de las vecinas y vecinos:

- a) Ser elector o electora y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.
- b) Participar en la elaboración y gestión de políticas públicas locales de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, ordenanzas y reglamentos que sean de aplicación.
- c) Disfrutar de un medio ambiente y un espacio público urbano adecuado y sostenible.
- d) Disponer de entornos accesibles, que no supongan barreras ni restricciones al tránsito y a la participación de las personas con discapacidad.
- e) Acceder de forma efectiva y en condiciones de igualdad a los servicios públicos, en los términos que determina la presente Ley y las correspondientes ordenanzas. Se fomentará, especialmente, el acceso y utilización de tales servicios por las mujeres víctimas de violencia de género, personas desempleadas, discapacitadas, jubiladas, pensionistas y jóvenes, así como todas aquellas personas que carezcan de recursos económicos y a cualesquiera otros colectivos desfavorecidos que así se determine.
- f) Recibir información acerca de los riesgos, de carácter natural o tecnológico que puedan afectar al ámbito municipal, así como de los planes municipales de protección civil.
- g) Derecho a la cultura y a acceder a los bienes del Patrimonio Histórico.
- h) Derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales y ser atendidos en la de su elección, en sus relaciones con la administración local, de acuerdo con la legislación autonómica que regule el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

- i) Derecho a la información y participación en los términos previstos en el Capítulo II de este Título.
- j) Ser informados, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal de acuerdo con la legislación aplicable.
- k) Exigir la prestación y en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir un servicio municipal obligatorio.
- l) Aquellos otros derechos establecidos en las leyes o, en su caso, en las Normas Forales y en Ordenanzas municipales.

Artículo 11.- Cartas de deberes, responsabilidades y derechos de las vecinas y vecinos.

Los municipios vascos podrán aprobar, mediante Ordenanza, Cartas de derechos, deberes y responsabilidades de las vecinas y vecinos, en donde se recogerán, asimismo, los compromisos municipales ante el incumplimiento de los derechos consignados y las consecuencias que conlleve no respetar los deberes y responsabilidades ciudadanas.

CAPÍTULO II

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Artículo 12.- Derecho a la información y participación de las vecinas y vecinos.

1.- Los municipios informarán a su ciudadanía sobre sus actividades y promoverán la participación de todas las vecinas y vecinos en la vida local ya sea directamente o a través de asociaciones generales o sectoriales.

2.- Los municipios vascos, en sus relaciones con los vecinos, actuarán de conformidad con el principio de transparencia y de participación en el proceso de formación de las políticas públicas, con el fin de garantizar principios de buen gobierno y de buena administración.

Artículo 13.- Información y carácter público de las sesiones.

1.- Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de los municipios vascos y del resto de entidades locales, así como a consultar los archivos y registros, en los términos previstos en la legislación básica.

2.- Las sesiones plenarias son públicas. Los municipios vascos procurarán la grabación de las mismas y la difusión, en su caso, a través de su respectiva sede electrónica. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

3.- En ningún caso, serán públicas las reuniones de la Junta de Gobierno Local.

4.- En el caso de las personas con discapacidad, la información y régimen de publicidad de las sesiones prevista en este artículo deberá proporcionarse a través de medios y formatos accesibles. Cuando el municipio u otra entidad local vasca no dispusieran de medios adecuados para satisfacer el ejercicio de este derecho podrá –previa demanda de la persona interesada- solicitar auxilio institucional a otras administraciones públicas que sí dispongan de los citados recursos.

Artículo 14.- Participación ciudadana y potestad de autoorganización local.

1.- La regulación de las formas, medios y procedimientos de participación se llevará a cabo, de acuerdo con la presente Ley, a través del ejercicio de las potestades normativas locales.

2.- En todo caso, el ejercicio de las formas, procedimiento y órganos de participación ciudadana se llevará a cabo por los municipios vascos a través de su potestad normativa propia y de sus potestades de autoorganización, procurando así el fomento y la efectiva participación de las vecinas y vecinos en los asuntos de la vida pública local. En ningún caso, el ejercicio de tales formas de participación podrá menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos y de gobierno regulados por la legislación básica y por presente Ley.

Artículo 15.- Consultas populares.

1.- De conformidad con la legislación del Estado, los Alcaldes y Alcaldesas, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno del Estado, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de las vecinas y vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

2.- Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para el ejercicio de tales consultas.

Artículo 16.- Iniciativas ciudadanas.

1.- Las vecinas y vecinos con derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular. A tal efecto, podrán presentar propuestas de acuerdos o proposiciones de Ordenanzas en materias de la competencia propia municipal, de acuerdo con lo que se establezca en la presente Ley.

2.- Las iniciativas a que hace referencia el apartado anterior deberán ser sometidas a debate y votación sobre su admisibilidad en el Pleno municipal, sin perjuicio de que posteriormente se tramiten y sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad de la Secretaría del respectivo municipio, así como de la Intervención cuando corresponda.

3.- Las iniciativas populares pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular municipal, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo anterior.

4.- Las iniciativas previstas en este artículo deberán ir suscritas al menos por el diez por ciento de las vecinas y vecinos del municipio.

Artículo 17.- Participación y tecnologías de la información y de las comunicaciones.

1.- Los municipios vascos impulsarán, dentro de las políticas de innovación local, la utilización interactiva de las tecnologías de la información y de las comunicaciones tanto para promover y facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, a efectos de presentación de documentos y realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas, como para suministrar información de toda la actividad municipal.

2.- Los municipios vascos promoverán, asimismo, la participación política de todas las vecinas y vecinos y, especialmente, de las y los jóvenes, a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

3.- Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, las personas físicas y jurídicas prestadoras podrán realizar dichos procedimientos y trámites, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.

4.- Asimismo, los municipios promoverán que las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes.

5.- Las Diputaciones Forales, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica del Estado, colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar satisfactoriamente lo establecido en los dos apartados anteriores. Esta colaboración se podrá vehicular mediante fórmulas de colaboración con otras entidades según lo previsto en la legislación vigente.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y ESTATUTO DE SUS REPRESENTANTES

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Artículo 18.- Principios generales.

1.- Los municipios vascos dispondrán de los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local, pudiendo desplegar sus potestades normativas de organización dentro de ese marco normativo y de lo dispuesto en esta Ley.

2.- El funcionamiento de los órganos necesarios, su régimen de acuerdos y el estatuto de sus miembros se ajustará, asimismo, a lo previsto en la citada legislación básica y a lo recogido en la presente Ley. En todo caso, se garantizará el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de las minorías políticas en sus órganos representativos, conforme al principio de legitimación democrática de los mismos.

3.- En el resto de los órganos complementarios, los municipios se ajustarán, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, a lo que se establezca en sus respectivos Reglamentos de organización dictados en el uso de sus competencias.

Artículo 19.- Vicealcaldes.

1.- Los municipios vascos podrán disponer de Vicealcaldes.

2.- En el caso de que se creen Vicealcaldías, tal figura sustituirá a la de las Tenencias de Alcaldía prevista en la legislación básica. Sus funciones, procedimiento de designación y remoción, así como sus competencias, serán las previstas en el régimen local básico para las y los Tenientes de Alcalde.

Artículo 20.- Delegaciones del Alcalde o Alcaldesa.

Sin perjuicio de la regulación básica vigente para los municipios de gran población, en el resto de municipios vascos el Alcalde o Alcaldesa podrá delegar sus competencias no sólo en la Junta de Gobierno Local, sino también en las y los Vicealcaldes o las y los Tenientes de Alcalde y Concejales.

Artículo 21.- Municipios de gran población.

1.- De conformidad con el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el régimen de organización de los municipios de Bilbao, Donosita – San Sebastián y Vitoria-Gasteiz es el previsto para los municipios de gran población en el Título X de la citada Ley 7/1985.

2.- Cualesquiera otros municipios de la CAPV que se consideren incluidos en el supuesto previsto en el apartado d) del nº 1 del artículo 121 de la Ley 7/1985, por concurrir en ellas las circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales legalmente previstas, y deseen acogerse al régimen de organización de municipios de gran población, podrán adoptar el correspondiente acuerdo plenario en tal sentido y remitir solicitud razonada al órgano competente en materia de régimen local, de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Artículo 22.- Régimen de concejo abierto.

1.- Aquellos municipios cuya población sea inferior a 100 habitantes según el padrón municipal de habitantes vigente al día de la convocatoria de las elecciones municipales, deberán constituirse en régimen de concejo abierto. También podrán disponer de este régimen especial los municipios con una población comprendida entre 100 y 250 vecinas y vecinos que por tradición hayan venido funcionando en el mismo o así lo soliciten ante la administración foral del Territorio Histórico respectivo conforme al procedimiento que establezca la normativa emanada de los órganos forales de los Territorios Históricos.

2.- Los municipios que con 100 o más habitantes, por tradición o aprobación de la administración foral correspondiente funcionen en régimen de concejo abierto y deseen cambiar al régimen general podrán formular la oportuna solicitud ante el órgano foral competente del territorio Histórico, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la normativa foral.

3.- En el régimen de concejo abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden al alcalde o alcaldesa y a la asamblea vecinal. Existirá también una Comisión especial de cuentas a la que corresponderá el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba a probar la asamblea vecinal. El régimen de funcionamiento de estos órganos vendrá determinado por los usos, costumbres y tradiciones locales que sean aplicables y estén debidamente acreditados. En defecto de los mismos se observarán las siguientes normas:

- a) Quien ostente la alcaldía deberá designar al menos a un teniente de alcalde para que le asista en el ejercicio de sus funciones y le sustituya en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro supuesto en que sea necesaria tal sustitución.
- b) La asamblea vecinal estará formada por todo el electorado del municipio. Le corresponderán las atribuciones que la normativa reguladora de régimen local asigna al pleno municipal. El resto de las funciones corresponderá a la alcaldía.

- c) La Comisión especial de cuentas estará formada por un mínimo de tres miembros elegidos por la asamblea vecinal. Su régimen de funcionamiento será el previsto en el correspondiente acuerdo de la asamblea vecinal.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE PERSONAL

Artículo 23.- Puestos de trabajo a tiempo parcial.

Cuando la correcta prestación de un servicio o actividad no requiera la dedicación a tiempo completo de un funcionario o funcionaria, los municipios con población inferior a 5.000 habitantes podrán prever puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias a dedicación parcial en sus relaciones de puestos.

Artículo 24.- Puestos de trabajo reservados a personal laboral.

Las Entidades Locales constituidas por asociaciones o agrupaciones de otras entidades locales podrán prever, en sus relaciones de puestos de trabajo, puestos reservados a personal laboral, salvo que impliquen ejercicio de autoridad.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES SOBRE EL ESTATUTO DE LAS Y LOS REPRESENTANTES LOCALES

Artículo 25.- Régimen de las y los representantes municipales.

1.- El régimen jurídico de las y los representantes municipales vascos es el establecido con carácter general en la legislación básica de régimen local y en la legislación electoral, que se completará con lo previsto en la presente Ley.

2.- La determinación del número de representantes que integran los municipios, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se prevén en la legislación electoral.

3.- Los derechos y deberes de las y los representantes locales serán los establecidos con carácter general en la legislación básica.

Artículo 26.- Derechos económicos y régimen de dedicación de las y los representantes municipales.

1.- Las y los representantes locales tendrán los derechos económicos y las modalidades del régimen de dedicación que se prevén en la legislación básica de régimen local.

2.- A efectos de la mejor armonización del gasto público, el Consejo de Políticas Públicas Locales regulado en el artículo 42 podrá establecer, a modo de recomendación, una tabla de retribuciones en función de la población del municipio y del tipo de dedicación exclusiva o parcial de las y los representantes locales.

Artículo 27.- La oposición.

Los municipios vascos a partir de cinco mil habitantes garantizarán que exista al menos un concejal o concejala de la oposición con dedicación parcial, que a partir de veinte mil habitantes lo será con dedicación exclusiva, con el fin de que las funciones de control y fiscalización del gobierno municipal puedan llevarse a cabo de forma efectiva.

Artículo 28.- Grupos políticos municipales.

1.- Las y los representantes locales se constituirán en grupos políticos y dispondrán de los derechos y obligaciones que se establezcan en la legislación básica y en la presente Ley, con excepción de los miembros no adscritos cuyos derechos económicos y políticos no podrán ser nunca superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

2.- Los grupos políticos municipales tendrán derecho a asignaciones económica con el fin de desempeñar dignamente sus funciones.

Artículo 29.- Código ético y de buen gobierno de las y los representantes municipales vascos.

1.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales elaborará, a modo de recomendación, un Código Ético y de Buen Gobierno de las y los representantes locales vascos que abogue por hacer efectiva la ejemplaridad pública de tales representantes y refuerce la legitimación de sus funciones ante la ciudadanía.

2.- Los municipios vascos, en uso de sus facultades de autoorganización podrán, en todo caso, aprobar códigos éticos o de buen gobierno distintos o desarrollar lo previsto en el párrafo anterior.

TÍTULO IV
COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30.- Principios generales.

1.- Las competencias de los municipios vascos se determinarán de acuerdo en todo caso con lo previsto en la legislación básica, en la presente Ley, o en otras leyes del Parlamento Vasco.

2.- Para la determinación, en su caso, de las competencias de los municipios vascos se tendrá en cuenta el principio de mayor proximidad a la ciudadanía. Asimismo, se valorará la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.

3.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley, la asignación por Ley posterior a otro nivel de gobierno de una competencia atribuida al municipio por la presente Ley, se deberá fundamentar en el principio de subsidiariedad, así como se deberá justificar la proporcionalidad de la medida. En todo caso, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que sea necesaria, por imprescindible, una actuación unitaria sea en el plano territorial del Territorio Histórico o de la Comunidad Autónoma.

b) Que la homogeneidad requerida no pueda alcanzarse de forma suficiente mediante la asistencia técnica o a través de las fórmulas de intermunicipalidad previstas en la presente Ley o en las Normas Forales.

c) Que las concretas funciones atribuidas a las entidades forales o autonómicas sean estrictamente necesarias para la satisfacción de los intereses supramunicipales.

Artículo 31.- Potestades.

1.- A los municipios vascos les corresponden todas las potestades previstas en la legislación básica de régimen local.

2.- Las demás entidades locales ejercerán las citadas potestades, salvo la de establecer impuestos propios y la expropiatoria, con las salvedades y limitaciones previstas en las leyes y en las normas forales que les sean de aplicación.

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 32.- Cláusula general de competencias.

1.- Los municipios vascos, sin perjuicio de las competencias que se prevén en el artículo siguiente, dispondrán de competencias para ejercer la iniciativa en la ordenación y gestión de cualesquiera otra, siempre que no esté atribuida expresamente a otro nivel de gobierno y contribuya a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal.

2.- Asimismo, los municipios vascos podrán llevar a cabo actividades y servicios complementarios a los desarrollados por otras Administraciones Públicas.

Artículo 33.- Competencias municipales.

1.- Las competencias de los municipios vascos previstas en el presente artículo tendrán la condición de competencias propias

2.- En los casos de concurrencia competencial se actuará bajo los principios de coordinación y colaboración, a fin de evitar duplicidades innecesarias y garantizar en todo caso el mejor y más eficaz servicio a la ciudadanía.

3.- Los municipios vascos tendrán las siguientes competencias:

1) Espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos en los que se celebren u organicen aquellos En esta materia las competencias de los municipios, en los supuestos previstos y en el marco de lo dispuesto en la legislación autonómica, se extienden sobre los siguientes ámbitos:

- Ordenación de las condiciones y requisitos para el inicio de una determinada actividad de servicios en establecimientos de pública concurrencia en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas, así como su control, vigilancia, inspección y régimen sancionador.

- Otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos relativos a los espectáculos, actividades recreativas y los establecimientos públicos en los que se celebren, salvo que de acuerdo con la legislación vigente baste con una comunicación previa o una declaración responsable.

2) Desarrollo y aplicación de la normativa reguladora de la protección de animales y tenencia de animales potencialmente peligrosos.

3) Policía y seguridad ciudadana: En esta materia las competencias de los municipios se extienden sobre los siguientes ámbitos:

- Definir y aplicar políticas preventivas en materia de seguridad ciudadana en el ámbito local en coordinación con otras administraciones.

- Regular mediante ordenanza las relaciones de convivencia ciudadana en espacios públicos y locales de pública concurrencia,

- Regular mediante ordenanza el uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras e instalaciones de titularidad pública.

- Creación de cuerpos de policía local, así como su ordenación, planificación y gestión, en el marco de lo previsto en la legislación sobre policía y seguridad pública”.

4) Protección civil, prevención y extinción de incendios: En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:

- Elaborar y aprobar planes de protección civil y prevención y extinción de incendios, planes que deberán ser coherentes y estar coordinados con los que formulen las administraciones de ámbito supralocal.

- Aprobar ordenanzas que establezcan medidas preventivas, y en su caso reactivas, en relación con incendios, inundaciones u otro tipo de percances o calamidades.

- Crear y gestionar estructuras municipales de protección civil, así como servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.

- Ordenar la adopción de medidas extraordinarias que sean necesarias para proteger a la población en caso de incendio o catástrofe, pudiendo movilizar a las vecinas y vecinos, requisar equipos u ordenar el desalojo de edificios, entre otras, sin perjuicio de las atribuciones de otros entes sobre este ámbito.

- Promover la vinculación ciudadana en materia de protección civil a través de la figura del voluntariado, así como fomentar la creación de organizaciones de voluntariado.

- Elaborar y ejecutar programas municipales de previsión y prevención en colaboración con otras Administraciones competentes en la materia.

5) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso y sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas, sobre los siguientes ámbitos:

- Elaboración, tramitación y aprobación inicial, provisional y, en su caso, definitiva, de los planes generales de ordenación urbana.

- Elaboración, tramitación y aprobación de los planes e instrumentos de ordenación que sirvan para la compatibilización del planeamiento general, previo acuerdo de los municipios afectados.

- Ordenación, desarrollo, gestión y disciplina del suelo no urbanizable.

- Elaboración, tramitación y aprobación provisional y definitiva de los planes de ordenación pormenorizada.
 - Elaboración, tramitación y aprobación definitiva de los estudios de detalle, ordenanzas complementarias de la ordenación urbanística, catálogos y otros instrumentos de ordenación urbanística.
 - Autorización previa y elaboración, tramitación y aprobación de los planes de sectorización.
 - Elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ejecución urbanística.
 - Otorgamiento, en su caso, de licencias urbanísticas, salvo los supuestos que proceda una comunicación previa o declaración responsable.
 - Protección de la legalidad urbanística y restauración de la ordenación urbanística.
 - Procedimiento sancionador derivado de las infracciones urbanísticas.
 - Participación en la elaboración y diseño de los programas de ejecución de infraestructuras públicas cuando discurren por el respectivo término municipal.
- 6) Planificación, programación y gestión de viviendas. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:
- Elaboración y ejecución de la planificación de vivienda y participación en la elaboración y gestión de la planificación autonómica de vivienda.
 - Promoción y gestión de viviendas, sin perjuicio de la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma y en coordinación y colaboración con ésta.
 - Ordenación, promoción, gestión, adjudicación y control de equipamientos dotacionales y viviendas protegidas en sus diferentes categorías, de regulación municipal de nueva construcción o derivados de planes específicos de rehabilitación y renovación urbana.
- 7) Promoción, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, de acuerdo con la normativa ambiental. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:
- Formulación y gestión de políticas municipales para la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural y la biodiversidad.
 - Elaboración y aprobación de ordenanzas municipales de medio ambiente.
 - Otorgamiento de las licencias de actividades clasificadas, salvo en aquellos casos que se prevea una comunicación previa o declaración responsable, así como la vigilancia, control, inspección, supervisión y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a intervención municipal, de conformidad con la normativa ambiental.

- Impulso y programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación ambiental para la fomentar la sostenibilidad.
 - Participación efectiva en la elaboración de la planificación en materia ambiental.
 - La ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones.
 - La vigilancia, control, inspección, supervisión y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a intervención municipal, de conformidad con la normativa ambiental.
- 8) Promoción, defensa y protección de la salud pública, incluyendo lo relacionado con las drogodependencias. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:
- Elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud en consonancia con la planificación autonómica.
 - Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
 - Desarrollo de políticas de acción local y comunitaria con evaluación del impacto en salud de las mismas.
 - Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación para la salud y protección de la salud, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo.
 - Ordenación de la movilidad con criterios de sostenibilidad, integración y cohesión social, promoción de la actividad física y prevención de accidentes.
 - Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana.
 - Control sanitario oficial de la distribución de alimentos.
 - Control sanitario oficial de la calidad del agua de consumo humano.
 - Control sanitario de industrias, transportes, actividades y servicios.
 - Control de la salubridad de los espacios públicos.
 - Control sanitario de zonas de baño costeras y continentales.
 - Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias relativas al sacrificio de animales para las necesidades personales del criador.
 - Control de plagas urbanas.
 - Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.

9) Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:

- Elaboración y aprobación de Ordenanzas municipales sobre defensa y protección de las personas usuarias y consumidoras.
- La información y educación a las personas usuarias y consumidoras en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento a éstas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.
- La información y orientación a las empresas y profesionales en materia de consumo.
- El análisis, tramitación, mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan las personas consumidoras.
- La constitución, gestión, organización y evaluación de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor en su ámbito territorial.
- El fomento, divulgación y, en su caso, gestión, del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración autonómica, en los términos previstos en la legislación vigente.
- La inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora con el alcance máximo y facultades establecidas en la normativa autonómica.
- Adopción de medidas urgentes y requerimiento de las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que afecten a la salud y seguridad o intereses económicos de las personas consumidoras y usuarias.
- El fomento y apoyo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

10) Ordenación, planificación y gestión de cementerios.

11) Ordenación, planificación y gestión de los servicios sociales. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:

- Ordenación, planificación y gestión de sus propios servicios en materia de servicios sociales.
- Planificación de los servicios sociales municipales del Sistema Vasco de Servicios Sociales, de acuerdo con la planificación estratégica de las Administraciones autonómica y foral y el Mapa de servicios Sociales
- Creación, organización y gestión de los servicios sociales de base.
- Provisión de los servicios sociales de atención primaria del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales de acuerdo con la legislación reguladora de estos servicios.

- Protección a las personas menores de edad en situación de riesgo, sin perjuicio de las competencias propias de los Territorios Históricos.
- Fomento y promoción del tercer sector de acción social, así como la promoción de la participación ciudadana, el fomento del asociacionismo y del voluntariado y la participación de las personas usuarias y profesionales en la gestión y evaluación de los servicios sociales.
- Aportación de información actualizada referida a las prestaciones y servicios en su ámbito territorial de actuación.
- Fomento y la promoción, en coordinación con las demás administraciones públicas vascas, de la formación de los agentes y profesionales que intervienen en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
- Inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a los servicios, centros y entidades de su titularidad y con respecto a los servicios, centros y entidades privados concertados, contratados o, en su caso, convenidos, para la prestación de servicios de competencia municipal.
- En su caso, la elaboración y el desarrollo de los programas municipales para la inclusión social aprobados en ejecución del Plan Vasco de Inclusión Social.
- Tramitación y resolución de los procedimientos relativos a las ayudas de emergencia social y, en su caso, la realización de los pagos correspondientes a dichas ayudas, así como el seguimiento y control de las mismas y el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia.

12) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios en el ciclo integral del agua de acuerdo con los Reglamentos marcos correspondientes. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:

- El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.
- El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.
- El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento.
- La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas.

13) Ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público.

14) Ordenación, prestación y control de los servicios de gestión de residuos domésticos y, en su caso, comerciales no peligrosos, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de esos mismos residuos, todo ello de conformidad con la planificación marco de nivel territorial superior.

15) Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.

16) Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales.

17) Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, a los siguientes ámbitos:

- La ejecución de los programas de deporte escolar y para la extensión del deporte para todas las personas, aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, en coordinación con estos últimos.

- La construcción, ampliación y mejora de los equipamientos deportivos municipales así como su gestión y mantenimiento.

- La elaboración y aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso de los equipamientos deportivos municipales.

- La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial.

- La formulación de la planificación deportiva municipal, sin perjuicio de las competencias autonómicas y forales.

18) Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:

- La elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas.

- La gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y gestión de sus equipamientos culturales y su coordinación con otras del municipio.

- La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias culturales.

- Participación en el Sistema bibliotecario de Euskadi y en la red de lectura pública de Euskadi.

19) Protección y conservación del patrimonio histórico municipal y elaboración y aprobación de planes especiales de protección y catálogos.

20) En materia de turismo, los municipios tendrán, en todo caso, competencias sobre los siguientes ámbitos:

- La promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés.
- La declaración de interés turístico de lugares, bienes y servicios situados dentro de su territorio.
- La prestación del servicio de información turística de carácter local.
- La participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción del sector turístico en la Comunidad Autónoma.
- El diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad municipal.
- La colaboración con otras administraciones públicas en la promoción de zonas y recursos turísticos comunes.

21) En materia de educación, los municipios tendrán, en todo caso, competencias sobre los siguientes ámbitos:

- Participación en la programación de la enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
- Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la Administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.
- Gestión de la utilización de instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar, en coordinación con el Departamento competente en materia de Educación de la Administración de la C.A. a través de los procedimientos que se establezcan al efecto.
- Gestión de las escuelas municipales de música previo convenio con las instituciones autonómicas titulares de la competencia en el que se determinará el sistema de financiación de tales actividades.

22) Desarrollo económico y social local. En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en todo caso, sobre los siguientes ámbitos:

- Fomento del desarrollo económico y social local en el marco de la planificación autonómica.
- Elaboración de los planes estratégicos de desarrollo local.
- Prospección de las necesidades de los sectores económicos y del comportamiento del mercado de trabajo local.

- Colaboración en la ejecución de políticas activas de empleo municipales, como ente cooperativo con la Administración competente para la ejecución de las políticas activas. Para ello participaran en la gestión de programas y medidas de políticas activas de empleo y en particular en:

- intermediación laboral
- fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad en el mercado de trabajo
- la formación profesional para el empleo
- el fomento del empleo autónomo e iniciativas empresariales generadoras de empleo
- la promoción del empleo local

- Fomento de infraestructuras para la instalación de nuevas empresas.

- Promoción de todo tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, turístico y artesanal.

- Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos, así como regulación de la venta ambulante y no sedentaria de acuerdo con lo previsto en la legislación básica y autonómica.

- Autorización de ferias y mercadillos de apertura periódica así como la promoción del acondicionamiento físico de los espacios destinados a su instalación.

- Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones destinadas a la promoción de productos singulares.

23) En materia de euskera, los municipios tendrán, en todo caso, competencias sobre los siguientes ámbitos:

- Elaboración, aprobación y ejecución de los planes municipales del uso del euskera.

- Fomento del uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social, a fin de posibilitar a la ciudadanía el desenvolvimiento en dicha lengua en las diversas actividades mercantiles, culturales, asociativas, deportivas, religiosas y cualesquiera otras.

- Elaboración y aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora del uso del euskera en el ámbito municipal.

- Cooperación con la Administración de la Comunidad Autónoma en la enseñanza del euskera para personas adultas, previo convenio al efecto en el que se determinará el sistema de financiación de tales actividades.

24) En materia de igualdad y eliminación de todas las formas de discriminación, los municipios tendrán, en todo caso, competencias sobre los siguientes ámbitos:

- Ordenación general y planificación en materia de igualdad en el ámbito municipal.
 - Establecimiento y desarrollo de estructuras, programas y procedimientos para integrar la perspectiva de igualdad en su administración, así como aprobación de planes de igualdad en el empleo público.
 - Prestación de programas o servicios con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de quienes sufren discriminación.
 - Ordenación y gestión de recursos y servicios para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres, que por su naturaleza hayan de prestarse con carácter municipal.
 - Detección de situaciones de discriminación que se produzcan en el ámbito local y adopción de medidas para su erradicación.
 - Acogida e integración de personas inmigrantes.
- 25) Gestión del patrimonio municipal, la regulación de su uso y destino y su conservación y mantenimiento, de acuerdo, en su caso, con la normativa foral.
- 26) Gestión del padrón municipal de habitantes.
- 27) Ordenación y gestión de mataderos.
- 28) Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.
- 29) Conservación y mantenimiento de las vías públicas urbanas y rurales de titularidad municipal dentro del término municipal.
- 30) Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de personas y mercancías, para lo que podrán fijar los medios materiales, técnicos y humanos que se consideren necesarios.
- 31) Regulación y ordenación del tráfico y del establecimiento de vehículos en vías urbanas.
- 32) Provisión de medios materiales y humanos para el ejercicio de las funciones de los Juzgados de Paz, de acuerdo con la legislación.
- 33) Parques y jardines.
- 34) En materia de Juventud, los municipios tendrán, en todo caso, competencias sobre los siguientes ámbitos:
- Ordenación, gestión, inspección, control y ejercicio de la potestad sancionadora de actividades, servicios y equipamientos específicos para la juventud.

- Planificación y Programación municipal de los servicios a la juventud, de acuerdo con la planificación autonómica y foral.

35) En materia de cooperación para el desarrollo, los municipios tendrán, en particular, competencias sobre los siguientes ámbitos:

- Ordenación, programación y gestión de la cooperación técnica y económico-financiera municipal para el desarrollo, así como la acción humanitaria y de emergencia.

-Ejecución de los programas y acciones de cooperación al desarrollo.

Artículo 34.- Efectividad de las competencias municipales.

1.- Las competencias reconocidas a los municipios vascos en el artículo anterior de la presente Ley tendrán la condición de competencias mínimas. A través de Ley, y mediante la financiación pertinente, se podrán ampliar sus competencias, así como atribuir nuevas potestades o funciones sobre las materias consignadas en el artículo 33 de la presente Ley.

2.- Los municipios podrán ejercer por sí mismos o por medio de las fórmulas previstas en el Título VI de la presente Ley o en las respectivas Normas Forales de los Territorios Históricos las competencias previstas en esta Ley.

3.- Las competencias tasadas en la presente Ley representan los ámbitos de intervención normativa y ejecutiva de los municipios sobre las diferentes materias. No tienen, en ningún caso, la condición de servicios obligatorios. Los diferentes gobiernos municipales priorizarán, de acuerdo con sus políticas y con su capacidad de gasto, los servicios que ofrecen a sus ciudadanos de acuerdo con las competencias reconocidas en este Título.

4.- Las Diputaciones Forales, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica, prestarán asistencia técnica a los municipios del respectivo Territorio Histórico con la finalidad de garantizar la plena efectividad de las competencias atribuidas a los municipios por la presente Ley y cuando por sí mismos o asociados no puedan atenderlas.

5.- Los Territorios Históricos, de acuerdo con lo que se prevea en su propia normativa y conforme lo previsto en la legislación básica, asistirán económicamente a los municipios para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales. Asimismo, prestarán los servicios básicos municipales en caso de insuficiencia e incapacidad del municipio para llevarlos a cabo y siempre que éste lo solicite. Las Normas Forales de los Territorios Históricos regularán este deber de asistencia y prestación de servicios.

6.- Los Territorios Históricos podrán, asimismo, garantizar el ejercicio de competencias municipales promoviendo la creación de redes intermunicipales para la prestación de los servicios de competencia municipal de acuerdo con lo previsto en la presente Ley y lo que, en su caso, establezcan las Normas Forales.

Artículo 36.- Delegación y transferencia de competencias.

1.- La Comunidad Autónoma del País Vasco y los Territorios Históricos podrán transferir competencias o delegarlas en cualquiera de los municipios o entidades locales en el marco de la normativa actual y de la que, en el caso de los Territorios Históricos, se adopte por los Órganos Forales competentes.

2.- Mediante la aplicación de los institutos de la transferencia y delegación se podrá hacer efectivo el principio de diferenciación, especialmente aplicado en relación con aquellos municipios que dispongan de una dimensión adecuada y de capacidad de gestión suficiente para prestar eficazmente las competencias transferidas o la delegación de su ejercicio.

Artículo 37.- Transferencia de competencias.

1.- Mediante Ley del Parlamento Vasco se podrán transferir a los municipios vascos competencias propias de la Comunidad Autónoma.

2.- La Ley que proceda a la transferencia determinará el régimen jurídico de la misma.

3.- La Comunidad Autónoma podrá reservarse, cuando se estime oportuno, facultades de ordenación, planificación, coordinación general y control.

Artículo 38.- Delegación del ejercicio de competencias.

1.- La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios vascos o en otras entidades locales. La delegación se hará por medio de Decreto del Gobierno Vasco.

2.- La delegación respetará, en todo caso, la potestad de autoorganización de la entidad local. La competencia delegada se ejercerá con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control que puedan establecerse.

3.- Para la efectividad de la delegación se requerirá la aceptación expresa de la entidad local y la cesión en uso de los medios materiales, las dotaciones económicas y financieras, así como, en su caso, la adscripción de los recursos humanos necesarios para su ejercicio.

4.- El Decreto de delegación deberá recoger, al menos, las siguientes cuestiones:

a) Normas legales que justifican la delegación.

b) Funciones cuya ejecución se delega.

c) Medios materiales, personales, económicos y financieros que, en su caso, se ponen a disposición de la entidad local, así como la valoración y el procedimiento de revisión.

d) Valoración del coste efectivo del servicio.

e) Fecha de efectividad de la delegación y plazo de la misma.

f) Condiciones, instrucciones, directrices emitidas por la Comunidad Autónoma, así como mecanismos de control, facultades que se reserva y procedimiento de formulación de requerimientos que podrá conllevar, en su caso, la revocación de la delegación.

g) Obligaciones de la entidad local a la que se le delega el ejercicio de la competencia.

5.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto de delegación podrá suponer, previa audiencia a la entidad local y acuerdo del Consejo de Gobierno, la suspensión de la delegación y la avocación del ejercicio de las competencias por el Gobierno Vasco. Las entidades locales podrán renunciar a la delegación en los casos establecidos en el Decreto de delegación. En estos casos, el Gobierno Vasco determinará los mecanismos de liquidación de los recursos y cargas derivados del ejercicio o no de las competencias delegadas.

6.- El régimen de la delegación que se lleve a cabo por los Territorios Históricos a las entidades locales será el previsto en la normativa foral correspondiente.

Artículo 39.- Conflictos de competencias.

1.- Los conflictos de competencias entre entidades locales de la Comunidad Autónoma serán instruidos y resueltos por el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de régimen local.

2.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa de acuerdo con la legislación correspondiente.

3.- Cuando se trate de un conflicto positivo, la entidad local que estuviere conociendo del asunto suspenderá sus actuaciones en el caso de que fuere requerida de inhibición por el órgano competente en materia de régimen local de la CAPV. Si a pesar del requerimiento dicta resolución antes de resolverse el conflicto de competencias, tal resolución estará viciada de nulidad de pleno derecho.

4.- Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la resolución de dichos conflictos.

CAPÍTULO III

SERVICIOS OBLIGATORIOS

Artículo 40.- Servicios obligatorios.

1.- Tendrán la consideración de servicios obligatorios municipales los que con este carácter consten en la legislación básica local, en la legislación autonómica.

2.- Los poderes públicos vascos, en el ejercicio de sus respectivas competencias, cooperarán y promoverán para que la prestación de todos los servicios obligatorios sea igual en todos los municipios vascos independientemente de cuál sea el nivel de población, así como dotarán a éstos de la debida financiación.

Artículo 41.- Dispensa de las Diputaciones Forales.

En aquellos casos en que un municipio acredite de forma razonada que no dispone de recursos o medios para llevar a cabo un servicio obligatorio podrá solicitar la dispensa del mismo a la Diputación Foral del Territorio al que pertenezca, de acuerdo con el procedimiento que se prevea en la normativa foral correspondiente.

TÍTULO V

PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS: EL CONSEJO VASCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

Artículo 42.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

1.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales es un órgano colegiado que tiene como función hacer efectivas las relaciones de cooperación institucional de los municipios vascos con las instituciones autonómicas en aras a garantizar la ponderación de los intereses municipales en la toma de decisiones a nivel autonómico.

2.- En los Territorios Históricos vascos, de acuerdo con las potestades de autoorganización reconocidas a los mismos, los Órganos Forales podrán crear Consejos de Políticas Públicas Locales con la función y finalidades descritas en el apartado anterior.

Artículo 43.- Naturaleza del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

- 1.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales es el órgano de representación y participación de los municipios en las instituciones de la Comunidad Autónoma que tiene por función garantizar la autonomía local.
- 2.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, estará adscrito, únicamente a efectos presupuestarios, a la Presidencia del Gobierno Vasco.
- 3.- Para el ejercicio de sus competencias goza de autonomía orgánica y funcional. El Consejo adoptará su propio reglamento de organización y funcionamiento, en el que se desarrollarán las previsiones recogidas en la presente Ley.

Artículo 44.- Composición del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

- 1.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales estará presidido por el Lehendakari o por el Consejero o Consejera del Gobierno Vasco en quien delegue.
- 2.- El Presidente o Presidenta de la Asociación de Municipios Vascos más representativa, o persona en quien delegue, ejercerá la Vicepresidencia del Consejo.
- 3.- El Consejo de Políticas Públicas Locales tendrá una composición paritaria entre representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los Municipios Vascos. El Reglamento del Consejo determinará el número de vocales y la forma de designación de los mismos, si bien, las y los representantes municipales serán designados por la Asociación de Municipios Vascos más representativa, debiendo recaer sobre miembros de las tres fuerzas políticas con mayor implantación en cuanto a número de votos en las elecciones municipales de la Comunidad Autónoma, que en todo caso, tendrán que tener la condición de alcalde o alcaldesa o concejal o concejala.
- 4.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, para cumplir sus funciones, dispondrá de los medios y recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Artículo 45.- Funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

El Consejo tendrá las siguientes funciones:

- a) Participar en la elaboración de iniciativas normativas autonómicas, así como en planes y programas, cuando afecten a las competencias locales propias, informando sobre el impacto que aquellos puedan ejercer sobre dichas competencias, y pudiendo emitir al respecto juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad. Dichos informes no tendrán carácter vinculante.
- b) Formular propuestas, incluidas las de iniciativa legislativa, sobre todas aquellas materias que afecten a competencias propias de los municipios.

- c) Promover la colaboración interadministrativa e intercambio de información entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones locales.
- d) Debatir y poner en común de las diferentes políticas públicas de carácter sectorial que afecten a las competencias municipales y sus implicaciones en los diferentes niveles de gobierno.
- e) Promover sistemas de cooperación o, en su caso, de coordinación, para la gestión integrada de las políticas públicas por los diferentes niveles de gobierno.
- f) Manifiestar su posición respecto al planteamiento de recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional en aquellos casos en que se pueda ver afectada la autonomía local.
- g) Las atribuidas expresamente en esta Ley.

Artículo 46.- Participación en la preparación de Anteproyectos de leyes y decretos legislativos, así como proyectos de reglamentos y planes y programas que afecten a competencias propias de los Municipios.

1.- Los Anteproyectos de Ley o de Decreto Legislativo y los Proyectos de reglamento, planes y programas que afecten específicamente a competencias propias de los municipios (o, los intereses de los Entes Locales), en la fase del procedimiento de emisión de informes consultivos, deberán ser enviados por la Consejería correspondiente, al Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

2.- En el seno del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales se crea una Comisión Municipal de Políticas Públicas que tendrá asignadas las funciones que en este artículo se establecen. La Comisión Municipal será presidida por quien ostente la Presidencia de la Asociación de Municipios Vascos más representativa, o persona en quien delegue y estará exclusivamente formada por las y los representantes de los municipios vascos que formen parte del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

3.- La Comisión Municipal habrá de emitir informe en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud. Si en la orden de remisión se hace constar, motivadamente, la urgencia del informe, el plazo máximo para su despacho será de ocho días.

4.- Si las modificaciones propuestas por la Comisión Municipal fueran admitidas íntegramente por la Consejería, continuará la tramitación.

5.- Si no acoge todas o parte de las propuestas, deberá convocarse sesión del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales para que en el plazo de ocho días las delegaciones local y gubernamental de este órgano puedan debatirlas.

6.- De no alcanzar acuerdo ambas delegaciones, la Consejería proseguirá con la tramitación pero deberá elaborar un informe justificativo de las razones del rechazo de las propuestas de modificación planteadas en el informe de la Comisión Municipal.

7.- En el caso de los Anteproyectos de Ley o de Decreto Legislativo, tras su aprobación como Proyecto de Ley o de Decreto Legislativo, deberá remitirse al Parlamento, junto con el Proyecto, el informe justificativo de las razones del rechazo y las actas de las sesión o sesiones celebradas por la Comisión Municipal y por el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

TÍTULO VI

OTRAS ENTIDADES LOCALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

CAPÍTULO I

OTRAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 47.- Creación, modificación y supresión de otras entidades locales.

1.- Los órganos forales de los Territorios Históricos podrán crear, modificar y suprimir, dentro de su territorio, cualesquiera entidades que agrupen a varios municipios, de acuerdo con la legislación básica, esta Ley y la normativa foral correspondiente.

2.- Cuando la creación, modificación y la supresión de la entidad local afecte a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma, se requerirá informe previo del órgano competente de ésta en la materia de que se trate.

Artículo 48.- Entidades locales asociativas.

Las mancomunidades de municipios y otras fórmulas asociativas de entidades locales, para la ejecución en común de obras y servicios determinados, pertenecientes a un solo Territorio Histórico, se regirán por la normativa básica de régimen local y la emanada de los órganos forales del respectivo Territorio Histórico, sin perjuicio de los preceptos de esta Ley que les sea de aplicación.

Artículo 49.- Mancomunidades de municipios pertenecientes a más de un Territorio Histórico.

1.- Las mancomunidades de municipios pertenecientes a más de un Territorio Histórico se regirán por lo dispuesto en este artículo.

2.- Los ayuntamientos de los municipios que pretendan mancomunarse deberán acordarlo con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno.

3.- Los estatutos de la mancomunidad serán aprobados por los alcaldes o alcaldesas y concejales o concejales de todos los municipios promotores, constituidos en asamblea por mayoría absoluta, disponiendo del previo informe de las Diputaciones Forales interesadas. A continuación deberán ser aprobados por los plenos de cada uno de los ayuntamientos integrantes de la mancomunidad con la misma mayoría señalada en el párrafo anterior.

4.- Los Estatutos deberán contener, como mínimo, los siguientes puntos:

a) La denominación, sede y relación de municipios que integran la mancomunidad

c) La determinación de sus fines y la concreción de sus competencias.

b) Los órganos de gobierno y administración, así como la composición, forma de designación y cese de sus miembros.

d) Las normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, así como de gestión administrativa y, en su caso, de la gerencia.

e) Las aportaciones de los municipios integrantes y demás recursos económicos de la propia entidad.

f) Plazo de duración de la mancomunidad.

g) Procedimiento de modificación de los Estatutos, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

h) Procedimiento de incorporación y separación de municipios y posibilidad de que estos se asocien para alguna o algunas de las finalidades de la mancomunidad.

i) Las causas y el procedimiento de disolución de la mancomunidad, así como las normas sobre su liquidación.

j) El régimen indemnizatorio aplicable a los municipios por incumplimiento de sus obligaciones con la mancomunidad.

k) Previsiones sobre el régimen jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos en uso de los municipios que se separen de la mancomunidad.

5.- La potestad expropiatoria será ejercida, cuando proceda, por el municipio donde radiquen los bienes de necesaria ocupación siempre a petición y en beneficio de la mancomunidad, por la Diputación Foral si radican en municipios distintos del mismo Territorio Histórico o por la Administración de la Comunidad Autónoma si están situados en municipios pertenecientes a distintos Territorios.

6.- Sin perjuicio del respeto a la autonomía local en la determinación de los órganos de gobierno de la mancomunidad, de sus atribuciones y régimen de funcionamiento, sus respectivos Estatutos garantizarán que la composición del órgano de representación municipal asuma funciones de control y

asegure la presencia efectiva de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. Las y los representantes en el órgano de representación municipal se designarán por cada municipio de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.

7.- Los municipios de la Comunidad Autónoma podrán asimismo integrarse en mancomunidades con municipios pertenecientes a otras Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley y de acuerdo, asimismo, con la legislación que sobre esta misma materia se determine, en su caso, por la legislación de la otra u otras Comunidades Autónomas afectadas.

Artículo 50.- Redes de cooperación municipal y local.

1.- La cooperación territorial de los municipios y demás entidades locales podrá desarrollarse también a través de redes de ámbito autonómico o inferior, de conformidad con la normativa que les resulte de aplicación.

2.- Las redes municipales o de entidades locales de ámbito autonómico o de municipios o entidades de más de un Territorio Histórico podrán estar integradas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que se destinen a garantizar el ejercicio de competencias municipales y actúen en aras de salvaguardar los intereses de la ciudadanía.

3.- Las redes de cooperación territorial o algunos de sus miembros podrán crear entidades con personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.

4.- Las redes municipales o de entidades locales se constituirán mediante Convenio. Las Asociaciones de Municipios Vascos promoverán la constitución de redes municipales y podrán incorporarse a las mismas en los términos previstos en el apartado 2 de este mismo artículo.

Artículo 51.- Consorcios.

1.- Los municipios y demás entidades locales podrán constituir consorcios con otras administraciones públicas para fines de interés común. Asimismo podrán participar en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las administraciones públicas consorciadas.

2.- Los consorcios tienen la consideración de entidades locales a los efectos de esta Ley si están constituidos exclusiva o predominantemente por entidades locales para la prestación de servicios o realización de actividades que, de acuerdo con esta Ley estén atribuidas a la competencia de los municipios.

3.- Para la gestión de los servicios de su competencia, los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas previstas en la legislación de régimen local.

4.- Cuando el ámbito territorial de las entidades de derecho público que vayan a consorciarse no exceda de un Territorio Histórico, la constitución del consorcio se efectuará de conformidad con la normativa emanada de los órganos forales del respectivo Territorio Histórico.

Artículo 52.- Consorcios cuyo ámbito territorial exceda de un Territorio Histórico.

1.- Los consorcios en los que el ámbito territorial de las entidades de derecho público consorciadas se extiendan a más de un Territorio Histórico, sin exceder el de la Comunidad Autónoma, se regulará por lo dispuesto en este artículo.

2.- Los máximos órganos de gobierno de las entidades locales que pretendan constituir o integrarse en un consorcio deberán adoptar acuerdo en tal sentido con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. En el resto de las entidades que pretendan consorciarse, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior se adoptarán de conformidad con sus propios estatutos o normas de funcionamiento interno.

3.- Los estatutos del consorcio serán elaborados por una comisión formada por representantes de todas las entidades que pretendan constituir el consorcio y aprobados finalmente, en todo caso, por cada uno de los entes consorciados. En el caso de las entidades locales, esa aprobación lo será con la misma mayoría prevista en el número anterior.

4.- Los estatutos del consorcio regularán el régimen del funcionamiento del mismo y contendrán con las adecuaciones debidas las mismas menciones que las previstas en el artículo para las mancomunidades.

Artículo 53.- Áreas Metropolitanas que superen el ámbito territorial de un Territorio Histórico.

Por Ley del Parlamento Vasco se podrán crear Áreas Metropolitanas u otras entidades intermunicipales que extiendan su ámbito territorial a municipios de más de un Territorio Histórico. La Ley de creación determinará las competencias de esas entidades, los órganos que forman parte de las mismas y el resto de elementos que conforman su régimen jurídico.

CAPÍTULO II

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 54.- Gestión de servicios locales.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica del Estado y en esta Ley, el régimen jurídico y las formas de gestión de servicios públicos locales se determinarán por los respectivos municipios en uso de sus potestades normativas y de autoorganización. Las entidades locales aprobarán la reglamentación del servicio antes de comenzar a prestarlo y regulará al menos, las modalidades de prestación del servicio, situación, financiación y derechos y deberes de los usuarios.

Artículo 55.- Formas de gestión.

1.- Los servicios públicos locales pueden gestionarse directamente, a través de la propia entidad o mediante entidades o sociedades instrumentales a la misma. También podrán gestionarse indirectamente por medio de las modalidades contractuales y de colaboración previstas en la legislación vigente.

2.- La gestión directa podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades:

a) Prestación por la propia entidad.

b) Prestación por un organismo público, ya sea organismo autónomo o entidad pública empresarial.

c) Sociedad Mercantil local, cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente público de la misma.

d) Fundación pública local, en los términos previstos en la legislación aplicable.

3.- Las citadas modalidades de gestión se regirán por la legislación básica del Estado que les resulte de aplicación, por lo previsto en la presente Ley y por la propia normativa municipal que se apruebe en cada caso.

TÍTULO VII

FINANCIACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 56.- La Hacienda Local vasca.

1.- La Hacienda Local vasca está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de naturaleza económica de los municipios y del resto de entidades locales de Euskadi.

2.- La Hacienda de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regirá por las disposiciones que, referentes a las materias propias de aquella, aprueben los Órganos Forales de los Territorios Históricos, y por las normas de las propias Entidades Locales dictadas en ejercicio de su potestad reglamentaria y de autoorganización.

Artículo 57.- Principios básicos de actuación de las Haciendas Locales vascas.

1.- Las Haciendas Locales vascas actuarán de acuerdo con los siguientes principios básicos:

- a) Autonomía financiera, que se concretará en el ejercicio de las potestades de ordenación y gestión en materia económico-financiera y presupuestaria, sin perjuicio de las competencias sobre estas materias de los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
- b) Suficiencia financiera, que implica la disponibilidad por parte de las Haciendas Locales de los recursos necesarios para el ejercicio de las competencias atribuidas por la presente Ley, así como por otras Leyes del Parlamento Vasco o Normas Forales de los Territorios Históricos.

2.- Asimismo, las Haciendas Locales vascas actuarán de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, economía, eficacia, eficiencia, control, unidad de caja y racionalidad en la gestión de sus recursos.

3.- Las Haciendas Locales vascas ejercerán sus atribuciones de forma coordinada, solidaria y con corresponsabilidad con la Hacienda General del País Vasco y las Haciendas Forales de los Territorios Históricos.

Artículo 58.- Financiación incondicionada.

1.- La financiación de los municipios y demás entidades locales vascas será, por regla general, de carácter incondicionado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, por medio de Ley del Parlamento Vasco o Norma Foral de los Territorios Históricos, se podrán prever mecanismos de financiación condicionada que, en todo caso, se ajustarán a los siguientes criterios:

a) Los planes que, como consecuencia de esa normativa, se elaboren por las instituciones autonómicas o forales dirigidos a los municipios garantizarán la participación municipal en lo que respecta a la fijación de prioridades, procurando conciliar los intereses municipales con los intereses de ámbito autonómico o foral, en su caso.

b) Se deberá facilitar la gestión económica con carácter plurianual, pudiendo la entidad local planificar las inversiones, así como decidir y elegir de conformidad con sus planes de actuación municipal y sus prioridades.

c) Los servicios que se presten como consecuencia de sistemas de financiación condicionados deberán garantizar la calidad a sus destinatarios y asegurar la continuidad de su prestación en el tiempo.

Artículo 59.- Régimen de las nuevas obligaciones y servicios municipales.

1.- Sólo por Ley del Parlamento Vasco se podrán establecer nuevas obligaciones a cargo de los municipios y demás entidades locales o atribuirles nuevos servicios que supongan cargas financieras adicionales.

2.- La Ley que establezca tales obligaciones o servicios determinará, en todo caso y de forma simultánea, los medios de financiación necesarios que garanticen el cumplimiento de tales obligaciones o la prestación de los citados servicios.

3.- Asimismo, a efectos de garantizar los principios de autonomía y suficiencia financiera de los municipios y demás entidades locales vascas, la memoria económica que acompañe a los Proyectos de Ley deberá contener un análisis del impacto que, en su caso, puedan producir sobre los presupuestos de las entidades locales.

4.- La propia norma deberá establecer los medios y procedimientos que permitan su aplicación con pleno respeto a los principios de autonomía y suficiencia financiera. Cuando la norma no contemple de ninguna manera los referidos medios y procedimientos, el incumplimiento de dicho requisito eximirá de la aplicación de dicha norma a aquellas entidades locales cuyos presupuestos se vean afectados por el incremento de gasto que conlleve. La mera discrepancia sobre la validez de los medios y procedimientos establecidos, no permitirá la exención de la aplicación de la norma, sin perjuicio del derecho a ejercer la correspondiente impugnación.

Artículo 60.- Régimen de adquisición, destino y prescripción de derechos.

1.- La adquisición de los derechos de las Haciendas Locales tendrá lugar de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica por la que cada uno de ellos se regule.

2.- Salvo que se estableciera otra cosa en la normativa específica de cada ingreso, el producto del mismo se destinará a financiar el conjunto de las obligaciones de las que sea titular la entidad. Cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a fines determinados, no se requerirá disposición expresa de afectación siempre que aquéllas sean aceptadas conforme a la normativa en cada momento vigente.

3.- Los derechos de las Haciendas Locales están sometidos a prescripción en los términos establecidos en las disposiciones aplicables de manera específica, directa o supletoriamente, a cada uno de aquéllos.

Artículo 61.- Asunción y efectividad de obligaciones.

1.- Los municipios y demás entidades locales de Euskadi asumirán las obligaciones que les impongan directamente las Leyes que les sean aplicables, así como las que se deriven de hechos, actos y negocios jurídicos, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.

2.- Incurrirán en nulidad de pleno derecho las disposiciones de carácter general, resoluciones y actos administrativos dictados por la entidad local por medio de los cuales se pretendan adquirir compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos de carácter limitativo autorizados en el estado de gastos del presupuesto de la respectiva entidad.

3.- Las obligaciones de pago de cantidades a cargo de las entidades locales y de sus organismos autónomos solamente serán efectivas cuando se deriven de la ejecución de sus presupuestos, de sentencia judicial firme y de operaciones de tesorería.

Artículo 62.- Régimen de endeudamiento y concesión de garantías.

En los términos en que se prevea por las normas que dicten los Órganos Forales de los Territorios Históricos, los municipios y demás entidades locales vascas, sus organismos públicos, entidades adscritas y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, así como aquellas operaciones financieras accesorias destinadas a asegurar, disminuir o diversificar su riesgo o coste.

CAPÍTULO II

FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS VASCOS Y DEMÁS ENTIDADES LOCALES

Artículo 63.- Régimen de participación de los municipios en los tributos concertados.

1.- Las haciendas locales participarán en el rendimiento de los tributos que los Territorios Históricos obtengan en virtud del Concierto Económico, una vez descontado el Cupo a satisfacer al Estado, las Aportaciones a la Comunidad Autónoma y el resto de los conceptos previstos en la Ley de Aportaciones vigente.

2.- La participación se determinará en función de los siguientes parámetros:

a) Las competencias y los servicios de los que sean titulares los municipios y demás entidades locales de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

b) Los rendimientos de los tributos de las haciendas locales y el resto de sus ingresos propios.

3.- El Consejo Vasco de Finanzas Públicas aprobará la metodología para la determinación de los recursos y la fijación del coeficiente en que participará el nivel municipal en los tributos concertados. La citada metodología se incorporará al proyecto de Ley de Aportaciones previsto en la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de manera que su régimen de aprobación y su vigencia temporal sea el mismo que el de la citada Ley de Aportaciones.

Artículo 64.- Determinación de la participación en cada Territorio Histórico.

1.- La determinación de la participación que en cada Territorio Histórico corresponde a cada una de las entidades locales del mismo, es competencia de los órganos forales de dicho Territorio Histórico, y en consecuencia, la ejercerá libremente.

2.- No obstante, el Consejo Vasco de Finanzas establecerá con carácter de mera recomendación de política fiscal, los criterios para el citado reparto que serán esencialmente iguales para todos los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y atenderán al principio de suficiencia financiera, a estimular el esfuerzo fiscal, a procurar una política de gasto corriente global equitativa y solidaria y a la moderación en el crecimiento de los gastos corrientes.

3.- El Consejo Vasco de Finanzas establecerá los citados criterios atendiendo a:

a) fundamentalmente el volumen de población

b) otras realidades tales como:

- La población escolar atendida en centros públicos.
- El esfuerzo fiscal municipal.
- La capitalidad en cada Territorio Histórico.
- La población inmigrante.
- La dispersión.
- El desempleo.

4.- Los Territorios Históricos podrán apartarse de dichos criterios mediante acuerdo motivado adoptado por el órgano foral competente.

Artículo 65.- Aplicación y liquidación.

1.- La financiación que, conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponde a los Municipios y demás Entidades locales, constituirá un recurso ordinario de sus respectivas Haciendas locales para el sostenimiento y prestación de todos los servicios de su competencia, conforme a la normativa que resulte de aplicación.

2.- Los importes que resulten para cada ejercicio y que hayan sido puestos a disposición de los Municipios y demás entidades locales en cada Territorio Histórico, serán objeto de liquidación definitiva

a la finalización del ejercicio, de acuerdo con los datos reales relativos a los ingresos procedentes de la recaudación por tributos concertados y demás elementos considerados para su determinación.

Artículo 66.- Participación en los tributos no concertados.

La participación de los municipios y demás entidades locales en los ingresos por tributos no concertados se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico y la normativa específica que sea de aplicación.

TÍTULO VIII

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 67.- Procedimientos sancionadores.

1.- En los procedimientos sancionadores las Ordenanzas municipales podrán sustituir las multas, previo consentimiento de la persona afectada, por trabajos de valor equivalente para la comunidad local y proporcionales a la gravedad de la infracción, cuando así lo acuerde el órgano sancionador.

2.- Las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otras puedan cometer, serán responsables solidarias de los daños que se hubiesen podido ocasionar como consecuencia de las conductas infractoras.

Artículo 68.- Legitimación a las Asociaciones de Municipios Vascos para la negociación colectiva.

1.- Las Asociaciones de Municipios Vascos de acuerdo con lo previsto en la legislación básica tienen legitimación para la negociación colectiva de las y los empleados públicos de los municipios vascos y demás entidades locales.

2.- Los municipios vascos podrán adherirse, mediante acuerdo adoptado al efecto, con carácter previo a la negociación colectiva que lleven a cabo las Asociaciones de Municipios Vascos. En tal caso, los Acuerdos alcanzados esas Asociaciones obligarán, desde su suscripción, a los municipios o entidades locales adheridas.

3.- Los municipios vascos podrán adherirse sucesivamente a la negociación colectiva que haya realizado la Asociación de Municipios Vascos y a los Acuerdos adoptados a través de la misma.

Artículo 69.- Ofertas de Empleo Público conjuntas y procedimiento selectivos comunes.

1.- Mediante Convenio suscrito al efecto con el Instituto Vasco de Administración Pública, y previo Acuerdo adoptado por el municipio o entidad local correspondiente, se podrán incorporar las Ofertas de Empleo Público municipales en la propia de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Territorio Histórico.

2.- Igualmente, previo Acuerdo municipal o de la entidad local correspondiente, se podrá suscribir un Convenio con el Instituto Vasco de Administración Pública con la finalidad de que las convocatorias de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal funcionario o de personal laboral de las entidades locales sea realizada por el propio Instituto. En los citados Convenios se preverá expresamente las obligaciones financieras que se derivan de tales prestaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Asociación de Municipios Vascos más representativa.

1.- A la Asociación de Municipios Vascos que ostente la condición de asociación más representativa le corresponderá la representatividad pública en el plano institucional de Euskadi en todos los ámbitos que así se determine.

2.- La Asociación de Municipios Vascos más representativa ejercerá, en todo caso, las funciones que, en su caso, se le puedan conferir de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Régimen jurídico del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal.

Hasta la entrada en vigor de la normativa autonómica de función pública de desarrollo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público, el régimen jurídico del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal será en la CAPV el actualmente vigente, teniendo en cuenta las siguientes normas:

1. Los nombramientos como personal funcionario de quienes hayan superado las pruebas selectivas de acceso a las distintas subescalas que componen la escala del personal funcionario con habilitación de carácter estatal se hará por orden del Consejero o Consejera del departamento competente en materia de función pública.
2. En las declaraciones de situaciones administrativas y de cuantas incidencias afecten a su carrera profesional se harán por resolución del director o directora de función pública siempre que la competencia no esté atribuida a otro órgano.
3. Son órganos competentes para la iniciación de expedientes disciplinarios:
 - a) Quien ostente la alcaldía o presidencia de la entidad local, en todo caso, o la autoridad que, por delegación de aquel ostente la jefatura directa del personal. La entidad local

podrá solicitar de la dirección de función pública de la Administración autonómica el nombramiento de instructor o instructora del expediente disciplinario si careciera de medios personales para su tramitación.

- b) La dirección de la función pública de la administración autonómica cuando se trate de faltas cometidas en una entidad distinta de aquella de la que se encuentre prestando servicios, siempre que ambas sean de la CAPV, o cuando por la gravedad de los hechos denunciados, pudiera dar lugar sanción de destitución del cargo o de separación del servicio.
4. Son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente disciplinario:
- a) El Consejero o la Consejera competente en materia de función pública cuando se trate de imponer sanciones que impongan la destitución del cargo o la separación del servicio.
 - b) El pleno de la entidad local, cuando se trate de sanciones no comprendidas en el párrafo anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.- Se consideran derogadas las siguientes disposiciones normativas:

- a) El Decreto 326/1994, de 28 de julio, por el que se crea el Consejo Municipal de Euskadi.
- b) El Decreto 364/1987, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento para la adopción o modificación de signos distintivos de los entes locales.
- c) El decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios del País Vasco.

2.- Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan a lo previsto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificaciones de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Uno.- Funcionamiento del Consejo Vasco de Finanzas Públicas y municipios.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“El Consejo Vasco de Finanzas Públicas se entenderá asimismo constituido a los efectos del ejercicio coordinado con la Hacienda General del País Vasco de la actividad financiera del conjunto del nivel institucional municipal de Euskadi y su sector público, especialmente para la aprobación de la metodología para la determinación de los recursos y la fijación del coeficiente en que participará el nivel municipal en los tributos concertados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, e igualmente a los efectos del ejercicio de la función prevista en el artículo 64 de esta Ley.”

Dos.- Participación de los Municipios Vascos en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

Se añade un párrafo al número 4 del artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“También se reunirá el Consejo a petición de cualquiera de las y los representantes del nivel municipal para los asuntos de su interés.”

Tres.- Se añade un apartado nuevo al artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“10.- No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 5 de este artículo, en los términos que a continuación se indican, se incorporarán al Consejo Vasco de Finanzas Públicas tres representantes de los Municipios vascos designados por la Asociación de Municipios Vascos con mayor implantación. A efectos de garantizar la pluralidad política de la representatividad de los Ayuntamientos Vascos, las referidas designaciones deberán recaer sobre miembros de las tres fuerzas políticas con mayor implantación en cuanto a número de votos en las elecciones municipales en la Comunidad Autónoma, que deberán tener en todo caso la condición de concejal o concejala electa.

Las y los representantes municipales asistirán al mismo con voz pero sin voto cuando se traten asuntos que no les afectan directamente, pasando a actuar como miembros de pleno derecho cuando se trate de la aprobación de la metodología para la determinación de los recursos y la fijación del coeficiente en que participará el nivel municipal en los tributos concertados dispuesta en el artículos 63-3, así como para el ejercicio de lo previsto en el artículo 64 de esta Ley y, en cuanto afecte directamente a los municipios, en el número tres de la Disposición Adicional Segunda de la LTH.

Cuando las y los representantes municipales intervengan con voz y voto, para la adopción de acuerdos será preceptiva la aprobación de los mismos por mayoría absoluta, siempre que dicha mayoría incluya al menos una persona representante de cada nivel institucional.

Cuatro.- Se añade un apartado nuevo al artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“11.- El Consejo podrá solicitar asesoramiento y recabar los datos que considere necesarios de los municipios vascos y de la asociación municipal más representativa. Los municipios vascos y la asociación municipal más representativa están obligados a facilitar datos y demás información en los

mismos términos que los previstos para la Administración de la Comunidad Autónoma para las Diputaciones Forales en los números anteriores de este artículo.”

Segunda.- Puesta en funcionamiento del nuevo sistema.

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley se convocará al Consejo Vasco de Finanzas Públicas para la designación de los nuevos consejeros y consejeras municipales y para la aprobación de una nueva propuesta de “Ley de aportaciones y participación” en cumplimiento de esta Ley, que deberá ser eficaz en el siguiente ejercicio presupuestario, con independencia del periodo que reste de vigor a la vigente Ley de Aportaciones.

Tercera.- Elaboración del Reglamento del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

Para la elaboración del Reglamento del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, se constituirá en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un primer Consejo con seis miembros, tres designados por la Asociación de Municipios Vascos más representativa en representación de los municipios vascos y otros tres designados por la Presidencia del Gobierno Vasco, que tendrá como función la elaboración y aprobación en el plazo de dos meses del Reglamento del Consejo.

Cuarta.- Habilitación para desarrollo y ejecución.

Se autoriza al Gobierno Vasco para, en el ámbito de las competencias autonómicas, dictar las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente Ley.



TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA /
LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ.

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE EUSKADI.
EUSKADIKO UDAL LEGEAREN PROIEKTUA

EUSKADIKO UDAL LEGEAREN PROIEKTUA

ZIOEN AZALPENA

I.-

Euskadiren instituzionalizazio prozesua, autogobernua berreskuratu zenetik hogeita hamar urte baino gehiago igaro diren arren, bukatu gabe dago oraindik. Izan ere, Autonomia Erkidegoari eta foru-administrazioei dagokienez, amaituta zegoen prozesua, baina, oraindik ere, Euskadiko Udalen Legea geratzen zen onartzeko.

Planteamendu hori aintzat hartuta, Euskadiko Udalen Legea beharrian objektiboa izan da, zalantzan jarri ezin dena. Euskadin, gaur egun, tokiko araudi-esparrua nahiko mugatua dela esan daiteke. Egia da, hala ere, botere politikoa banatzeko daukagun sistema dela-eta, Lurralde Historikoei onartutako foru-arauek tokiko esparruarekin lotutako arlo asko arautzen dituztela, eta badirela, era berean, Eusko Jaurlaritzak bere sasoian onartutako erregelamendu mailako arau gutxi batzuk. Halaber, egia da Eusko Legebiltzarrak legegintza-lan nabarmena egin duela hainbat sektoretan, eta horrek eragin handia izan duela udalen eskumenetan (polizia, hirigintza, ingurumena, gizarte-zerbitzuak, etab.).

Hala eta guztiz ere, beharrezkoa da, zalantzarik gabe, udal-gobernuaren espazioa arautuko duen arau-esparrua. Beraz, Euskadiren barne-antolaketa osatzeko, behar-beharrezkoa zen Udalen Legea onartzea, Erkidego osorako erakundeen, Lurralde Historikoetako foru-organoen eta udalen arteko artikulazio instituzionaleko prozesua ixteko.

Gainera, onartu egin behar da behingoz EAEko udalak Euskadiko erakunde-egituran jarduten duten oinarrizko hiru gobernu-mailetakoko bat direla, eta, beraz, lurraldeko herri-aginte publikoa direla ondorio guztietarako. Beharrezkoa zen, ondorioz, erakundeen artean dagokion lekua egitea EAEko udalei, horrela, udalek aukera izan dezaten —erakundeetan parte hartzeko lege honetan ezarritako organoen bidez— beren herritarrei zuzenean eragiten dieten eta udal-eskumenak baldintzatzen dituzten politika publikoak diseinatu eta gauzatzeko. Udal-autonomiaren defentsa eta bermea, era berean, EAEko udalen beharrian objektiboak dira, eta arau-esparru honek onartu egiten du hori.

Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluan onartzen denez, Autonomia Erkidegoak eskumen eskusiboa dauka tokiko gobernu-mailari dagokion erakunde-esparruaren gainean, Estatuak arlo horretan eman ditzakeen oinarrizko legeen kalterik gabe. Baina Euskadiko erakunde-sarean, Konstituzioaren eta Estatutuaren arabera, Lurralde Historikoei zeregin berezia daukate, eta, horren ondorioz, gure botere politikoen barne-antolaketan, foru-eskumen batzuk tokiko esparruaren arlo jakin batzuetan sartzen dira eta udalerrien araubide juridikoaren alderdi garrantzitsuei eragiten diete. Izan ere, horrela dator jasota Autonomia Estatutuan (37.3 artikulua), eta berariaz onartzen da Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako foru-organoen arteko harremanetarako azaroaren 25eko 27/1983 Legean. Eta, jakina, foru-eskumenen barruan dagoen tokiko esparru hori aintzat hartu behar du Eusko Legebiltzarrak Euskadiko Udalen Legea egin eta onartzean.

Beraz, arlo honetan Lurralde Historikoei dagozkien eskumenen kalterik gabe, Euskadiko Udalen Legearen helburua da —tokiko autonomiaren printzipio konstituzionalari garrantzia berezia emanaz— udalen gobernu-mailarentzat erabaki politikoak hartzeko espazio zabalak gordetzea. Horrek nahitaez dakar Autonomia Erkidegoko botereek eta foru-botereek udalen erakunde-esparruan esku hartzeko ahalmenei muga zehatz batzuk jartzea.

II.-

Helburu hori lortzeko eta EAEko erakunde-sarean udalerrien posizioa bermatzeko, Udalen Legea araugintza-politikako helburu batzuen inguruan egituratu da. Helburu horiek, zeharkakoak direnez, zuzenean eragiten dute edukian, eta Legea aplikatzeko orduan gidari izan behar dute.

Udalen Legearen lehen helburua da udalaren (erakunde gisa hartuta) eta herritarren arteko elkarrizketa hobetzea, baita euskal herritarren bizi-kalitatearen garapen iraunkorra bultzatzea ere. Udalerriak —eta zehatzago udalak— dira herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak, eta, beraz, herritarren beharrez ondoen jabetzen direnak. Herritarren beharrez behar bezala erantzuteak eta herritarren bizi-kalitate arrazoizkoa bermatzeak ematen diote legitimazioa udalerrinari erakunde gisa. Eta erantzukizun instituzionalak (eskumenak) banatzeko sistema argia eta zehatza ezarri baino ez da lortuko hori. Era berean, horretarako, udalak finantzatzeko sistema egokia ezarri beharko da, udalen erantzukizunak zuzen gauzatu ahal izateko eta tokiko zerbitzu publikoak behar bezala eskaini ahal izateko.

Euskadiko Udalen Legearen bigarren helburua udal-autonomia bermatzea da. Horretarako, autonomia horren aitortpen formala egiteaz gain, beharrezkoa da erabat eta benetan bermatzea autonomia hori, EAEko udalek benetako ahalmena izan dezaten udalei dagozkien gaiak eta arazoak oso-osorik beren erantzukizunpean antolatu eta kudeatzeko. Hori dela eta, Legeak udal-autonomia bermatzeko sistema zehatza egituratu du, ohartarazpen mekanismo bat sartuta, Tokiko Autonomiaren Europako Gutunean jasotako printzipioen irakurketa behin-behinean egokia eginez (XXI. mendearen gainean proiektatuta). Hori, zalantzarik gabe, tokiko autogobernua indartzeko orduan, Espainiako estatuan egin den esperientzia aurrendarietako bat da.

Udalen Legearen hirugarren helburua da euskal udalei dagokien lekua ematea euskal botere publikoen artean. Beraz, kontua da udalerria printzipio demokratikoaren arabera osatutako lurraldeko herri-agintea dela aitortzea. Eta udalerraren legitimitatea eta kalitate demokratikoa, Autonomia Erkidegoko edo Lurralde Historikoetako organo eta erakundeak eratzeko behar den bestekoa da gutxienez.

Printzipio demokratikoa, beraz, EAEko udalen konfigurazioaren oinarrian dago, eta, gainera, udalek herritarren partaidetzarako hainbat baliabide dituzte, dagozkion hauteskunde-prozesuen bidez osatzen den ordezkapen demokratikoko sistemaren kalitatea hobetzen lagundu ahal izateko.

Laugarren helburua (geroago garatuko da zehatzago), zalantzarik gabe, udalerriei ahalmen zabalak ematea da, eskumen propioen sistema batean islatuko direnak; udal-autonomia bermatzeko gutxiengo estandarra izango baita hori. Edo, beste era batera esanda, kontua da udal-eremua, Euskadin, behar bezala zedarritutako botere politiko gisa eratzea, jarduera esparru zehatza emanaz, eta beste gobernu-mailek ez dezatela izan udalaren esparru horretan unean-unean eta ustekabean sartzeko aukerarik.

Eta, azkenik, bosgarren helburua indar-ideia honetan oinarritzen da: EAEko udalerriek finantziazio egokia eta behar bestekoa izan behar dutela, udalerrien eskumenak zuzen gauzatu ahal izateko.

Horrela, udal-finantziarioa, udalen berezko eskumenekin batera, Euskadiko Udalen Legearen ardatz bilakatu da. Udal-finantziarioa bermatu gabe, ezinezkoa da zuzentasunez udal-autonomiaz aritzea. Ildo horretatik, nabarmentzekoa da Euskadiko Udalen Legea, beste lege autonomiko batzuk ez bezala, edo tokiko arloan Estatuak eman duen oinarrizko legeria ez bezala, udal-esparru instituzionalaren lege integrala dela (arloan horretan Lurralde Historikoetako foru-organismoek dituzten eskuduntza garrantzitsuen kalterik gabe); izan ere, udalen berezko eskumenak arautzeaz gain, finantziario arloan araugintza-erabaki oso garrantzitsuak hartu dira bertan.

Udalen Legea, beraz, funtsezko elementua izango da, EAEko erakunde-sistemaren muin-muineko osagaia, eta, ondorioz, arlo horretan daukan zeregin garrantzitsua dela-eta, Euskadiren instituzionalizazio-prozesua ixten duen legetzat hartu beharko da.

Ondorioz, Udalen Legea eduki instituzional argia daukan legea da, eta Autonomia Estatutua bera garatuz, Lurralde Historikoen Legean ezarritakoa osatzen du (eta, punturen batean, zuzendu edo zehaztu ere egiten du).

Udalen Legearen konfigurazio horrek, lege instituzional gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arbitraje-batzordeak bere sasoian Lurralde Historikoen Legeari buruz emandako doktrinarekin bat etorrituz, begi-bistako ondorioak izan behar ditu Eusko Legebiltzarrak onartutako gainontzeko lege sektorialekiko harremanari dagokionez.

Beraz, legeria sektorialak Udalen Legean edozein aldaketa badakar, Lurralde Historikoen Legearako ezarri denari jarraituz, bermatu egin beharko litzateke, edukian edozein aldaketa egiteko, aldaketa horiek Udalen Legea bera aldatuta edo indargabetuta egitea. Beste era batera esanda, Udalen Legearen edukian zerbait aldatzeko, Udalen Legean bertan egin beharko litzateke aldaketa.

Udalen Legea berariaz eduki instituzionaleko lege gisa eratuta, batez ere, Legearen edukia babestu nahi da, eta, bereziki, babestu egin nahi dira udalerriek berez dituzten eskumenak, aurrerantzean EAEko legegileek har ditzaketen erabakietatik. Izan ere, Udalen Legean ezarritakoa aldatu edo indargabetu beharko balitz, indargabetzea edo aldaketa zuzenekoa eta berariazkoa izan beharko litzateke, Legeak euskal erakunde-sisteman eta Autonomia Estatutuaren beraren garapenean betetzen duen funtzio instituzionala aintzat hartuta.

III.-

Udalen Legeak, hasieran, atariko titulu bat dauka, hurrengo zazpi tituluak zazpi gai zehatzi buruzkoak dira, eta, ondoren, *beste xedapen batzuk* izeneko titulu orokor bat dator. Azkenik, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken xedapen ditu. Atariko tituluan, xedapen orokor batzuek legearen ezaugarriak, legearen helburuak, arau-esparru berri hau zein printzipiotan oinarritzen den, toki-erakunde ezaugarriak eta erakunde horien erregistro administratiboa lantzen dituzte. Zalantzarik gabe, Autonomia Erkidegoak Estatutuan aitortutako

eskumenak ditu tokiko gobernu-sistema arautzeko, eta, zehatzago, udalerriak arautzeko, Estatutuaren 10.4 artikuluan ezartzen denez.

Egia da Erkidegoaren eskumena mugatuta dagoela; batetik, toki-araubideko legerian ezarritakoak edo ezar daitekeenak mugatzen du, eta, bestetik, Lurralde Historikoetako foru-organismoek tokiko esparruko hainbat alderdi garrantzitsuren gainean dituzten eskumenek mugatzen dute, Estatutuaren 37.3 artikuluan eta Lurralde Historikoen Legean ezarritakoarekin bat etorritik. Eskumenen muga bikoitz horrek ez du, ez, errazten EAEko legegileak esparru hau eratzeko duen zeregina. Dena dela, aipatzekoa da Udalen Legeak erabat errespetatzen dituela Estatuko oinarrizko legeria —tokiko autonomiaren gutxieneko estandar gisa hartu behar da legeria hori, eta lege honen bidez puntu batzuk garatu edo indartu baino ez dira egiten— eta Lurralde Historikoetako foru-organoen berezko eskumenak, araudi honetan behar bezala errespetatzen baitira.

Horrela, bada, erakunde erkideek esparru instituzional honetan dituzten eskumenak garatzen dituen legea da hau. Puntu horretan, EAEko legegileak ondo daki, eskumenen kanpoko eta barneko banaketa kontuan hartuta, legegile mugatua dela. Hori dela-eta, Autonomia Erkidegoak —zentzu hertsian ulertuta— eskumenak dituen puntuetan baino ez du jarduten legegileak. Beraz, gero, foru-botere araugileak, udal foru-arauen bidez zein foru-arau berezien bidez, bere eskumenak gauzatu beharko ditu (orain arte horrela egin izan du) edo, egingarri den kasuetan, lege honetan ezarritako eskumenak garatuko ditu.

Printzipioei dagokienez, legean printzipio-zerrenda zehatza jaso da. Lehenengo eta behin, udal-autonomiaren printzipioa dago; zalantzarik gabe, tokiko autonomiaren printzipioa ondoen adierazten duena da, eta printzipio demokratikoaren arabera udal-autogobernuak daukan dimentsio politikoaren bidez gauzatzen da. Bigarrena finantza-nahikotasunaren printzipioa da; berariaz jasota dago Tokiko Autonomiaren Europako Gutunean, eta udalerriek beren eskumenak gauzatzeko behar dituzten baliabideak izateko eskubidean islatzen da. Printzipio horiekin batera, autoantolaketa-printzipioa, hurbiltasun-printzipioa, elkartasun- eta jasangarritasun-printzipioa eta herritarrek tokiko zerbitzu publikoetara jotzeko berdintasunaren printzipioa (tokiko autonomiaren adierazpiderik handiena) azaltzen dira.

Baina zerrenda hori osatu gabe egongo litzateke, printzipio horiek eskumenen betearazpenari nola eragiten dioten zehaztu ezik. Eta Udalen Legeak, hain zuzen ere, arlo horretan jasotzen du finantza-nahikotasunaren printzipioak eskumenetan duen eragina, baita subsidiarotasun-printzipioak, proportzionaltasun-printzipioak eta bereizte-printzipioak ere, oso garrantzitsuak baitira arauak ezartzeko ahala gauzatzeko orduan (EAEko legegileak ahal horiek gauzatzeko orduan eta foru-botere araugileak ahal horiek gauzatzeko orduan), arau-xedapen horien gainean, hala badagokio, egin daitekeen kontrol jurisdikzionalari dagokionez.

Udalerrria eta udal-autonomia arautzen dira I. tituluan. Dударik gabe, EAEko tokiko gobernuaren sisteman, Lurralde Historikoen berezitasuna dela-eta, udalerrria da tokiko erakunde nagusia. Titulu horren hasieran —eta Tokiko Autonomiari buruzko Europako Gutunean ezarritakoaren arabera— definitzen da noraino heltzen den udalen autonomia, tokiko autonomiaren adierazpiderik handiena den

aldetik, zeinak, betiere, udalerrriaren ardura diren gai publiko guztien antolamendua eta kudeaketa hartzen dituen. Orobat, Lurralde Historikoen eredu instituzionalean duten eginkizuna zehazten da, oinarrizko legerien arabera, udalek berez dituzten eskumenen gauzapena indartzeko balio baitute. Udalerriri buruzko zenbait kontutan Lurralde Historikoen dituzten eskumenak ere zehazten dira I. tituluaren.

II. tituluaren xedea auzotarren estatutua da. Estatutu hori zenbait eskubide eta betebeharretan banatzen da, baita herritarrek informazioa jasotzeko eta parte hartzeko eskubideari buruzko printzipioetan eta arauetan ere. Herritarren betebeharren edo erantzukizunen atala izan da, hain zuzen, gutxien garatu ohi dena gure toki-legerian; hala ere, auzotarrek udalerriko partaide izatearen sentimendua areagotu egiten da, herritarrak diren aldetik dituzten erantzukizunak eta herritartasunaren ideiarekin batera doazen balio zibikoak bere gain hartu ahala. Eskubideen katalogoa ere legearen xedea da, eta hori egiterakoan, Europako Kontseiluak azken urteotan gaiari buruz onartu dituen gomendioak hartu dira kontuan (Eskualdeko eta Tokiko Botereen Batzarra). Baina, begi-bistakoa denez, kasu bietan (eskubideak eta betebeharrak) ulertu behar da lege honek osatu egiten duela, eta inola ez baztertu, oinarrizko legeetan ezarritakoa. Orobat aurreikusten da EAEko udalek eskubideen eta betebeharren gutunak onartzea, hala badagokio, Espainiako, Europako eta munduko beste leku batzuetako zenbait hiritan egin duten bezala.

II. tituluaren II. kapituluaren xedea da, berriz, zenbait printzipio eta erregela arautzea, udal-jarduera dela-eta, auzotarrek informazioa jasotzeko eta parte hartzeko duten eskubidearen gainean. Lege honek oinarri dituen irizpide orokorrak dira, alde batetik, toki-gobernuak gardena izan behar duela bere jarduerari dagokionez, eta, beste aldetik, hein handienez gain, hori udalak berak arautu behar duela onartzea, horretarako, arauak ezartzeko eta bere burua antolatzeko dituen ahalak baliatuz. Herritarrek parte hartzea toki-gobernamenduaren gakoetariko bat da, eta, horrenbestez, partaidetza balia dezatela bultzatu beharra dago. Nolanahi ere, organo eskudunek hartu behar dituzte erabaki politikoak; horiek erantzuten baitute politikoki eskumenok zuzen edo oker baliatu izanagatik, hala kontrol-tresnen bidez nola hauteskundearen emaitzen bidez, eta azken horiek ematen duten legitimitate demokratikoaren bidez. Udalen Legeak, beraz, herritarren partaidetza sendotzea du abiapuntu, batez ere informazio-teknologiaren eta komunikazioaren arloan; baina, azaldu den bezala, hipotesi honetan oinarritzen da: udalerriek beraiek aukeratu behar dituzte partaidetza hori arautzeko tresnak eta bideak.

III. tituluaren, udal-antolakuntzaren alde jakin batzuk garatu nahi dira, hain zuzen ere, Euskadiko toki-gobernua osatzen duten erakundearen kalitatea hobetzera zuzenduta egonda ere oinarrizko legerian jaso ez direnak. Hemen ere abiapuntua xume-xumea da: Estatuko arauen bidez asko garatu den gai hori dela-eta, oinarrizko legearen egileek aurreikusitakoa alde batera utzita, EAEko legegileak oso ondo daki udalerriek beraiek izan behar dutela aurreikuspen horiek garatzeko berariazko esleipena, arauak egiteko duten ahalaren bitartez. Dena den, aukera gisa, eta, edonola ere, orientazio gisa, beste zenbait aurreikuspen jasotzen dira, xede bakar batez: EAEko udalen antolamendu osagarriaren garapena bultzatzea. Horretaz gain, III. titulu horren I kapituluak agindu bana jasotzen du, populazio handiko udalerrietarako eta populazio txikiko udalerrietarako (kontzeju irekia) aurreikusten diren araubide bereziei buruz.

II. kapituluari, berriz, antolamenduari dagokionez bestelako kontu praktikoak landu nahi dira, hain zuzen ere, udalerri txikietan eta beste toki-erakunde batzuk bilduta edo elkartuta sortutako toki-erakundeetan sortzen diren kontuak. Batzuetan, udalerri txikiek zenbait zerbitzu emateko zailtasunak dituzte, dena delako zerbitzua emateko lanaldi osoko lanpostu bat bete beharrik ez dagoenean, eta, horregatik, funtzionarioentzat lanaldi partzialeko lanpostuak sortzeko aukera ezartzen da. Beste toki-erakunde batzuk bilduta edo elkartuta sortutako toki-erakundeek beren burua antolatzeko baliabideen aukera egokia izan behar dute, lanean hasi berriak direnean batez ere, eta, horretarako, lan-kontratuko langileentzat lanpostuak gordetzeko aukera ematen zaie, betiere lanpostuotan agintea erabili behar ez bada.

III. kapituluaren xedea da oinarritzko legeetan ezarritakoa osatzeko arauak ezartzea, udal-ordezkarien estatutuari dagokionez; nolana ere, arau horiek oso mugatuak dira eginkizunei dagokienez. Arau horrek ere oinarritzko legerian ezarritakoa osatzen du. Izan ere, zalantzarik gabe, Estatuko legegileari dagokio arautzea, printzipio eta arau erkideei dagokienez gutxienez, udal-ordezkarien estatutuaren arloa, baita toki-gobernuaren egoitzan izaten den gehiengo eta gutxiengo arteko jokoarena ere, eta, horretarako, oinarritzkoa dena definitu behar du. Horrela, gaur egungo oinarritzko legeriak ezarritako ordezkarien estatutua osatze eta hobetze aldera, zenbait arau aurreikusten dira ordezkarien eskubide ekonomikoei eta oposizioko zereginak errazteari buruz, baita udal-talde politikoei buruz ere.

IV.-

IV. tituluak gai garrantzitsua arautzen du: udalen eskumenak. Kasu honetan, Udalen Legeak EAEko udalerriak politikan jarduteko adinez nagusitzat jotzearen alde egiten du, Tokiko Autonomiaren Europako Gutunean adierazitakoaren ildotik. Hori horrela izanik, testu garrantzitsu horretan ezarritakoaren ildotik, eskumen publikoak, oro har eta lehentasunez, herritarrengandik gertuen dauden aginteei esleitu behar zaizkie, eta, gainera, normalean, udalen eskumen horiek erabatekoak eta osoak behar dute. Horrez gain, gobernuaren beste instantzia bati esleitu ez zaizkion eskumen guztiak gauzatu behar dituzte EAEko udalek, beren erantzukipean erabat, betiere auzotarren premiei erantzutera zuzentzen badira.

Udalen eskumenak, lege honen arabera, udalerriarenak dira. Horrek esan nahi du Udalen Legeak, eduki instituzionala duen aldetik, toki-autonomiaren gutxiengo estandar bat ematen diela EAEko udalerriari, zeina lege sektorialek ondoren hobetu ahalko duten.

Ezbairik gabe, EAEko legegileak, arlo horri edo sektore material jakin batzuei buruz esleitu zaizkion eskumenak baliatuz, bere eskumenen helmena mugatzeko aukera ere izango du, eta betiere salbuespen gisa. Baina neurri hori hartzekotan, betiere justifikatu behar du subsidiarotasun-printzipioarekin eta proportzionaltasun-printzipioarekin bat datorrela, eta, esan den bezala, Udalen Legeak ezarritakoa berariaz eta zuzenean erreformatu behar du horretarako.

Legeak argiro gehitzen du eskumenen klausula orokor bat, izaera bereko beste lege batzuetan egindakoaren antzera, eta Tokiko Autonomiaren Europako Gutunak berak ezarritakoari jarraiki, testuak ezartzen baitu toki-erakundeek, betiere legearen esparruaren barruan, beren ekimena gauzatzeko erabateko askatasuna dutela, beren eskumenetik kanpo ez dagoen edo beste aginte bati esleitu ez zaizkion gai guztietan.

Bereziki garrantzitsua da legeak jasotzen duen EAEko udalen eskumenen zerrenda. Zerrendaren ideia nagusia da, alde batetik, udalek arlo material jakin batzuei buruz dituzten ahal orokorrak ezartzea, eta, bestalde, eskumenen gutxieneko estandarra bermatzea beti; eskumen horiek arlo material espezifiko bakoitzaren barruan zenbait azpigaitan eragiten dutela.

Eskumen-kontuetan udalen autonomia bermatze aldera, eskumenen zerrendak zehazki adierazten du zein gaitan esku hartzen ari diren udalerririk, gai horiei buruz dituzten zenbait ahal erabiliz. Horrenbestez, eskumen horietariko asko dagoeneko aurreikusita daude aplikatzekoak diren eta indarrean dauden legeetan; beste gai batzuei dagokienez, berriz, zehaztu egin da zein arlotan zuten eragina udalek baliatzen dituzten ahaleki. Udalen Legea toki-erakunde horien eskumenen gutxieneko estandarra bermatzen saiatzen da, udalen eskumenak antolatze sistema horren bidez, betiere udal-gobernuen segurtasun juridikoa sendotze aldera, beraien politikak garatzeko orduan. Halaber, EAEko udalei eskumenok behar bezala erabiltzeko behar duten finantziarioa ematen ere ahalegintzen da.

lido horretatik, funtsezkoak dira legean udalen eskumenen gainean ematen diren arauak, baita udalen eskumenen eta nahitaezko zerbitzuen artean egiten den bereizketa ere. Izan ere, udalen eskumen zerrenda luze horrek ez du esan nahi udal guztiek eskumen guzti-guztiak erabili behar dituztenik, eta, halaber, ez du zehazten eskumenak zein mailataraino baliatu behar diren. Aitzitik, zerrenda horren bidez zenbait habilitazio-titulu onartzen dira, udal-gobernuek politika publiko jakin batzuk lehenesteko, kasuan kasuko gobernu-taldeek bultzatzen dituzten jarduera-programen arabera. Eskumenak eskualdatzeari eta eskuordetzeari buruzko gutxieneko arauak ere jasotzen ditu legeak, eta arau horien aplikazioa bereizte-printzipioari lotu dakiokete. Toki-erakundearen arteko eskumen-gatazken konponbidea arautzen duen agindu bat ere sartzen du. Amaitzeko, azken kapituluaren, udalen nahitaezko zerbitzuen araubideari eta zerbitzuok emateari buruzko arau laburrak sartzen dira.

Bereziki inportantea da, halaber, legearen V. tituluan araututakoa, bertan ezartzen baita udalek parte hartuko dutela Erkidegoko erakundeek egiten dituzten politika publikoak prestatzen. Partaidetza hori benetakoa izan dadin, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua sortzen da, kide anitzeko organo gisa sortu ere, EAEko udalen eta erakunde horien arteko lankidetzaren harremanak gauzatzeko helburuz. Kontseiluan kide kopuru bera izango dute EAEko administrazioko eta udaletako ordezkariak; autonomia organikoa eta funtzionala izango du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari atxikita egongo da, aurrekontuen aldetik.

Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren baitan, Politika Publikoen Udal Batzordea sortzen da. Batzorde horretan, udalerririk baino ez daude ordezkariak, eta ohartarazteko mekanismo baten moduan jokatzeko du eginkizun nagusia. Hala, lege-aurreproiektuak edo arauzko erregelamenduen xedapenen proiektuak begiratuak ditu, eta alde aurretiko txostena egingo, aurreproiektu edo proiektuok toki-

autonomiara egokitzen diren aztertze aldera, eta, hala badagokio, egin beharreko aldaketak ezartze aldera. Horrela, Erkidegoko botere publikoen jardueraren aurrean udalerrien autonomia bermatzeko organo nagusia bilakatuko da Udal Batzordea. Dena den, gobernu-maila horretan izapidetzen ari diren arau-jardueretan, udal-autonomiaren printzipioa urratzeko arriskuaz "ohartaraztera" mugatzen dira bere eginkizunak.

VI. tituluak kapitulu bi ditu. Lehena udalerriak ez diren bestelako erakundeei buruzkoa da. Lurralde Historikoetako foru-organoei ematen zaizkie gai hori arautzeko ahalmenik handienak, betiere tokiko erakundearen lurralde-eremuak ez badu Lurralde Historikoa gainditzen. Autonomia-erkidegoak arautzeko uzten dira, berriz, tokiko erakundeek lurralde-eremua gainditzen duteneko kasuak. Orobat, nobedade gisa, udalerrien sareak gehitzen zaizkio; sare horiek udalerrien arazo jakin batzuetarako konponbide zehatzak eskaini ditzakete eta erakundeen arteko lankidetzarako formula malgua bihurtu daitezke. Hala da, bai, behin eta berriz esaten ari den bezala, udalerrien arteko lankidetzak-moduak erabat lotuta daude udal-eskumenak behar bezala gauzatzearekin; eta kasu askotan eskumenok egokiro gauzatuko direla bermatzeko lanabes eraginkor bakarrak izango dira, ezinbestez, lankidetzak-modu horiek.

Titulu horren II. kapituluan zerbitzu publikoen kudeaketa arautzen da. Era berean, kudeatzeko moduei buruzko arauak zerrendatu baino ez dira egiten, baina berrikuntza puntual bat edo beste jasota. Dena den, kudeatzeko moduen erregulazio horren oinarria da autoantolakuntzako ahalekin oso lotuta dagoen gaia dela onartzea, baita udalerrien beraien arautze-ahalekin ere.

Udalerrien finantziazioa legearen VII. tituluaren lantzen da. Arautze hori da, zalantzarik gabe, EAEko Udalen Legeak eskaintzen duen berezitasun handienetarikoa bat, tokiko araubidea arautzen duten gainerako legeen aldean (Estatukoak zein erkidegoetakoak); izan ere, lege horietan, eta nahiz eta eskumen-gaietan oinarrituta egon, justifikazio handirik gabe, toki-administrazioaren araubide juridikoa eta tokiko finantziazioa banatu izan dira beti. Eta banaketa horrek, Estatuan, ondorio ezin txarragoak izan ditu gobernuaren tokiko maila garatzeko. EAEko kasuan, ordea, Ekonomia Itunetik ondorioztatzen diren ekonomia- eta finantza-berezitasunak direla-eta, eta Autonomia Estatutuan bertan jasotako arauak direla-eta, komenigarria ez ezik, beharrezkoa ere bada toki-finantziarioari buruzko zenbait printzipio eta arau sartzea, Lurralde Historikoek eremu material horren gainean dituzten eskumen garrantzitsuak berariaz aitortzearen kalterik gabe.

Aipaturiko VII. tituluak zenbait xedapen orokor jasotzen du I. kapituluan, non EAEko tokiko ogasunaren printzipioak aurreikusten diren, baita udalerrien finantziazioa baldintzarik gabekoa izango dela dioen araua ere, baldintzapeko finantziazioa zenbait betebeharre lotuz. Horrez gain, zenbait arau sartzen ditu, besteak beste, zorpetze-araubidearen gainean.

VII. tituluaren II. kapituluaren xedea, berriz, EAEko udalerrien eta gainerako tokiko erakundearen finantziazioa da. Eta gai garrantzitsu hori arautzerakoan, zentzuzko irizpide bat hartu nahi izan da abiapuntutzat, Autonomia Erkidegoko gobernu-maila guztien interesak (Erkidegoko erakundeak, Lurralde Historikoetakoak eta udalerriak) adiskidetzeko asmoz; horretarako, berebiziko garrantzia ematen zaio Finantza Publikoen Euskal Kontseiluari, non maila horiek guztiek ordezkariak dituzten.

Azkenik, VIII. tituluan zenbait arautze partzial jasotzen dira, udal-intereseko gaiei buruz. Lehenengo eta behin, aurretiaz legean zehaztuta egon beharra betetzeko (Konstituzioan ezartzen denez), ordenantzaren bidez definitzen diren zigor-prozeduretan aurreikusten da diruzko zigorren ordez, araua hautsi duen pertsonak ados egonez gero, balio bereko komunitatearen aldeko lanak egitea, betiere lanok zigorraren balio berekoak badira. Orobat, zenbait aurreikuspen jasotzen dira udalerrien elkarteek negoziazio kolektiboko prozesuetan duten legitimazioari buruz, eta, azkenik, beste zenbait enplegu publiko bateratuaren eskaintzari dagokionez edo IVAPek EAEko udalerrien hautaketa-prozesuak egiteari dagokionez, aldez aurretik horretarako itun bat eginda.

Xedapen gehigarriaren helburua da EAEko udalerrien ordezkari-tza handiena duen Euskadiko udalen elkarteari buruz zenbait kontu arautzea; izan ere, legean eta haren garapenean ezartzen denaren arabera, elkarte horrek eginkizun garrantzitsua bere gain har baitezake arau-esparru honetan taxututako ereduaren kudeaketa politikoan.

Xedapen iragankorrak gaikuntza nazionala duten tokiko administrazio-ko funtzionarioen araubide juridikoaren zenbait kontu arautzen du, apirilaren 12ko 7/2007 Enplegatu Publikoaren Oinarritzko Estatutuaren Legearen bigarren xedapen gehigarria osatzeko, hala egitea beharrezkoa baita autonomia-erkidegoak bere funtzio publikoari buruzko arauetan gaia behin betiko eta osorik arautu arte.

Xedapen indargabetzaile bat ere sartzen da. Eta, azkenik, Lurralde Historikoen Legearen zenbait kontu zehatz aldatzen dira. Erreforma puntual horrek, EAEko udalerrien ordezkari- Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan lekua egin nahi zaie, Legean forma tasatuan ezartzen diren gai batzuk lan ditzaten. Kontua ez da, inola ere, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak orain duen osaera aldatzea, organo hori betetzen ari den muin-muineko eskumenei dagokienez –izan ere, oraindik ere aipatu kontseiluaren osaera EAE osorako administrazioek eta Lurralde Historikoen ordezkari-kopuru bera izatean oinarritzen da–, baizik eta aipaturiko kontseiluari udaletako ordezkariak gehitzea, zeinek botoa eman ahalko duten gai tasatu batzuetan; eta, gainerakoetan, berriz, botoa ematerik izango ez badute ere, beren iritzia entzungo zaie organoaren eztabaida-prozesuan. Hala eta guztiz ere, udaletako ordezkariak gehituta, udalek egin ohi duten eskabide bat asebetetzen da, alegia, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan ahotsa izatekoa, eta, hala balegokio, botoa ere bai. Horrela ixten da, bada, prozesu luze bat, udalerririk euskal sistema instituzionalean behin betiko sartuz amaitzen dena. Azken hiru xedapenek gai hauek jorratzen dituzte: udalerririk Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan parte hartzeko sistema berriaren funtzionamendua; Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren Erregelamendua eratzea eta egitea; eta Eusko Jaurlaritza gaitzea legea erregelamendu bidez garatzeko.

ATARIKO TITULUA

1. artikulua.- Legearen izaera.

1.- Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoak toki-administrazioaren esparruan dituen eskumenak baliatuz ematen da, lurralde historikoetako foru-organoek arlo honetan dituzten eskumenen kalterik gabe.

2.- Lege honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko herri-aginteen erakunde-sarean euskal udalek duten posizioa zehazten da.

2. artikulua.- Legearen xedea.

Hona hemen lege honen xedeak:

- a) Udalen maila instituzionala, hau da, Euskadiko erakundeen artean duten posizioa eta protagonismoa, aitortzea.
- b) Tokiko autonomia aldezte eta babestea.
- c) Udalen eskumen-erregimena ezartzea eta eskumen horiek gauzatzeko finantza-nahikotasuna bermatuko duen lege-esparrua finkatzea.
- d) Gutxieneko erregimen juridikoa ezartzea udalerrien eta gainerako toki erakundeen antolaketari eta funtzionamenduari dagokienez.
- e) Erakundeen arteko koordinazio- eta lankidetzeta-sistema bat eratzea politika publikoak diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko, betiere, politika horiek udalek edo gainerako toki-entitateek burutzen badituzte edota horien partaidetza eskatzen badute.

3. artikulua.- Printzipioak.

1.- Udalek araugintzan eta jarduera betearazlean printzipio hauek beteko dituzte:

- a) Udal-autonomiaren printzipioa.
- b) Finantza-autonomiaren printzipioa.
- c) Autoantolaketa-printzipioa.

d) Hurbiltasun-printzipioa.

e) Elkartasun- eta jasangarritasun-printzipioa.

f) Herritarrek tokiko zerbitzu publikoetara jotzeko berdintasunaren printzipioa.

g) Araugintzako autonomiaren printzipioa.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurralde historikoetako organoek, beren eskumenak gauzatzean, nahitaez bete beharko dituzte artikuluko honetako 1. paragrafoan jasotzen diren printzipioak.

3.- Era berean, EAEko eta lurralde historikoetako organoek, tokiko erakundeen intereseko gaiei buruzko arauak ematen dituztenean, printzipio hauek bete behar dituzte araugintzan:

a) Udalen finantza-nahikotasuna, esleituta dituzten eskumenak gauzatzeko.

b) Subsidiariorotasuna.

c) Proporzionaltasuna.

d) Desberdinketa, betiere, printzipio hori aplikatzea bideragarria bada kasuan kasuko udalen edo, hala badagokio, toki-entitateen kudeaketa-ahalmena kontuan hartuta.

4. artikulua.- Toki-entitateak

1.- Lege honetan xedatutakoaren ondorioetarako, hauek izango dira toki-entitateak:

a) Udallerriak

b) Udallerriaren azpitik dauden tokiko lurralde-entitateak, tradizioen eta lurralde bakoitzeko foru-araudiaren arabera.

c) Udallerrien mankomunitateak

d) Beste edozein entitate, baldin eta tokiko lurralde-entitate zenbait biltzen baditu, dagokion izendapen bereziarekin —Arabako Lurralde Historikoko koadrilak edo beste figura batzuk, adibidez—, eta lege honetan eta aplikagarri den gainerako legerian ezarritakoaren arabera sortu bada.

2.- Aurreko paragrafoan aipatzen diren entitateek nortasun juridikoa eta beren helburuak betetzeko ahalmen osoa izango dute.

5. artikulua.- Toki-entitateen erregistroa.

1. Udalerriek eta aurreko artikuluan aipatzen diren gainerako toki-entitateek lege honen indarrez sortutako EAEko Toki Entitateen Erregistroan inskribatuko dira. Erregistro horretan egiten diren idatzoharrak estatuko dagokion erregistroari ere jakinaraziko zaizkio.

2.- Erregistroaren antolaketa- eta funtzionamendu-erregimena erregelamendu bidez arautuko da.

I. TITULUA

UDALERRIA: UDAL-AUTONOMIA

6. artikulua.- Udalerria.

1.- Udalerria Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea antolatzeko oinarrizko toki-entitatea da.

2.- Udalerria, orobat, ordezkaritza-politikoaren lehen instantzia da, eta herritarrek tokiko gai publikoetan parte hartzeko bide hurbil-hurbila.

7. artikulua.- Udal-autonomia.

1.- Euskal udalerriek autonomia dute interes publikoko hainbat eta hainbat gai antolatzeko eta kudeatzeko, betiere, legeak eta, hala badagokio, foru-arauak beteta.

2.- Udalerriek beren erantzukizunpean eta herritarren onurarako jardungo dute beti.

3.- Euskadin, udal-autonomiak eduki politikoa ere izango du. Hortaz, autonomia horrek antolatzeko eta kudeatzeko ematen duen ahalmenak aukera emango die tokiko gobernuei zerbitzuak emate hutsetik haratago doazen berezko politikak zehazteko eta gauzatzeko.

4.- Udal-autonomiaren barruan sartzen da, edonola ere, interes publikoak udalerraren barruan antolatzea, udalaren gobernu- eta administrazio-organoak antolatzea eta kudeatzea, udalerriko lurraldea antolatzea, tokiko zerbitzuak arautzea eta ematea, ekimen ekonomikoa, udalerraren zerbitzura diharduten langileen esparruko politika eta kudeaketa, ondarea eta diru-bilketa eta ogasun-baliabideak administratzea eta erabiltzea.

5.- Autonomia Erkidegoko eta lurralde historikoetako herri-administrazioei dagozkien koordinazio-ahalmenek ez diote inolaz ere eragingo Euskadiko udalerrien eta gainerako toki-entitateen autonomiari.

8. artikulua.- Udalerriri lotutako aldaketak.

1.- Udalerriak sortu edo kendu; udalerriko mugak aldatu edo zedarritu; udalerrien izena edo hiriburutza aldatu; bandera, entseina edo armaria onartu edo aldatu eta tituluak eman behar direnean, lurralde historikoetako foru-organoek emandako araudia aplikatuko da.

2.- Lurralde historiko desberdinetako udalerrien artean mugaketa-arazoak sortzen badira, autonomia-erkidegoko organo eskudunak ebatziko ditu.

II. TITULUA

AUZOTARREN ESTATUTUA: BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK. INFORMAZIOA ETA PARTE-HARTZEA

I. KAPITULUA

AUZOTARREN BETEBEHARRAK, ERANTZUKIZUNAK ETA ESKUBIDEAK

9. artikulua.- Auzotarren betebeharrak eta erantzukizunak.

1.- Auzotarren betebeharrak eta erantzukizunak dira:

a) Legez aurreikusitako prestazio ekonomiko eta pertsonalen bidez, udal-eskumenak gauzatzen laguntzea.

b) Udalei gorabehera pertsonalen aldaketak jakinaraztea baldin eta, ondorioz, erregistroko nahitaezko inskripzio-datuak aldatu behar badira.

c) Tokiko arauak betetzea eta horiek aplikatzeko laguntza ematea. Ildo horretatik, espazio publikoan bizikidetzatza-neurriak urratzen badira, horren berri eman behar diete tokiko agintariei.

d) Udal-ondarea, azpiegiturak, udal-zerbitzuak eta udal-altzariak zentzuz eta egoki erabiltzea eta horiek kontserbatzen eta zaintzen laguntzea.

e) Espazio publikoan herritarren bizikidetzarako arauak errespetatzea eta, era berean, besteen eskubideak ere errespetatzea.

f) Ingurumena, espazio publikoa eta hiri-paisaia zaintzea eta hobetzen laguntzea jarrera ekologiko eta jasangarrien bitartez.

g) Legeetan eta udal-ordenantzetan, bereziki espazio publikoaren erabilerak arautzen dituztenetan, aurreikusitako beste edozein.

2.- Aurreko paragrafoan araututako betebeharrak eta erantzukizunak, b) idatz-zatian aurreikusitakoa izan ezik, udalerrian aldi baterako edo luzarorako dauden pertsonak ere bete beharko dituzte, auzotar izan ez arren.

10. artikulua.- Auzotarren betebeharrak eta erantzukizunak.

Hauek dira auzotarren eskubideak:

a) Hautesle eta hautagai izatea, hauteskunde-leggedian xedatutakoaren arabera.

b) Tokiko politika publikoak egiten eta kudeatzen parte hartzea, aplikagarri diren legeetan, ordenantzetan eta erregelamenduetan xedatutakoaren arabera.

c) Ingurumen eta hiri-espazio publiko egokia eta jasangarria izatea.

d) Erraz iristeko moduko ingurunea izatea, desgaitasunen bat duten pertsonen joan-etorriak eta parte-hartzea ez oztopatzeko.

e) Zerbitzu publikoak modu eraginkorrean eta berdintasun-baldintzetan eskuratzea, lege honetan eta kasuan kasuko ordenantzetan ezarritakoaren arabera. Ahalegin berezia egingo da zerbitzu horiek genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek erabil ditzaten eta, horiekin batera, langabetuek, desgaituek, erretiratu eta pentsiodunek, gazteek, ekonomia-baliabiderik gabeko pertsonak eta zehatz daitezkeen gizarte-egoera ahuleko gainerako kolektiboek.

f) Udal-esparruan eragin dezaketen arrisku natural zein teknologikoei eta babes zibileko udal-planei buruzko informazioa jasotzea.

g) Kulturarako eskubidea eta ondare historikoko ondasunetara iristekoa.

h) Hizkuntza ofizial bietako edozein erabiltzea eta aukeratutakoan atenditua izatea toki-administrazioarekiko harremanetan, herritarren hizkuntza-eskubideak arautzen dituen autonomia-erkidegoko legeriaren arabera.

i) Informazioa jasotzea eta parte-hartzea, titulu honetako II. kapituluaren aurreikusitako moduan.

j) Udal-espediente eta -dokumentazio osoari buruzko informazioa jasotzea, eskabide arrazoitua eginez gero, eta udal-administrazioari eskabideak egitea, aplikagarri den legeriaren arabera.

k) Zerbitzu publiko bat nahitaezko udal-zerbitzua denean, zerbitzu hori emateko edo, hala badagokio, ezartzeko eskatzea.

l) Legeetan edo, hala badagokio, foru-arauetan eta udal-ordenantzetan ezarritako gainerako eskubideak.

11. artikulua.- Auzotarren betebeharrak, erantzukizun eta eskubideen kartak.

Euskal udalerriek auzotarren eskubide, betebeharrak eta erantzukizunen kartak onartu ahal izango dituzte ordenantza bidez. Bertan, eskubide horiek bete ezik udalak hartuko dituen konpromisoak eta herritarren betebeharrak eta erantzukizunak ez errespetatzeak izango dituen ondorioak ere jasoko dira.

II. KAPITULUA

INFORMAZIOA ETA PARTE-HARTZEA

12. artikulua.- Auzotarren eskubidea informazioa jasotzeko eta parte hartzeko.

1.- Udalek beren jarduerari buruzko informazioa emango diete herritarrei, eta auzotar guztiek herriko bizitzan parte hartzeko aukera sustatuko dute. Parte-hartze hori zuzeneko edo elkarte orokor edo sektorialen bidezkoa izan daiteke.

2.- Euskal udalek, auzotarrekiko harremanetan, gardentasun eta partaidetza printzipioak beteko dituzte politika publikoak eratzeko prozesuan, gobernu onaren eta administrazio onaren printzipioak bermatzeko.

13. artikulua.- Informazioa eta bilkuren publikotasuna.

1.- Herritar guztiek dute eskubidea euskal udalen eta gainerako toki-entitateen organoen erabakiak egiaztatzen dituzten agiriak jasotzeko, baita artxibategi eta erregistroak kontsultatzeko ere, oinarrizko legerian aurreikusitakoaren arabera.

2.- Osoko bilkurak jendaurrekoak dira. Euskal udalek ahalegina egingo dute osoko bilkurak grabatzeko eta, hala badagokio, beren egoitza elektronikoaren bitartez zabaltzeko. Hala ere, eztabaida eta bozketa sekretuak izan daitezke Konstituzioaren 18.1 artikuluko oinarrizko eskubideari buruzkoak direnean, betiere, gehiengo osoak hala erabakitzen badu.

3.- Tokiko gobernu-batzarraren bilerak ez dira inoiz jendaurrekoak izango.

4.- Desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan, artikulua honetan aipatzen den bilkuren informazioa eta publizitate-erregimena bitarteko eta formatu eskuragarrien bidez emango da. Udalak edo bestelako toki-entitateak eskubide hau bermatzeko bitarteko egokiak ez dituzten, baliabide horiek badituzten beste herri administrazioen laguntza instituzionala eskatu ahal izango du, interesdunak hala eskatzen badu.

14. artikulua.- Herritarren parte-hartzea eta tokiko autoantolaketarako ahalmena.

1.- Parte hartzeko moduak, bitartekoak eta prozedurak lege honen arabera arautuko dira, tokiko araugintza-ahalmenak erabiliz.

2.- Edozein kasutan, herritarrek parte hartzeko moduak, prozedura eta organoak udalen berezko araugintza-ahalmena eta autoantolaketarako ahalmena erabiliz gauzatuko dituzte euskal udalek, eta, horrela, herritarrek tokiko bizitza publikoko gaietan izan behar duten parte-hartze eraginkorra sustatuko dute. Parte hartzeko modu horiek ez dute inolaz ere gutxituko oinarritzko legerian eta lege honetan araututako ordezkartza- eta gobernu-organoen erabakitzeko ahalmena.

15. artikulua.- Herri-galdeketak.

1.- Estatuko legeriarekin bat, alkateek, udalbatzak gehiengo osoz hala erabaki ondoren eta estatuko gobernuaren baimenarekin, herrikideen interesarentzat garrantzi handia daukaten gaien buruzko iritzia galde diezaiokete herriari baldin eta gaiok udalaren eskumenekoak eta toki-administrazioaren ingurukoak badira. Toki-ogasunari dagozkion gaiez, ordea, ezin izango da galdeketa egin.

2.- Galdeketa horiek egiteko prozedura erregelamendu bidez ezarriko da.

16. artikulua.- Herritarren ekimenak.

1.- Udal-hauteskundeetan botoa emateko eskubidea duten auzotarrek herri-ekimena baliatu ahal izango dute. Ildo horretatik, akordio-proposamenak edo ordenantza-proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte udalaren eskumen diren gaietan, lege honetan ezarritakoaren arabera.

2.- Aurreko paragrafoan aipatzen diren ekimenak onargarriak diren ala ez udalaren udalbatzak eztabaidatu eta bozkatuko du, nahiz eta, gero, gaiaren arabera eskumena duen organoak izapidetu eta ebatzi ahal izango dituen. Edozein modutan, udalaren idazkariaren legezko tasun-txostena beharko da eta, hala dagokionean, baita kontu-hartzailearena ere.

3.- Herri-ekimenek herri-galdeketa- proposamena har dezakete barruan. Horrelakoetan, galdeketa- proposamena aurreko artikuluan aurreikusitako prozeduraren eta eskakizunen arabera izapidetuko da.

4.- Artikulu honetan aurreikusitako ekimenak udalerriko auzotarren ehuneko hamarrak sinatu behar ditu, gutxienez.

17. artikulua.- Parte-hartzea eta informazioaren eta komunikazioen teknologiak.

1.- Euskal udalek, tokiko berrikuntzarako politiken barruan, informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera interaktiboa sustatuko dute, bai parte-hartzea eta auzotarrekiko komunikazioa sustatzeko eta errazteko -dokumentuak aurkezteari, administrazio-izapideak edo inkestak egiteari edota, hala badagokio, herri galdeketak egiteari begira-, bai udal-jarduera osoari buruzko informazioa emateko.

2.- Euskal udalek, gainera, auzotar guztien eta, bereziki, gazteen parte-hartze politikoa sustatuko dute informazioaren eta komunikazioen teknologien bitartez.

3.- Azaroaren 23ko 17/2009 Legearen aplikazio-esparruan sartutako zerbitzu-jarduera bati eta horren gauzatzeari buruzko prozeduren eta izapideen kasuan, zerbitzua ematen duten pertsona fisiko edo juridikoek prozedura eta izapide horiek leihatila bakar baten bidez egin ahal izango dituzte, elektronikoki eta urrutitik, salbu eta egitekoa zerbitzua emateko erabiltzen den tokia edo ekipoa ikuskatzea bada.

4.- Era berean, udalek ahaleginak egingo dituzte zerbitzua ematen duten pertsona fisiko eta juridikoek aukera izan dezaten leihatila bakarraren bitartez jarduera bati eta horren gauzatzeari buruzko informazioa eta formularioak jasotzeko edota agintari eskudunek beraien eskabideei buruz emandako ebazpenak eta gainerako jakinarazpenak ezagutzeko.

5.- Udalerriek foru-aldundien lankidetzak izango dute, estatuko oinarritzko legerian aurreikusitakoaren arabera, baldin eta, ekonomiarako eta kudeaketarako gaitasun nahikorik ez dutelako, aurreko bi paragrafoetan ezarritakoa behar bezala bete ezin badute. Lankidetzak hori beste entitateekiko lankidetzarako formulen bitartez bideratu ahal izango da, indarrean dagoen legerian aurreikusitakoaren arabera.

III. TITULUA

UDALERRIAREN ANTOLAKETA ETA UDAL-ORDEZKARIEN ESTATUTUA

I. KAPITULUA

UDALERRIAREN ANTOLAKETA

18. artikulua.- Printzipio orokorrak.

1.- Euskal udalek toki-araubidearen oinarrizko legerian aurreikusitako beharrezko organoak izango dituzte, eta legeria horren eta lege honen esparruaren barruan gauzatu ahal izango dute antolaketa-araugintza-ahalmena.

2.- Beharrezko organoen funtzionamenduak, erabakiak hartzeko erregimenak eta organo horietako kideen estatutuak toki-araubidearen oinarrizko legerian eta lege honetan xedatutakoa bete beharko dute. Edozein kasutan, gobernu-jarduera bermatuko da, eta ordezkari-organoei gutxiengo politikoak errespetatuko dira, horien legitimazio demokratikoaren printzipioa betez.

3.- Gainerako organo osagarrietan, udalek beren eskumenak erabiliz emandako antolaketa-araudietan ezarritakoa beteko dute, lege honetan aurreikusitakoarekin bat.

19. artikulua.- Alkatehurrengoak.

1.- Euskal udalek alkatehurrengoak izan ditzakete.

2.- Udalean Alkatehurrengotza sortzen denean, figura horrek oinarrizko legedian agertzen den Alkateordeketa ordezkatu du. Figura horren zereginak, izendatzeko eta kargutik kentzeko prozedurak, baita eskumenak ere, oinarrizko toki-araubidean alkateordeentzat ezarritako berberak izango dira.

20. artikulua.- Alkatearen eskuordetzeak.

Populazio handiko udalerrietarako indarrean dagoen oinarrizko legeriaren kalterik gabe, gainerako euskal udalerrietan alkateak bere eskumenak eskurdetzan eman ahal izango dizkie, ez bakarrik tokiko gobernuari, alkatehurrengoei edo alkateordeei eta zinegotziei, baita titulu honetako II. kapituluan arautzen diren zuzendaritzako langileei ere.

21. artikulua.- Populazio handiko udalerriak.

1.- Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 121. artikuluekin bat, Bilbao, Donostia-San Sebastián eta Vitoria-Gasteizko udalerrien antolamendu-araubidea aipatutako 7/1985 Legearen X. tituluaren populazio handiko udalerrientzat aurreikusten dena izango da.

2.- Legez ezarritako ekonomia-, gizarte-, historia- edo kultura-baldintzak bereziak betetzen dituztelako, 7/1985 Legearen 121. artikuluko 1. paragrafoko d) idatz-zatian aurreikusitako kasuan egon daitezkeela uste duten EAeko gainerako udalerriek, populazio handiko udalerrien antolamendu-araubideari heldu nahi badiote, dagokion erabakia hartu beharko dute osoko bilkuran, eta eskabide arrazoitua bidali beharko diote Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean toki-araubidearen arloko eskumenak dituen organoari.

22. artikulua.- Kontzeju irekiko erregimena.

1.- Udal-hauteskundeetarako deialdia egiten den egunean biztanleen udal-erroldan 100 biztanle baino gutxiago dituzten udalerriak kontzeju irekiko erregimenaren arabera eratuko dira. Erregimen berezi hori 100 eta 250 biztanleen arteko populazioa duten udalerriek ere izan dezakete, baldin eta tradizioz erregimen horren arabera jardun badute edo dagokien lurralde historikoko foru-administrazioari horretarako eskabidea egiten badiote, lurralde historikoetako foru-organoei emandako araudian ezarritako prozeduraren arabera.

2. Ehun biztanle edo gehiago duten udalerriek kontzeju irekiko erregimenean badihardute —tradizioz edo dagokion foru-administrazioak onartuta— eta erregimen orokorrera aldatu nahi badute, eskabidea egin beharko diote lurralde historikoko foru-organo eskudunari, foru-araudian ezarritako prozeduraren arabera.

3.- Kontzeju irekiko erregimenean, udal-gobernua eta -administrazioa alkateari eta auzotarren batzarrari dagozkie. Kontu-batzorde berezi bat ere egongo da, auzotarren batzarrak onartu beharreko kontu guztiak, aurrekontukoak eta aurrekontuz kanpokoak, begiratu eta aztertzeko eta horiei buruzko txostena egiteko. Organo horien funtzionamendua aplikagarri diren eta behar bezala egiaztatuta dauden tokiko usadio, ohitura eta tradizioen arabera izango da. Horrelakorik egon ezean, arau hauek beteko dira:

- a) Alkateak gutxienez alkaterode bat izendatuko du, bere zereginetan laguntzeko eta bere ordezkari jarduteko kanpoan edo gaixorik dagoenean edo ordezkaria izatea beharrezkoa den beste edozein egoeratan.
- b) Auzotarren batzarra udalerriko hautesle guztiak osatuko dute. Toki-araubideari buruzko legeriak udalaren udalbatzari esleitzen dizkion eskuduntzak izango ditu. Gainerako zereginak alkateari dagozkie.

- c) Kontu-batzorde bereziak, gutxienez, hiru kide izango ditu, auzotarren batzarrak izendatuak. Funtzionamendu-erregimena auzotarren batzarrak erabakitakoa izango da.

II. KAPITULUA

LANGILEEN ARLOKO XEDAPEN BEREZIAK

23. artikulua.- Lanaldi partzialeko lanpostuak.

Jarduera edo zerbitzu bat emateko funtzionario baten lanaldi osoko dedikazioa behar ez denean, 5.000 biztanletik beherako udalerriek lanaldi partzialeko funtzionario-lanpostuak sortu ahal izango dituzte beren lanpostuen zerrendetan.

24. artikulua.- Lan-kontratudunentzat gordetako lanpostuak.

Beste toki-entitate batzuk bilduta edo elkartuta sortutako toki-entitateek lan-kontratudunentzat gordetako lanpostuak sortu ahal izango dituzte lanpostuen zerrendetan, betiere, lanpostu horietan agintea erabili behar ez bada.

III. KAPITULUA

UDAL-ORDEZKARIEN ESTATUTUARI BURUZKO XEDAPENAK

25. artikulua.- Udal-ordezkarien erregimena.

1.- Euskal udal-ordezkarien erregimen juridikoa toki-araubidearen oinarritzko legerian eta hauteskunde-legerian orokorrean ezarritakoa izango da, eta lege honetan xedatutakoa osagarri izango da.

2.- Udalerria osatzen duten ordezkarien kopurua, hautatzeko prozedura, agintaldiaren iraupena eta hautaezintasun eta bateraezintasun arrazoiak hauteskunde-legerian daude jasota.

3.- Udal-ordezkariek oinarritzko legerian orokorrean ezarrita dauden eskubideak eta betebeharrak izango dituzte.

26. artikulua.- Udal-ordezkarien ekonomia-eskubideak eta dedikazio-erregimena.

1.- Udal-ordezkariek toki-araubidearen oinarrizko legerian ezarritako ekonomia-eskubideak eta dedikazio-erregimenak izango dituzte.

2.- Gastu publikoa hobeto harmonizatzeko, Tokiko Politika Publikoen Kontseiluak, 42. artikuluan arautuak, ordainsarien taula bat proposatu ahal izango du, gomendio gisa, udalerriko populazioa eta udal ordezkarien dedikazioa —osoa edo partziala— kontuan hartuta.

27. artikulua.- Oposizioa.

Bost mila biztanletik gorako euskal udalerriek oposizioko zinegotzi batek, gutxienez, dedikazio partziala izatea bermatuko dute, udal-gobernua kontrolatzeko eta fiskalizatzeko lana behar bezala egin ahal izateko. Hogei mila biztanletik gorako udalerrietan, dedikazio hori osoa izango da.

28. artikulua.- Udaleko talde politikoak.

1.- Udal-ordezkariek talde politikoetan antolatuko dute beren burua, eta oinarrizko legerian eta lege honetan ezarritako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte, salbu eta atxiki gabeko kideak, horien ekonomia-eskubideak eta eskubide politikoak ezingo baitira izan jatorrizko taldean jarraitu izan balute izango lituzketenak baino gehiago.

2.- Talde politikoek diru-izendapenak jasotzeko eskubidea izango dute, beren zereginak duintasunez burutu ahal izateko.

29. artikulua.- Euskal udal-ordezkarien etika eta gobernu onaren kodea.

1.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak euskal udal-ordezkarien Etika eta Gobernu Onaren Kode bat proposatuko du, gomendio gisa, ordezkariek horiek eredugarri izan daitezten eta ordezkarien zereginen legitimazioa indartu dadin herritarren artean.

2.- Euskal udalek, autoantolaketako eskumenak baliatuz, aukeran izango dute etika edo gobernu onaren bestelako kodeak onartzea edo aurreko paragrafoan ezarritakoa garatzea.

IV. TITULUA

UDALEN ESKUMENAK

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

30. artikulua. – Printzipio orokorrak.

1.- Euskal udalen eskumenak oinarritzko legerian, lege honetan edo Eusko Legebiltzarraren beste lege batzuetan ezarritakoaren arabera zehaztuko dira.

2.- Euskal udalen eskumenak zehazteko, hala badagokio, herritarrarekiko hurbiltasun handiena hartuko da kontuan printzipio gisa. Era berean, gai edo jarduera publikoaren zabaltasuna edo izaera, toki-entitateen kudeaketa-gaitasuna edo eraginkortasun- edo ekonomia-beharrak ere baloratuko dira.

3.- Lege honen 2. artikuluan ezarritakoari jarraituz, gerora emandako lege baten bidez lege honetan udalari ematen zaion eskumen bat beste gobernu-maila bati esleitzen bazaio, esleipen horrek subsidiarotasun-printzipioa izango du oinarri, eta neurri horren proportzionaltasuna justifikatu beharko da. Nolanahi ere, honako eskakizun hauek bete beharko dira:

a) Lurralde historikoaren edo autonomia-erkidegoaren esparruan, jarduera bateratua beharrezkoa izatea, baitezpadakoa delako.

b) Laguntza teknikoaren edo lege honetan zein foru-arauetan ezarritako udalartekotasun-formulen bitartez homogeneousutasun nahikoa lortu ezin izatea.

c) Foru-entitateei edo autonomia-erkidegoko entitateei esleitutako zeregin zehatzak behar-beharrezkoak izatea udalez gaindiko interesak asetzeko.

31. artikulua.- Ahalak.

1.- Euskal udalek toki-araubidearen oinarritzko legerian ezarritako ahal guztiak izango dituzte.

2.- Gainerako toki-entitateek ere izango dituzte ahal horiek, beren zergak jartzekoa eta desjabetzekoa izan ezik, baina, betiere, aplikagarri zaizkien legeetan eta foru-arauetan ezarritako salbuespenak eta mugak errespetatuta.

II. KAPITULUA

UDALEN ESKUMENAK

32. artikulua.- Eskumen-klausula orokorra.

1.- Hurrengo artikuluan aipatzen diren eskumenen kalterik gabe, euskal udalek eskumena izango dute beste edozein eskumen antolatu eta kudeatzeko, betiere, beste gobernu-maila bati berariaz esleituta ez badago eta udalerriko erkidegoaren beharrak asetzeko bada.

2.- Era berean, euskal udalek jarduera eta zerbitzu osagarriak izan ditzakete beste herri-administrazio batzuenak osatzeko.

33. artikulua.- Udalen eskumenak.

1.- Artikulu honetan aipatzen diren euskal udalen eskumenak, berezko eskumenak izango dira.

2.- Eskumenak bikoiztuta daudenean, koordinazio- eta lankidetzaren printzipioen arabera jardungo da, beharrezko ez diren bikoiztasunak saihesteko eta herritarrei zerbitzuak modurik onenean eta eraginkorrean ematen zaizkiela bermatzeko.

3.- Euskal udalek eskumen hauek izango dituzte:

1) Ikuskizunak, jolas-jarduerak eta horiek egiten edo antolatzen diren establezimendu publikoak. Gai honetan, udalen eskumenei, autonomia-erkidegoko legerian zehazten diren kasuetan eta esparruan, arlo hauek hartzen dituzte:

- Ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiteko establezimenduetan zerbitzu-jarduerak abiarazteko baldintzak eta eskakizunak finkatzea eta horien inguruko kontrola, zaintza, ikuskapena eta zehapen-erregimena zehaztea, establezimenduok jendearentzat irekiak direnean.

- Ikuskizunen, jolas-jardueren eta horiek egiten diren establezimendu publikoen inguruko lizentziak eta baimenak ematea, salbu eta, indarrean dagoen legeriaren arabera, nahikoa bada aldez aurretiko jakinarazpena edo erantzukizuneko adierazpena egitea.

2) Animaliak babesteko eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araudia garatzea eta aplikatzea.

3) Polizia eta herritarren segurtasuna: Gai honetan, udalen eskumenei arlo hauek hartzen dituzte:

- Herritarren segurtasunari lotutako prebentzio-politikak zehaztea eta aplikatzea udalerrian, beste administrazio batzuekin koordinatuta.
- Esparru publikoetan eta jendearentzat irekitako lokaletan herritarrek izan behar dituzten bizikidetzaharremanak ordenantza bidez arautzea.
- Titulartasun publikoko zerbitzu, ekipamendu, azpiegitura eta instalazioen erabilera ordenantza bidez arautzea.
- Udaltzaingoa sortu, antolatu, planifikatu eta kudeatzea, poliziarri eta segurtasun publikoari buruzko legerian xedatutakoaren esparruan.

4) Babes zibila eta suteak saihestea eta itzaltzea. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Babes zibileko eta suteak saihesteko eta itzaltzeko planak egitea eta onartzea. Plan horiek koherenteak izan behar dute, eta koordinatuta egon behar dute udalaz gaindiko administrazioek egindakoekin.
- Prebentzio-neurriak eta, hala badagokio, erreakzio-neurriak ezartzeko ordenantzak onartzea suteei, uholdeei edo bestelako ezbehar edo hondamenei lotuta.
- Babes zibileko udal-egiturak, suteak saihesteko eta itzaltzeko zerbitzuak eta salbamendu-zerbitzuak sortzea eta kudeatzea.
- Suteetan edo hondamen-egoeretan herritarrak babesteko behar diren aparteko neurriak hartzeko agintzea, beste erakunde batzuek esparru horretan dituzten eskuduntzen kalterik gabe. Neurri horien artean sartzen dira, besteak beste, auzotarrak mobilizatzea, ekipoak konfiskatzea edota eraikinak utzaraztea.
- Babes zibilaren arloan herritarren parte-hartzea boluntariotzaren bitartez bultzatzea eta boluntarioen erakundeen sorrera sustatzea.
- Aurreikuspen eta prebentzioko udal-programak egitea eta gauzatzea arlo horretan eskumena duten beste administrazioekin lankidetzan.

5) Hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, exekuzioa eta diziplina. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte, beste herri-administrazioen eskumenen kalterik gabe:

- Hiri antolamendurako plan orokorrak egitea eta izapidetzea eta hasierako, behin-behineko eta, hala badagokio, behin betiko onarpena ematea.
- Plangintza orokorra bateragarri egiteko balio duten antolamendu-planak eta -tresnak egitea, izapidetzea eta onartzea, eragindako udalerriekin adostuta.

- Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua, bilakaera, kudeaketa eta diziplina finkatzea.
 - Antolamendu xehatuaren planak egitea eta izapidetzea eta behin-behineko eta behin betiko onespena ematea.
 - Xehetasun-azterketak, hirigintza-antolamenduko ordenantza osagarriak, katalogoak eta hirigintza-antolamenduko beste tresna batzuk egitea eta izapidetzea eta behin betiko onespena ematea.
 - Sektorizatzeko-planetarako alde aurreko baimena ematea eta horiek egitea, izapidetzea eta onartzea.
 - Hirigintzako egikaritze-tresnak egitea, izapidetzea eta onartzea.
 - Hirigintzako baimenak ematea, hala badagokio, salbu eta alde aurreko jakinarazpena edo erantzukizuneko adierazpena egitea dagokionean.
 - Hirigintzako legezkotasuna babestea eta hirigintza-antolamendua berrezartzea.
 - Hirigintzako arauak hausteagatik zehapen-prozedura finkatzea.
 - Azpiegitura publikoak zertzeko programak egiten eta diseinatzen parte hartzea, azpiegitura horiek udalerritik igarotzen direnean.
- 6) Etxebizitzen inguruko plangintza, programazioa eta kudeaketa egitea. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:
- Etxebizitzaren inguruko plangintza egitea eta gauzatzea eta autonomia-erkidegoko etxebizitza-plangintza egiten eta kudeatzen parte hartzea.
 - Etxebizitzak sustatzea eta kudeatzea, autonomia-erkidegoari esleitutako eskumenaren kalterik gabe eta horrekin koordinatuta eta lankidetzan.
 - Zuzkidura-ekipamenduak eta etxebizitza babestuak antolatzea, sustatzea, kudeatzea, esleitzea eta kontrolatzea, horien kategoria dena dela: udalak arautuak, eraiki berriak edo hirigintzako birgaitze- edo berritze-plan berezien ondoriozkoak.
- 7) Ingurumenaren sustapena, defentsa eta babesa eta garapen jasangarria, ingurumenari buruzko legeriaren arabera. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:
- Ingurumena babesteko, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko, garapen iraunkorra bultzatzeko eta natur ondarea eta biodibertsitatea babesteko udal-politikak formulatzea eta kudeatzea.
 - Ingurumenari buruzko udal-ordenantzak egitea eta onartzea.
 - Sailkatutako jardueretarako baimenak ematea, alde aurreko jakinarazpena edo erantzukizuneko adierazpena egin behar denean izan ezik, eta, udalaren esku-hartzearen esparruko jardueri

dagokienez, jagotea, kontrolatzea, ikuskatzea, gainbegiratzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea, betiere, ingurumenari buruzko araudiari jarraituz.

- Ingurumenaren inguruko informazio eta heziketarako jarduerak bultzatzea eta programatzea, jasangarritasuna sustatzeko.

- Ingurumenaren arloko plangintza egiteko orduan, parte-hartze eraginkorra izatea.

- Ingurumena babesteko jarduerak antolatzea, planifikatzea, programatzea eta egikaritzea zaraten eta bibrazioen esparruan.

- Udalaren esku-hartzearen esparruko jardueri dagokienez, jagotea, kontrolatzea, ikuskatzea, gainbegiratzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea, betiere, ingurumenari buruzko araudiari jarraituz.

8) Osasun publikoa sustatzea, defendatzea eta babestea, droga-menpekotasunaren inguruko gaiak barne hartuta. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Tokiko Osasun Plana egitea, onartzea, ezartzea eta gauzatzea, autonomia-erkidegoko plangintzarekin bat.

- Osasunaren lehen mailako arretaren kudeaketan parte hartzea.

- Tokiko eta erkidegoko ekintza-politikak garatzea eta osasunean duten eragina ebaluatzea.

- Osasuna sustatzeko, osasun-gaietan hezteko eta osasuna babesteko programak egitea, babesgabetasun- edo arrisku-egoeran dauden pertsonen arreta berezia eskainita.

- Mugikortasuna antolatzea irizpide hauek kontuan hartuta: jasangarritasuna, gizarteratzea eta gizarte-kohesioa; jarduera fisikoaren sustapena eta istripuak saihestea.

- Pertsonen bizitzeko eta harremanetarako erabiltzen dituzten eraikinen eta tokien osasun kontrola egitea.

- Elikagaien banaketaren osasun-kontrol ofiziala egitea.

- Pertsonen kontsumorako uraren kalitatearen osasun-kontrol ofiziala egitea.

- Industrien, garraioen, jardueren eta zerbitzuen osasun-kontrola egitea.

- Espazio publikoen osasungarritasuna kontrolatzea.

- Kostaldeko eta barrualdeko bainu-guneen osasun kontrola egitea.

- Hazlearen behar pertsonaletarako animaliak hiltzeari buruzko osasun-arauak betetzen direla zaintzea.

- Hiri-izurriak kontrolatzea.

- Hilerrien osasun arloko kontrola eta hileta-tokien osasun arloko polizia.

9) Erabiltzaile eta kontsumitzaileen defentsa eta babesa antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Erabiltzaile eta kontsumitzaileak defendatzeko eta babesteko udal-ordenantzak egitea eta onartzea.

- Erabiltzaile eta kontsumitzaileei kontsumoaren inguruko informazioa eta heziketa ematea eta beren eskubideei eta eskubideok erabiltzeko modurik eraginkorrenari buruzko orientabidak eta aholkuak ematea.

- Enpresei eta profesionalei kontsumoaren inguruko informazioa eta orientabideak ematea.

- Kontsumitzaileek aurkeztutako kekek, erreklamazioak eta salaketak aztertu eta izapidetzea eta, hala badagokio, bitartekaritza edo arbitrajea egitea.

- Kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoak sortzea, kudeatzea, antolatzea eta ebaluatzea beren lurralde-eremuan.

- Kontsumoko arbitraje-sistema sustatzea, hedatzea eta, hala badagokio, kudeatzea autonomia-erkidegoko Administrazioarekin lankidetzan, indarrean dagoen legerian ezarritakoari jarraituz.

- Ikuskapenak egitea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea, autonomia-erkidegoko legerian ezarritako helmena eta ahalmenak errespetatuta.

- Kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasunari eta segurtasunari edo ekonomia-interesei eragiten dieten krisi- edo larrialdi-egoeretan, premiazko neurriak hartzea eta beharrezko lankidetzak eskatzea.

- Kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteak sustatzea eta babestea.

10) Hilerriak antolatu, planifikatu eta kudeatzea.

11) Gizarte-zerbitzuak antolatu, planifikatu eta kudeatzea. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Gizarte-zerbitzuen arloan, beren zerbitzuak antolatu, planifikatu eta kudeatzea.

- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako gizarte-arloko udal-zerbitzuak planifikatzea autonomia-erkidegoko eta foru-aldundietako administrazioen plangintza estrategikoari eta gizarte-zerbitzuen mapari jarraituz.

- Oinarrizko gizarte-zerbitzuak sortu, antolatu eta kudeatzea.

- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoko oinarrizko gizarte-zerbitzuak ematea, zerbitzu horiek arautzen duen legeriaren arabera.

- Arrisku-egoeran dauden adingabeak babestea, lurralde historikoen eskumenen kalterik gabe.

- Gizarte-ekintzako hirugarren sektorea sustatzea eta bultzatzea, herritarren parte-hartzea sustatzea, elkartegintza eta boluntariora bultzatzea eta erabiltzaileen eta profesionalen partaidetza bultzatzea gizarte-zerbitzuen kudeaketan eta ebaluzioan.

- Prestazio eta zerbitzuei buruzko informazio eguneratua zabaltzea beren lurralde-eremuan.

- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistematan parte hartzen duten eragile eta profesionalen prestakuntza sustatzea eta bultzatzea, gainerako euskal herri-administrazioekin koordinatuta.

- Ikuskatzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea beren titulartasuneko zerbitzu, zentro eta entitateen kasuan edota udalaren eskumen diren zerbitzuak ematen dituzten zerbitzu, zentro eta entitate pribatuen kasuan, berdin delarik zerbitzu horiek itun, kontratu edo, hala badagokio, hitzarmen baten ondorioz ematen dituzten.

Hala badagokio, Gizarteratzeko Euskal Plana gauzatzean onartzen diren gizarteratzeko udal-egitarauak egitea eta garatzea.

- Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko prozedurak izapidetzea eta ebaztea eta, hala badagokio, laguntza horiei dagozkien ordainketak egitea, horien jarraipena eta kontrola egitea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea beren eskumenen esparruan.

12) Zerbitzuak antolatzea, kudeatzea, ematea eta kontrolatzea uraren ziklo integralean, kasuan kasuko esparru-erregelamenduen arabera. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Uraren goi-hornidura, honako hauek barne: ur-baliabideak bildu eta azaleratzea eta kudeatzea, baliabide ez-konbentzionalak sortzea barne; potabilizazio-tratamendua; arteria edo hodi nagusietatik garraiatzea eta herriguneen buruko andel erregulatzaileetan biltzea.

- Uraren behe-hornidura, honako hauek barne: banatzea, tarteko biltegietara eramatea eta kontsumorako ura hartune partikularretara edo erabiltzaileen instalazioetara eramatea eta banatzea.

- Herriguneetako hondakin-urak garbitzea edo batzea eta, udal-estolderiaren bitartez, kolektore orokorretara edo tratatzeko bildu behar diren lekura eramatea.

- Herriko hondakin-urak araztea, hau da, biltzea, kolektore orokorren bitartez garraiatzea, tratatzea eta efluentea ur-masa kontinentaletara edo itsasora isurtzea.

13) Argiteria publikoko zerbitzua antolatzea, kudeatzea eta ematea.

14) Etxeko hondakinak eta, hala badagokio, merkataritzako hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko zerbitzuak antolatzea, ematea eta kontrolatzea eta hondakin horien ekoizpena murrizteko plangintza, programazioa eta diziplina ezartzea, goragoko lurralde-mailarako plangintzarekin bat.

15) Bideak garbitzeko zerbitzua antolatzea, kudeatzea eta ematea.

16) Pertsonen garraio publikoko hiri-zerbitzuak —garraiatzeko modua dena dela— antolatzea, planifikatzea, programatzea, kudeatzea eta sustatzea eta horien inguruko diziplina ezartzea, betiere, garraioa udalerrriaren barruan egiten bada osorik.

17) Kirola sustatzea eta erabilera publikoko kirol-ekipamenduak kudeatzea. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Lurralde historikoetako foru-organoek onartutako eskola-kiroleko programak eta kirola pertsona guztien artean zabaltzeko programak gauzatzea foru-organo horiekin koordinatuta.

- Udalaren kirol-ekipamenduak eraikitzea, handitzea eta hobetzea eta horiek kudeatzea eta mantentzea.

- Udalaren kirol-ekipamenduen erabilera arautuko duten ordenantzak egitea eta onartzea.

- Osorik beren lurren barruan egiten diren kirol-agerpen eta -lehiaketak antolatzea eta, hala badagokio, baimentzea, bereziki herrikiokiak badira edota eskola-adina duten edo arreta berezia behar duten pertsonen zuzenduak badira.

- Udalerriko kirol-plangintza formulatzea, autonomia-erkidegoaren eta foru-aldundien eskumenen kalterik gabe.

18) Kultur jarduerak planifikatzea eta kudeatzea eta kultura sustatzea. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Liburutegi, agiritegi, museo eta museo-bildumen inguruan, udal-plangintza eta -proiektuak egitea, onartzea eta gauzatzea.

- Beren kultur erakundeak kudeatzea, kultur ekipamenduak eraikitzea eta kudeatzea eta udalerriko beste batzuekin koordinatzea.

- Era guztietako kultur jarduerak antolatzea eta sustatzea eta arte-sorkuntza eta -produzioa eta kultur industriak bultzatzea.

- Euskadiko Liburutegi Sistemari eta Euskadiko Irakurketa Sare Publikoan parte hartzea.

19) Udal-ondare historikoa babestea eta kontserbatzea eta babes-plan bereziak eta katalogoak egitea eta onartzea.

20) Turismoaren arloan, udalek esparruotan izango dituzte eskumenak beti:

- Beren turismo-baliabideak eta interes bereziko jaiak sustatzea.
- Beren lurraldean dauden tokiak, ondasunak eta zerbitzuak interes turistikodun izendatzea.
- Tokiko turismo-informazioko zerbitzua ematea.
- Autonomia-erkidegoko turismo-sektorea planifikatu eta sustatzeko bitartekoen formulazioan parte hartzea.
- Udalaren titulartasunpeko turismo-azpiegiturei buruzko politika diseinatzea.
- Beste administrazio batzuekin lankidetzan jardutea partekatutako inguruneak eta baliabideak sustatzeko.

21) Hezkuntzaren arloan, udalek esparruotan izango dituzte eskumenak beti:

- Irakaskuntzaren programazioa egiten eta nahitaezko eskolatze-aldia betetzen dela zaintzen parte hartzea.
- Haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko ikastetxe publikoen eraikinak kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea eta hezkuntza-administrazioari behar dituen orubeak eskaintzea herri-ikastetxe berriak egiteko.
- Herri-ikastetxeen instalazioen eskola-orduetatik kanpoko erabilera kudeatzea, autonomia-erkidegoko administrazioan hezkuntza-arloan eskumena duen sailarekin koordinatuta eta berariaz ezarritako prozeduren bitartez.
- Udalaren musika-eskolak kudeatzea, eskumena duten autonomia-erkidegoko erakundeekin hitzarmena egin ondoren. Hitzarmen horretan zehaztuko da jarduera horiek finantzatzeko sistema.

22) Tokiko ekonomia- eta gizarte-garapena. Gai honetan, udalen eskumenek arlo hauek hartuko dituzte beti:

- Autonomia-erkidegoko plangintzaren esparruan, tokiko ekonomia- eta gizarte-garapena sustatzea.
- Tokiko garapena bultzatzeko plan estrategikoak egitea.
- Ekonomia-sektoreen beharrei eta tokiko lan-merkatuaren bilakaerari buruzko azterketak egitea.
- Enpleguko udal-politika aktiboak gauzatzen laguntzea, politika aktiboak gauzatzeko eskumena duen administrazioaren lankide diren aldetik. Ildo horretatik, enplegu-politika aktiboari buruzko programak eta neurriak kudeatzen parte hartuko dute; zehazki jarduera hauek gauzatu dituzte:

- lan-bitartekotza.
 - enplegarritasuna, gizarte-inklusioa eta berdintasuna sustatzea lan-merkatuan.
 - enplegurako lanbide-heziketa.
 - enplegu autonomoa eta enplegua sortzen duten enpresa-ekimenak sustatzea.
 - tokiko enplegua sustatzea.
- enpresa berriak jartzeko azpiegiturak sustatzea.
 - era guztietako ekonomia-jarduerak sustatzea, bereziki merkataritzari, turismoari eta artisautzari lotuak.
 - hornidura-azokak antolatu, kudeatu eta sustatzea eta horien inguruko diziplina ezartzea eta salmenta ibiltaria eta ez-sedentarioa arautzea.
 - aldi behin egiten diren feriak eta azoka txikiak baimentzea eta horiek egiteko leku fisikoaren egokitzapena sustatzea.
 - Produktu bereziak sustatzeko ekitaldiak eta erakusketak antolatzea eta, hala badagokio, baimentzea.
- 23) Euskararen arloan, udalek esparruotan izango dituzte eskumenak beti:
- Euskararen erabilera sustatzeko udal-planak idatzi, onartu eta betearaztea.
 - Gizarte-bizitzako alor guztietan euskararen erabilera sustatzea, herritarrek salerosketako, kulturako, elkarteetako, kiroltako, erlijiozko edota beste edozein motatako jarduera guztiak euskaraz garatu ahal izan ditzaten.
 - Udalaren esparruan euskara erabiltzea arautuko duen udal-ordenantza idatzi eta onartzea.
 - Autonomia-erkidegoko administrazioarekin lankidetzan aritzea helduak euskalduntzen, alde aurretik gaiari buruzko hitzarmena sinatu ostean, jarduera horiek finantzatzeko sistema zehazteko.
- 24) Berdintasunaren eta edozein eratako bereizkeria desagerraraztearen arloan, udalek esparruotan izango dituzte eskumenak:
- Udalaren esparruan berdintasunaren gaia orokorrean antolatu eta plangintza burutzea.
 - Udal-administrazioan berdintasunaren ikuspegia barneratzeko azpiegiturak, programak eta prozedurak zehaztu eta garatzea, eta enplegu publikorako berdintasunerako planak onartzea.
 - Programa edo zerbitzuak aurkeztea, bereizkeria jasaten dutenek oinarritzko gizarte-eskubideez baliatzeko aukera izan dezaten bermatzeko.

- Gizonek zein emakumeek norberaren bizitza, familia eta lana batera eraman ahal izateko dauden baliabideak eta zerbitzuak antolatu eta kudeatzea, dituzten ezaugarriengatik udalek eskaini behar badituzte.

- Udal-esparruan gertatzen diren bereizkeria-egoerak antzematea, eta egoera horiek errotik kentzeko neurriak hartzea.

- Etorkinak hartu eta gizarteratzea.

25) Udal-ondarea kudeatzea eta ondare horren erabilera, zertarakoa, kontserbazioa eta mantenimendua arautzea, betiere foru-araudiarekin bat.

26) Biztanleen udal-errola kudeatzea.

27) Hiltegiak antolatu eta kudeatzea.

28) Herritarrek parte hartzeko eta teknologia berriak eskueran izateko azpiegiturak ezarri eta garatzea.

29) Udalarenak diren herri barruko bide publikoak eta baserri-bideak zaintzea eta mantenimenduaz arduratzea.

30) Udalerriko bideetan, pertsona, ibilgailu (motordunak zein bestelakoak) eta animalien mugikortasuna eta irisgarritasuna eta pertsona eta merkatalgaien garraioa antolatu, kudeatu, sustatu eta diziplina-modua zehaztea; horretarako, beharrezko iritzitako baliabide materialak, teknikoak eta giza baliabideak jarri ahal izango dituzte.

31) Herri barruko trafikoa eta aparkatzeko moduak arautzea eta antolatzea.

32) Bake-epaitegiek beren eginkizunak aurrera eramateko baliabide materialak eta giza baliabideak jartzea, legerian esaten denaz bat.

33) Parkeak eta lorategiak.

34) Gazteriaren arloan, udalek esparruotan izango dituzte eskumenak beti:

- Gazteei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak antolatu, kudeatu, ikuskatu, kontrolatu eta zehatzea.

- Gazteentzako zerbitzuen udal-plangintza eta -programazioa egitea, erkidegoko eta aldundiko planifikazioarekin bat.

35) Garapenerako lankidetzaren arloan, udalek esparruotan izango dituzte eskumenak, bereziki:

- Udalek garapenerako duten lankidetzaren tekniko eta ekonomiko finantzarioa antolatu, programatu eta kudeatzea, eta beste horrenbeste ekintza humanitario eta larrialdiko egoerentarako ekintzen kasuan.

- Garapenaren aldeko lankidetzarako programak eta ekintzak betearaztea.

34. artikulua.- Udal-eskumenen eraginkortasuna.

1.- Lege honen aurreko artikuluan euskal udalei aitortzen zaizkien eskumenak gutxieneko eskumenak izango dira. Lege baten bidez, eta dagokion finantziarioekin, eskumen horiek areagotzea egongo da, eta baita ahalmen eta eginkizun berriak ematea ere, lege honen 33. artikuluan aipatzen diren gaien inguruan.

2.- Lege honetan jasotzen diren eskumenak udalek bakoitzak bere kabuz edo lege honen VI. tituluaren nahiz Lurralde Historikoetako kasuan kasuko foru-arauetan aurreikusitako udal arteko formulen bidez eramango dituzte aurrera.

3.- Lege honetan zehaztutako eskumenei dena delako gaian udalek duten araugintzako eta betearazteko esparrua adierazten dute. Ez dira, inola ere, derrigorrez eskaini beharreko zerbitzuak. Udalek, beren politikekin eta gastatzeko ahalmenaz bat, herritarrei zein zerbitzu eskaini lehenetsi beharko dute, titulu honetan aitortutako eskumenei bat.

4.- Foru Aldundiek, oinarrizko legerian esaten denaz bat, dena delako Lurralde Historikoko udalei laguntza teknikoa eskainiko diete, lege honen bidez udalei ematen zaizkien eskumenak benetan gauzatuko dituztela bermatu ahal izateko, baldin eta udalok beren kasa edo beste batzuekin elkartuta ezin badituzte aurrera eraman.

5.- Lurralde Historikoek, beren araudian eta oinarrizko legerian esaten denaz bat, laguntza ekonomikoa emango diete udalerriei, udalerrian inbertsioak egin, jarduerak burutu eta zerbitzuak eskaini ditzaten. Era berean, udalerriko oinarrizko zerbitzuak ere eskainiko dituzte, udalerririk behar beste baliabide edo gaitasun ez badu horiek eskaintzeko, baina udalerririk hala egiteko eskatuz gero. Lurralde Historikoetako foru-arauek laguntza emateko eta zerbitzuak eskaintzeko betebeharrak hori arautu beharko dute.

6.- Era berean, Lurralde Historikoek udalerrien eskumenak gauzatzea bermatu ahal izango dute, udalerrien eskumenei diren zerbitzuak eskaintzeko udalen arteko sareak sortzea bultzatuz, hain zuzen ere lege honetan eta, halakorik izanez gero, foru-arauetan zehazten denaz bat.

36. artikulua.- Eskumenak eskuordetzea eta eskualdatzea.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoak eta Lurralde Historikoek eskumenak eskuordetu edo eskualdatzeko aukera izango dute, eta udalerrien edo tokiko erakundeen esku utzi, gaur egun indarrean den araudiaren arabera eta, Lurralde Historikoei dagokienez, eskumena duten foru-organismoek erabakiko dutenaren arabera.

2.- Eskualdatu eta eskuordetzearen bidez, bereizte-printzipioa gauzatzeko aukera egongo da, batez ere behar besteko neurria eta eskualdatutako edo eskuordetutako eskumenak eraginkortasunez betetzeko kudeaketa-gaitasun nahikoa duten udalerriekin aplikatzeko.

37. artikulua.- Eskumenak eskualdatzea.

1.- Eusko Legebiltzarraren lege baten bidez, berez autonomia-erkidegoarenak diren eskumenak udalerrien esku uztea egongo da.

2.- Eskualdatzea egiten duen lege edo foru-arauan eskualdatze horren erregimen juridikoa zehaztu beharko da.

3.- Autonomia-erkidegoak edo kasuan kasuko Lurralde Historikoak, egoki iritziz gero, antolatu, plangintza egin, koordinazio orokorraz arduratu edo kontrolatzeko ahalmenak beren eskuetan gordetzea erabaki ahal izango dute.

38. artikulua.- Eskumenak gauzatzea eskuordetzea.

1.- Autonomia-erkidegoak eskumenak euskal udalerriei edo beste toki-erakunde batzuei eskuordetzeko aukera izango du, eta hori Eusko Jaurlaritzaren dekretu baten bidez egin beharko da.

2.- Dena den, eskumena eskuordetzan emanda ere, toki-erakundeak bere burua antolatzeko duen ahala errespetatu beharko da. Eskumen bat eskuordetzan emanaz gero, erabateko erantzukizunez gauzatuko da, nahiz eta zuzendaritza- eta kontrol ahalmenak gorde daitezkeen.

3.- Eskuordetzea benetan burutzeko, toki-erakundeak berariaz onartu beharko du; gainera, baliabide materialak, zuzkidura ekonomikoak nahiz finantzarioak laga, eta, beharrezkoa bada, giza baliabideak ere jarri beharko dira.

4.- Eskuordetzeari buruzko dekretuan, gutxienez kontuok zehaztu beharko dira:

a) Eskuordetzea zuritzen duten lege-arauak.

b) Zein eginkizun betearaztea eskuordetu den.

c) Zein baliabide material, ekonomiko nahiz finantzario edo giza baliabide jarriko diren toki-erakundearen esku, eta baita balorazioa eta berrikusteko prozedura ere.

d) Zerbitzuaren benetako kostuaren balorazioa.

e) Eskuordetzea zein egunetan gauzatuko den, eta zenbateko epea izango duen.

f) Autonomia-erkidegoak jarritako baldintzak, emandako instrukzio edo jarraibideak, jarritako kontrol-bideak, berarentzat gordetako ahalmenak, eta errekerimenduak egiteko zehaztutako prozedura; azken horren arabera, eskuordetzea ezeztatzea ere gerta daiteke.

g) Eskumena eskuordetzan jasotzen duen toki-erakundeak izango dituen betebeharrak.

5.- Eskuordetzea bideratzen duen dekretuan ezarritako betebeharrak ez badira betetzen, gerta daiteke eskuordetzea bertan behera uztea eta eskumen horiek berriz ere Eusko Jaurlaritzak bereganatzea, aldeztu aurretik toki-erakundeak dioena entzun eta Gobernu Kontseiluak hala erabaki ostean. Toki-erakundeek uko egin ahal izango diote eskuordetzeari, eskuordetzeari buruzko dekretuan zehaztuko diren kasuetan. Kasu horietan, Eusko Jaurlaritzak zehaztuko du eskuordetutako eskumenak gauzatu edo ez gauzatzearen ondoriozko baliabideak eta kargak nola likidatuko diren.

6.- Lurralde Historikoen toki-erakundeek eskuordetzeak zein erregimenetan emango dizkieten kasuan kasuko foru-araudian zehaztuko da.

39. artikulua.- Eskumen-gatazkak.

1.- Autonomia-erkidegoko toki-erakundeen arteko eskumen-gatazkak autonomia-erkidegoan toki-erregimenaren arloko eskumenak dituen administrazio-organismoak izapidetu ebatziko ditu.

2.- Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan jarri ahal izango da errekurtsioa, dagokion legeriak dioenaren arabera.

3.- Gatazka positiboa denean, gaiak eragiten dion toki-erakundeak bertan behera utziko ditu bere jarduerak, EAEn toki-erregimenaren arloko eskumenak dituen organismoak eskumenez baliatzeari uzteko eskatzen badio. Errekerimendua egon arren ere, eskumen-gatazkaz ebatzi aurretik ematen badu ebazpena, ebazpen hori erabat deuseza izango da.

4.- Erregelamendu bidez zehaztuko da zein izango den gatazka horiek konpontzeko prozedura.

III. KAPITULUA

DERRIGORREZKO ZERBITZUAK

40. artikulua.- Derrigorrezko zerbitzuak.

1.- Derrigorrezko udal-zerbitzuak izango dira oinarrizko toki-legerian halakotzat jotzen direnak, autonomia-erkidegoko legeriaren barruan.

2.- Euskal aginte publikoek, bakoitzak bere eskumenak gauzatzean, elkarlanean jardungo dute euskal udalerrri guztiek derrigorrezko zerbitzuok berdin eskain ditzaten, biztanle-kopurua dena delakoa izanik ere, eta udaloi beharrezko finantziazioa emango diete.

41. artikulua.- Foru-aldundien dispentsa.

Udalerri batek erakusten badu, behar bezala arrazoituta, ez duela derrigorrezko zerbitzu bat eskaintzeko behar beste baliabide edo bitarteko, lurralde horretako Foru Aldundiari zerbitzu hori eskain dezala eskatu ahal izango dio, kasuan kasuko foru-araudian aurreikusten den prozeduraz bat.

V. TITULUA

UDALERRIEK POLITIKA PUBLIKO AUTONOMIKOAK ZEHAZTEN PARTE HARTZEA TOKIKO POLITIKA PUBLIKOEN EUSKAL KONTSEILUA

42. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua.

1.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua kide anitzeko organoa da, eta duen eginkizuna euskal udalerrien eta erakunde autonomikoen arteko lankidetzat instituzionala bideratzea da, erabakiak autonomia-erkidegoaren mailan hartzen direnean udalerrien interesak ere neurtuko direla bermatzeko.

2.- Euskal Lurralde Historikoetan, autoantolaketarako aitortuta dituzten ahalekin bat, foru-organismoek tokiko politika publikoen kontseiluak sortzeko aukera izango dute, eta aurreko paragrafoan deskribatutako eginkizun eta helburuak izango dituzte.

43. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren izaera.

1.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua udalerriek autonomia-erkidegoko erakundeetan ordezkari izan eta parte hartzeko organoa da, eta duen eginkizuna tokiko erakundeen autonomia bermatzea da.

2.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua Eusko Jaurlaritzako Lehendakariari atxikita egongo da, baina aurrekontuarekin zerikusia duten kontuetarako bakarrik.

3.- Bere eginkizunak aurrera eramateko autonomia organiko eta funtzionala du. Antolaketa eta funtzionamenduari buruzko erregelamendu propioa onartuko du Kontseiluak, eta lege honetan aurreikusitakoak garatuko dira erregelamendu horretan.

44. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren osaera.

1.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak Lehendakaria izango du buru, edo hark eskuordetutako Eusko Jaurlaritzako sailburua.

2.- Ordezkaritza handiena duen Euskadiko udalen elkarteko lehendakaria, edo horrek eskuordetutako pertsona, Kontseiluko lehendakariordea izango da.

3.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluan kide kopuru bera izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko ordezkariak eta euskal udalerrietakoek. Kontseiluaren erregelamenduak adieraziko du zenbat kide izango diren eta nola izendatuko dituzten; dena den, udalerrien ordezkariak ordezkariitza handiena duen udal-elkarteak izendatuko ditu, baina autonomia-erkidegoko udal-hauteskundeetan boto gehien lortu dituzten hiru alderdietakoak izango dira; denak alkate edo zinegotziak izan beharko dira.

4.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak, dagozkion eginkizunak aurrera eramateko, behar beste baliabide eta bitarteko izango du, ondo funtzionatuko duela bermatzeko.

45. artikulua. Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren eginkizunak.

Kontseiluak eginkizunok izango ditu:

- a) Autonomia-erkidegoko araugintzako ekimenetan eta plan eta programetan parte hartzea, tokiko erakundeen berezko eskumenei eragiten dietenean; plan eta programa horiek udalen eskumenetan izan dezaketen eraginari buruzko txostenak egingo dituzte, eta legezketasun eta egokitasunezko irizpideen arabera iritzia emateko aukera ere izango dute. Txostenok ez dira lotesleak izango.
- b) Proposamenak egitea, baita legegintzako ekimenaz baliatuta ere, berez udalerrienak diren eskumenei eragiten dien edozein gairi buruz.
- c) Administrazioen arteko elkarlana sustatzea, eta beste horrenbeste egitea autonomia-erkidegoko administrazioaren eta tokiko administrazioen arteko informazio-trukatzearekin.
- d) Udalerrien eskumenei eragiten dieten politika publiko sektorialez eztabaidatzea eta denen artean lantzea, eta dauden gobernu-mailetan zer nolako eragina duten ikustea.
- e) Lankidetzarako eta, beharrezkoa bada, koordinaziorako sistemak sustatzea, dauden gobernu-mailetako politika publikoen kudeaketa integratua izan dadin.

- f) Egoeraren batean tokiko erakundeen autonomiari kalte egiten zaiola uste bada, eta Konstituzio Auzitegian konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsioa aurkeztu edo eskumen-gatazka dagoela adierazi behar bada, gai horren inguruko jarrera azaltzea.
- g) Lege honetan berariaz ematen zaizkion eginkizunak.

46. artikulua.- Berez udalerrienak diren eskumenei eragiten dieten legeen eta legegintzako dekretuen aurreproiektuak, edo erregelamenduen proiektuak eta plan nahiz programak prestatzen parte hartzea.

1.- Berez udalerrienak diren eskumenei (edo tokiko erakundeen interesei) eragiten dieten legeen eta legegintzako dekretuen aurreproiektuak, edo erregelamenduen proiektuak eta plan nahiz programak, kontsulta-txostena idazteko fasean daudenean, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilura bidali beharko ditu kasuan kasuko sailak.

2.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren baitan Politika Publikoen Udal Batzorde bat eratuko da, eta artikulua honetan zehaztutako eginkizunak izango ditu. Udal-batzorde horren lehendakaria ordezkari zabalena duen euskal udalen elkarteko lehendakaria edo horrek eskuordetutako pertsona izango da, eta Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluko kide diren udalerrietako ordezkariak baino ez dira izango bertako kide.

3.- Udal Batzordeak eskaria jaso eta hamabost egun igaro baino lehen egin beharko du txostena. Eskara bidaltzeko emandako aginduan txostena presazkoa dela esaten bada, behar bezala arrazoituta, orduan txostena egiteko epea zortzi egunekoa izango da.

4.- Udal Batzordeak proposatutako aldaketak oso-osorik onartzen baditu sailak, izapidetze-prozesuak aurrera jarraituko du.

5.- Proposamen guztiak edo horien zati bat onartzen ez baditu, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua bildu beharko da, organo horretako tokiko erakundeen ordezkariak eta gobernuak gaiak eztabaida dezaten; zortzi eguneko epea izango dute horretarako.

6.- Bi ordezkariak akordiorik lortzen ez badute, dena delako sailak izapidetzearekin aurrera jarraituko du, baina txosten bat idatzi beharko du, Udal Batzordearen txostenean proposatutako aldaketak zergatik ez dituen onartu zuzitzeko.

7.- Legeen edo legegintzako dekretuen aurreproiektuen kasuan, lege-proiektu edo legegintzako dekretuaren proiektu gisa onartu ostean, proiektuok parlamentura bidaltzean, ondorengoak ere erantsi beharko dira: Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren proposamenak baztertzeko arrazoiak zuzitzen dituen txostena, eta Kontseilu horrek eta Udal Batzordeak izandako bileraren edo bileren aktak.

VI. TITULUA

BESTE TOKI ERAKUNDE BATZUK ETA TOKIKO ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA

I. KAPITULUA

TOKIKO BESTE ERAKUNDE BATZUK

47. artikulua.- Beste toki-erakunde batzuk sortu, aldatu eta ezabatzea.

1.- Lurralde Historikoetako foru-organoek, beren lurraldearen barruan, hainbat udal biltzen dituzten erakundeak sortu, aldatu eta ezabatzeko aukera izango dute, oinarrizko legerian, lege honetan eta kasuan kasuko foru-araudian esaten denarekin bat.

2.- Dena delako toki-erakundea sortu, aldatu edo ezabatzeak autonomia-erkidegoko administrazioaren eskumenei eragiten badie, administrazio horretan dena delako gaian eskumena duen organoaren alde aurretiko txostena behar izango da.

48. artikulua.- Elkarte bidezko toki-erakundeak.

Udalerrien mankomunitateek eta toki-erakundeak biltzeko beste elkarte modu batzuek, obra eta zerbitzu jakin batzuk elkarrekin burutzeko sortzen direnean, eta Lurralde Historiko bakar batekoak direnean, toki-erregimenari buruzko oinarrizko araudia eta kasuan kasuko Lurralde Historikoko foru-organoek emandako arauak bete beharko dituzte, eta baita lege honetatik ezartzekoa zaiena ere.

49. artikulua.- Lurralde Historiko bat baino gehiagokoak diren udalerrien mankomunitateak.

2.- Lurralde Historiko bat baino gehiagokoak diren udalerrien mankomunitateek artikulua honetan xedatutakoa bete beharko dute.

2.- Mankomunitate batean bildu nahi duten udalerrietako udalek udalbatzako legezko kideen gehiengo absolutuaren aldeko botoa beharko dute, erabakia hartzeko.

3.- Mankomunitatearen estatutuak elkarte horren sustatzaile izan diren udalerriz guztietako alkate eta zinegotziek onartuko dituzte, batzarrean bilduta, gehiengo absolutuaren bidez, alde aurretik Foru Aldundien txostena jaso ostean. Hori egin ondoren, mankomunitatea osatzen duten udalen udalbatzek onartu beharko dituzte, aurreko paragrafoan aipatutako gehiengoaren bidez.

4.- Estatutuetan gutxienez ondorengo puntuak jaso beharko dira:

- a) Mankomunitatearen izena, egoitza eta osatzen duten udalerrien zerrenda.
 - b) Zein helburu eta eskumen dituen.
 - c) Gobernu- eta administrazio-organoak zein diren, nola osatuko diren, eta bertako kideak nola izendatu eta kenduko dituzten kargutik.
 - d) Gobernu-organoen funtzionamendurako arauak, eta baita administrazioaren kudeaketakoak eta gerentziakoak, halakorik balego.
 - e) Mankomunitatea osatzen duten udalerrien ekarpenak eta erakundeak izango dituen gainerako baliabide ekonomikoak.
 - f) Mankomunitateak izango duen iraupena.
 - g) Estatutuak aldatzeko prozedura, lege honetan ezarritakoaren arabera.
 - h) Udalerriak mankomunitateak sartu eta bertatik irteteko prozedura, eta udalerriok biltzeko dauden aukerak, mankomunitatearen helburuetako bat edo batzuk betetzeko.
 - i) Mankomunitatea ezabatzeko arrazoiak eta prozedura, eta likidazioari buruzko arauak.
 - j) Udalerriek ordaindu beharreko kalte-ordainen erregimena, mankomunitatearekin dituzten betebeharrak bete ezean.
 - k) Udalerriren batzuek mankomunitatetik irteten badute eta horiek emakidan utzitako ondasunen bat badago, ondasunok aurrerantzean izango duten erregimen juridikoari buruzko aurreikuspenak.
- 5.- Jabetza kentzeko ahala derrigorrez okupatu beharreko ondasunak dauden lekuko udalak izango du, beti mankomunitateak eskatuta eta bere mesederako; ondasunok Lurralde Historiko bereko udalerrri bat baino gehiagotan badaude, Foru Aldundiak izango du ahal hori, eta autonomia-erkidegoko administrazioak Lurralde Historiko bat baino gehiagoko udalerrietan badaude ondasunak.
- 6.- Mankomunitateko gobernu-organoak zein diren, zein eginkizun izango duten eta funtzionamendu-erregimena zehazteko orduan tokiko erakundeen autonomia errespetatu behar bada ere, mankomunitatearen estatutuek bermatuko dute udalen ordezkartza-organoak, duen osaeragatik, kontrol-lana egin ahal izatea eta ziurtatzea udalerrri guztietako hautetsiak benetan egotea; dena den, udalerrri batek ere ezin izango du gehiengo absolutua izan. Udalen ordezkartza-organoko ordezkariak udalerrri bakoitzak izendatuko ditu, azken udal hauteskundeetan lortutako emaitzekin proportzionalki.
- 7.- Autonomia-erkidegoko udalerriek beste autonomia-erkidego batzuetakoak diren udalerriekin mankomunitateetan biltzeko aukera izango dute, lege honetan ezartzen den moduan eta, era berean, gai honi buruz beste autonomia-erkidegoko edo erkidegoetako legerian esaten denaz bat.

50. artikulua. Udal eta toki mailako elkarlanerako sareak.

- 1.- Udalerriek eta gainerako toki-erakundeek elkarlanean aritzeko autonomia-erkidegoaren mailako edo maila apalagoko beste sare batzuek baliatzeko aukera izango dute, ezartzekoa den araudiarekin bat.
- 2.- Autonomia-erkidegoaren mailako, edo Lurralde Historiko bat baino gehiagoko udalerrri edo erakundeen udal-sareak edo toki-erakundeen sareak pertsona fisiko edo juridiko publiko nahiz pribatuek osatuko dituzte, baldin eta udalerrrien eskumenak gauzatzea bermatzeko badira, eta herritarren interesen alde egiten badute.
- 3.- Lurraldeko lankidetzarako sareek edo sare horietako kide batzuek nortasun juridikoa duten erakundeak sortzeko aukera izango dute, beren helburuak betetzeko.
- 4.- Udal-sareak edo toki-erakundeen sareak hitzarmen bidez eratuko dira. Euskal udalerrrien elkarteek udal-sareak sortzea sustatuko dute, eta horietan sartzeko aukera izango dute, artikulua honetako 2. paragrafoan esaten den moduan.

51. artikulua.- Partzuergoak.

- 1.- Udalerriek eta gainontzeko toki-erakundeek partzuergoak eratu ahal izango dituzte beste administrazio publiko batzuekin, guztien intereseko helburuak lortzeko. Era berean, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek ere izango dute partzuergoan parte hartzeko aukera, baldin eta partzuergoko administrazio publikoen interesekin bat datozen interes publikoak badituzte erakunde pribatuok.
- 2.- Partzuergoak toki-erakundetzat hartuko dira lege honetan esaten direnetarako, baldin eta kide diren toki-erakunde guztiak edo gehienak lege honen arabera udalerrrien eskumenekoak diren zerbitzuak eskaini edo jarduerak burutzeko elkartzen badira.
- 3.- Partzuergoaren eskumeneko zerbitzuak kudeatzeko, toki-araubideari buruzko legedian aurreikusitako edozein era erabili ahal izango dute partzuergoak.
- 4.- Partzuergoan bildu nahi duten zuzenbide publikoko erakundeak Lurralde Historiko bakar batekoak badira, Lurralde Historiko horretako foru-organoen araudiaz bat jardun beharko da partzuergoa eratzeko.

52. artikulua. Lurralde Historiko batez gaindiko partzuergoak.

1.- Partzuergoa osatzen duten zuzenbide publikoko erakundeen lurralde-esparruak Lurralde Historiko bat gainditzen badu, baina autonomia-erkidegoaren barruan bada, artikulua honetan esaten dena bete beharko du.

2.- Partzuergo bat eratu edo batean bildu nahi duten toki-erakundeetako gobernu-organo nagusiek horren aldeko akordioa hartu beharko dute, legezko kideak direnen gehiengo absolutuak aldeko botoa emanda. Partzuergoan sartu nahi duten gainerako erakundeen kasuan, aurreko paragrafoan aipatzen den akordioa hartzeko, beren estatutuetan edo barne-funtzionamenduko arauetan esaten denaz bat jardun beharko dute.

3.- Partzuergoaren estatutuak partzuergoa osatu nahi duten erakunde guztien ordezkariak osatutako batzorde batek landuko ditu, eta partzuergora bildu den erakunde bakoitzak bozkatu ostean onartuko dira, azkenik. Toki-erakundeen kasuan, estatutu horiek onartzeko, aurreko paragrafoan aipatzen den gehiengoa behar izango da.

4.- Partzuergoaren estatutuek funtzionamendurako arauak ezarriko dituzte, eta egin beharreko egokitzapenak eginda, mankomunitateentzat XXXX. artikuluan aurreikusten diren ezaugarriak zehaztuko dituzte.

53. artikulua.- Lurralde Historiko baten lurralde-eremua gainditzen duten metropolialdeak.

Eusko Legebiltzarraren lege bidez, Lurralde Historiko batena baino gehiagoko lurralde-eremua hartuko duten metropolialdeak edo udalerririk arteko beste erakunde batzuk sortzeko aukera egongo da. Metropolialde horiek sortzeko dituen legeak erakundeek zer nolako eskumenak izango dituzten, zein organok osatuko dituzten eta erregimen juridikoari buruzko gainontzeko osagaiak ere zehaztuko ditu.

II. KAPITULUA

ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA

54. artikulua. Tokiko zerbitzuen kudeaketa.

Estatuko oinarrizko legerian eta lege honetan ezarritakoa bete beharko baba ere, tokiko zerbitzu publikoen erregimen juridikoa eta kudeaketa-moduak kasuan kasuko udalerririk zehaztuko dituzte, araugintzarako eta autoantolaketarako dituzten ahalez baliaturik. Zerbitzua nola araututa egongo den zerbitzua eskaintzen hasi aurretik arautuko dute toki-erakundeek, eta gutxienez ondorengo kontuak

argitu beharko dira: zerbitzua eskaintzeko moduak, zerbitzuaren egoera, finantziazioa eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak.

55. artikulua.- Kudeaketa-moduak.

1.- Tokiko zerbitzu-publikoak zuzenean kudeatu ahal izango dira, erakundeak berak eginkizun hori hartuta, edo horretarako sortutako beste erakunde edo elkarte batzuen bidez. Zeharka kudeatzeko aukera ere egongo da, indarrean den legerian aipatzen diren kontratu- edo lankidetzeta-bideak baliaturik.

2.- Zuzeneko kudeaketa ondorengo aukeretakoren batekoa izango da:

a) Tokiko erakundeak berak kudeatzea.

b) Erakunde publiko batek eskaintzea zerbitzua, dela erakunde autonomoa edo enpresa-erakunde publikoa.

c) Tokiko merkataritza-sozietate baten bidez eskaintzea, sozietate horren kapitala oso-osorik toki-erakundearena edo toki-erakundearen ente publikoren batena bada.

d) Tokiko fundazio publiko baten bidez eskaintzea, ezartzekoa den legeriaren zehazten denaren arabera.

3.- Aipatu diren kudeaketako aukera horiek ondorengoak bete beharko dituzte: ezartzekoa zaien estatuko oinarritzko legeria, lege honetan aurreikusitakoa, eta kasuan-kasuan onartutako udal-araudia.

VII. TITULUA

UDAL FINANTZIAZIOA

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

56. artikulua. Euskal toki-ogasuna.

1.- Euskadiko udalerriek eta gainontzeko toki-erakundeek ekonomiaren arloan izango dituzten eskubide eta betebeharren multzoak osatuko dute euskal toki-ogasuna.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeen ogasunak Lurralde Historikoetako foru-organismoek arlo horretakoak diren gaiei buruz onartutako xedapenak bete beharko ditu, eta baita toki-erakundeek berek erregelamenduak egin eta beren buruak antolatzen duten ahalaz baliatuta onartutako arauak ere.

57. artikulua.- Euskal toki-ogasunen jarduerari buruzko oinarriko printzipioak.

1.- Euskal toki-ogasunek ondorengo oinarriko printzipioekin bat jardun beharko dute:

- a) Finantza-autonomia, hau da, ekonomia, finantzak eta aurrekontuak antolatu eta kudeatzeko ahal izango dute, baina Lurralde Historikoetako foru-organismoek gai horietan dituzten eskumenei kalterik egin gabe.
- b) Finantza-nahikotasuna, hau da, toki-ogasunek behar beste baliabide izan beharko dute lege honek, Eusko Legebiltzarraren beste lege batzuek edo Lurralde Historikoetako foru-arauek ematen dizkieten eskumenak gauzatzeko.

2.- Era berean, euskal toki-ogasunek ondorengo printzipioak bete beharko dituzte, beren baliabideak kudeatzeko: legezketasun-, objektibotasun-, ekonomia-, eraginkortasun-, eragimen-, kontrol-, kuxaren batasun- eta arrazionaltasun-printzipioak.

3.- Euskal toki-ogasunek beren aginpideak aurrera eramaterakoan, Euskadiko ogasun nagusiarekin eta Lurralde Historikoetako foru-ogasunekin koordinaturik, elkartasunez eta erantzukizunak banatuz jardungo dute.

58. artikulua.- Baldintzarik gabeko finantziazioa.

1.- Orokorrean, udalerrien eta gainontzeko toki-erakundeen finantziazioa baldintzarik gabekoa izango da.

2.- Gorago esandakoa hala izanik ere, Eusko Legebiltzarraren lege baten edo Lurralde Historikoen foru-arau baten bidez, finantziazioan baldintzak jarri ahal izango dira, baina ondorengo irizpideak bete beharko dira kasu horietan:

- a) Araudi horren ondorioz autonomia-erkidegoko edo Lurralde Historikoetako erakundeek udalerrii zuzenduta egingo dituzten planek, lehentasunak ezartzeko orduan, udalerriek ere parte hartu ahal izatea bermatuko dute, eta udalerrien interesak autonomia-erkidegokoekin edo Lurralde Historikoetakoekin bateratzen saiatuko dira.

b) Kudeaketa ekonomikoa urte anitzekoa izatea erraztuko da, eta toki-erakundeak inbertsioak nola egin planifikatu ahal izango du, eta erabaki edo hautatzeko orduan, udaleko jarduera-planak eta lehentasunak izango ditu kontuan.

c) Baldintzatutako finantziatio-sistemen bidez eskainiko diren zerbitzuak hartzaileentzat kalitatezkoak direla bermatu beharko da, eta baita zerbitzua eskaintzen jarraituko dela ere.

59. artikulua.- Udalerrien betebeharrak eta zerbitzu berrien erregimena.

1.- Eusko Legebiltzarraren lege bat behar izango da udalerriei edo gainontzeko toki-erakundeetara betebeharrak eta zerbitzu berriak emateko, horien ondorioz finantza-zama handiagoa jasango behar badute.

2.- Betebeharrak eta zerbitzu berri horiek zehazten dituen lege edo foru-arauan, aldi berean, beharrezko finantziatio-bideak zeintzuk izango diren zehaztu beharko da beti, horrela betebeharrak bete ditzela edo zerbitzuak eskainiko direla bermatzeko.

3.- Era berean, euskal udalerrien eta gainontzeko toki-erakundearen autonomia- eta nahikotasun-printzipioak bermatzeko, lege-proiektuarekin batera joango den txosten ekonomikoan, egoera berri horrek toki-erakundearen aurrekontuetan izango duen eraginari buruzko analisi bat ere jaso beharko da.

4.- Arau horrek berak zehaztu beharko du zein bide eta prozedura egongo diren, finantza arloko autonomia- eta nahikotasun-printzipioak errespetatuta ezartzeko. Arauak ez baditu inondik ere zehazten gorago aipaturiko bide eta prozedura horiek, betekizun hori ez betetzeagatik, toki-erakundeek, egoera berriak dakarren gastuaren gehikuntzagatik aurrekontuari eragiten bazaio, ez dute arau berria aplikatu beharrik izango. Finkatzen diren baliabide eta prozedurekin bat ez etortzea ez da nahikoa arrazoi izango araua aplikatzetik salbuesteko, nahiz eta araua aurkatzeko eskubidea izango den.

60. artikulua.- Eskubideak eskuratu, zertarako zehaztu eta preskribitzeko erregimena.

1.- Toki-ogasunek eskubideak eskubideotako bakoitza arautzen duten arau berezietan xedatutakoak bat eskuratuko dituzte.

2.- Sarrera bakoitzaren araudian bestela ezartzen ez bada, sarreraren kopurua horren titularra den erakundearen betebeharraren multzoa finantzatzeko erabiliko da. Helburu zehatzetarako liberalitateetatik datozen sarrerak direnean, ez da beharrezkoa izango berariazko xede-zehaztapena egitea, baldin eta unean-unean indarrean dagoen araudiari jarraiki onartu badira liberalitateak.

3.- Toki-ogasunen eskubideak preskribitu egingo dute, zuzenean edo osagarri moduan zehazki ezartzekoak zaizkien xedapenetan esaten den gisan.

61. artikulua.- Betebeharrak eskuratzea eta eraginkortasuna.

1.- Euskadiko udalerriek eta gainontzeko toki-erakundeek ezartzekoak zaizkien legeek zuzenean agintzen dizkieten betebeharrak bere gain hartuko dituzte, eta baita ordenamendu juridikoarekin bat egiten duten egitate, egintza eta negozio juridikoetatik datozenak ere.

2.- Baliogabeak izango dira erabat toki-erakundeek emandako xedapen orokorrak, ebazpenak eta administrazio-egintzak, baldin eta horien bidez hartu nahi diren gastu-konpromisoak dena delako toki-erakundearen aurrekontuko gastuen egoeran baimendutako kreditu mugatzaileen zenbatekoak baino handiagoak badira.

3.- Toki-erakundeen eta beren erakunde autonomoen kargu egitekoak diren ordainketa-obligazioak efektiboak izango dira aurrekontuak gauzatzetik datozenean, epai judicial irmoek hala erabakitzen dutenean eta diruzaintza-eragiketak gauzatzetik datozenean.

62. artikulua.- Zorpetzeko eta bermeak emateko erregimena.

Lurralde Historikoetako foru-organoek emandako arauetan aurreikusitako moduan, euskal udalerriek eta gainontzeko toki-erakundeek, horien erakunde publikoek, atxikitako erakundeek nahiz horien mendeko merkataritzako sozietateek era guztietako kreditu-eragiketak hitzartzeko aukera izango dute, eta baita eragiketa horiek ziurtatzeko edo horien arriskua edo kostua murriztu edo dibertsifikatzeko finantza arloko beste operazio osagarri batzuk egiteko aukera ere.

II. KAPITULUA

EUSKAL UDALERRIEN ETA GAINONTZEKO TOKI-ERAKUNDEEN FINANTZIAZIOA

63. artikulua. Udalerriek zerga itunduetan izango duten partaidetza.

1.- Ekonomia Ituna dela-eta Lurralde Historikoek eskuratzen dituzten tributuen errendimenduan parte hartuko dute toki-ogasunek, Estatuari ordaindu beharreko kupoa, autonomia-erkidegoari egin beharreko ekarpena eta ekarpenei buruz indarrean den legerian aipatzen diren gainerako kontzeptu guztiak kendu eta gero.

2.- Parte hartze hori ondorengo parametroen arabera zehaztuko da:

a) Udalerriak eta gainerako toki-erakundeak zein eskumen eta zerbitzuren titularrak diren, indarrean den ordenamendu juridikoaren arabera.

b) Toki-ogasunen tributuen errendimenduak eta gainontzeko diru-sarrera propioak.

3.- Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak baliabideak zein diren zehazteko eta udalerriek tributu itunduetan parte hartzeko koefizientea zein izango den finkatzeko metodologia onartuko ditu. Metodologia hori azaroaren 25eko 27/1983 Legean aurreikusten den Ekarpenen Lege-proiektuan jasoko da, eta horrela, onartzeko erregimena eta iraunaldia Ekarpenen Legearena bezalakoa izango da.

64. artikulua.- Lurralde Historiko bakoitzeko partaidetza zehaztea.

1.- Lurralde Historiko bakoitzean horien baitako toki-erakundeek zenbateko parte hartzea izango duten zehaztea Lurralde Historiko horietako foru-organoen eskumena da, eta ondorioz, askatasun osoz baliatuko du eskumen hori.

2.- Dena den, Finantzen Euskal Kontseiluak, politika fiskaleko gomendio gisa baino ez, banaketa egiteko irizpide batzuk zehaztuko ditu, eta irizpideak berdinak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historiko guztietarako; finantza-nahikotasunaren printzipioa bete, ahalegin fiskala sustatu, gastu arruntari buruz berdintasunezko eta elkartasunezko politika orokorra lortzen saiatu eta gastu arrunten hazkundera neurtua izan dadila bilatuko dute irizpideok.

3.- Finantzen Euskal Kontseiluak ondorengoak kontuan izanda zehaztuko ditu irizpide horiek:

a) Batez ere biztanle-kopurua kontuan izanda.

b) Beste egoera batzuk:

- Zentro publikoetan dagoen ikasle-kopurua.
- Udalerriaren ahalegin fiskala.
- Lurralde Historiko bakoitzeko hiriburua izatea.
- Inmigrante-kopurua.
- Dispertsioa.
- Langabezia.

4.- Lurralde Historikoek irizpide horietatik aldentzeko aukera izango dute, eskumena duen foru-organok arrazoiak emanda hartutako akordioaren bidez.

65. artikulua.- Aplikazioa eta likidazioa.

1.- Aurreko artikuluetan xedatutakoaz bat udalerriei eta gainontzeko toki-erakundeei dagokien finantziakzioa tokiko erakunde horien ogasunaren baliabide arrunta izango da, haien eskumenekoak diren zerbitzu guztiei aurre egin eta eskaini ahal izateko, betiere ezartzekoa den araudiaz bat.

2.- Ekitaldi bakoitzerako Lurralde Historiko bakoitzean udalerrien eta gainontzeko toki-erakundeen esku jarritako zenbatekoak behin betiko kitatuko dira ekitaldia amaitzean, hitzartutako tributuengatik nahiz kontuan hartu beharreko gainontzeko diru-sarreretatik bildutakotik lortutako diru-sarreraren datu errealekin bat.

66. artikulua.- Itundu gabeko zergetan parte hartzea.

Udalerriek eta gainontzeko toki-erakundeek itundu gabeko zergetan izango duten parte hartzea Ekonomia Itunean eta ezartzekoa den araudi berezian esaten denaren arabera izango da.

VIII. TITULUA

BESTE XEDAPEN BATZUK

67. artikulua.- Zigortzeko jardunbidea.

1.- Zehatzeko prozeduretan, aukera egongo da udal-ordenantzetan isunen ordeztokiko komunitatearen aldeko lan baliokideak eta arau-haustearen larritasunarekin proportzionalak egitea arautzeko, gaiak eragiten dionak aldeztatik onartzen badu, eta organo zehatzaileak hala erabakitzen badu.

2.- Beste batzuek egin ditzaketen administrazioko arau-hausteei aurrea hartzeko legezko betebeharrak duten pertsona fisiko edo juridikoak dena delako arau-haustearen ondoriozko kalteen erantzule solidarioak izango dira, halakorik gertatzen bada.

68. artikulua.- Euskal udalen elkarteak negoziakzio kolektiborako legitimatzea.

1.- Euskal udalen elkarteak, oinarrizko legerian esaten denaz bat, legitimaturik egongo dira euskal udalerrietako eta gainontzeko toki-erakundeetako langile publikoekin negoziakzio kolektiboaz aritzeko.

2.- Euskal udalerriak, horretarako hartutako akordioaren bidez, euskal udalen elkarteek aurrera eramango duten negoziazio kolektiboaren aurretik atxiki ahal izango dira Hala eginez gero, akordioa izenpetzen den unetik, atxikitako toki-erakundeak hartuko diren akordioei loturik egongo dira.

3.- Euskal udalerriak Euskal Udalen Elkarteak burututako negoziazio kolektibora eta horren ondoriozko akordioetara atxiki ahal izango dira.

69. artikulua.- Elkarrekin burututako lan-eskaintza publikoak eta hautaketako prozedura komunak.

1.- Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin horretarako sinaturiko hitzarmenaren bidez, eta kasuan kasuko udalerrri edo toki-erakundeak aldeztu aurretik hartutako akordioaren bidez, udalerrietako lan-eskaintza publikoak autonomia-erkidegokoaren edo, hala behar duenean, Lurralde Historikoen sartu ahal izango dira.

2.- Era berean, udalerrriak edo kasuan kasuko toki-erakundeak aldeztu aurretik hala erabakita, aukera egongo da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin hitzarmen bat izenpetzeko, hain zuzen ere toki-erakundeetako funtzionario edo lan-legepeko langile bihurtzeko hauta-proben deialdiak erakunde horrek berak egin ditzan. Hitzarmen horietan berriaz jasota egon beharko da zerbitzu horien ondoriozko betebeharrak finantzarioak zein diren.

XEDAPEN GEHIGARRIA.- Ordezkaritza handiena duen euskal udalen elkarteak.

1.- Ordezkaritza handiena duen euskal udalen elkarteak izango da Euskadiko erakundeetan ordezkaritza publikoa beteko duena, hala erabakiko den esparru guztietan.

2.- Ordezkaritza handiena duen euskal udalen elkarteak lege honetan aurreikusitakoaren arabera emango zaizkion eginkizun guztiak izango ditu, beti.

XEDAPEN IRAGANKORRA.- Gaitasun nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen erregimen juridikoa.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen bigarren xedapen gehigarria garatuko duen funtzio publikoari buruzko araudi autonomikoa indarrean sartu arte, gaitasun nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioek EAEn izango duten erregimen juridikoa gaur egun indarrean dagoena izango da, betiere ondorengo arauak kontuan izanda:

1. Gaitasun nazionala duten funtzionarioen eskala osatzen duten azpieskaletara sartzeko hautaprobak gainditu dituzten hautagaiak funtzionario izendatzeko aginduak funtzio publikoaren arloko eskumenak dituen saileko sailburuak emango ditu.
2. Administrazio-egoerari buruzko adierazpenak eta karrera profesionalarekin zerikusia duten gorabehera guztiak funtzio publikoko zuzendariaren ebazpen bidez egingo dira, eskumen hori beste organo bati eman ez zaion guztietan.
3. Organo hauek izango dute diziiplina-espedienteei hasiera emateko eskumena:
 - a) Toki-erakundeko alkate edo lehendakariak beti, edo aurreko horrek eskuordeturik, langileen zuzeneko burua denak. Toki-erakundeak aukera izango du autonomia-erkidegoko administrazioko funtzio publikoko zuzendaritzari diziiplina-espedienteak izapidetzeko izapidegilea izenda dezala eskatzeko, hori egiteko giza baliabiderik ez baldin badu.
 - b) Administrazio autonomikoko funtzio publikoaren zuzendaritza, zerbitzuak ematen ari denaz bestelako erakunde batean egindako hutsegiteak direnean, baldin eta bi erakundeok EAEkoak badira, edota salatutako egintzen larritasuna dela eta, hutsegite horrek kargu-gabetzea edo zerbitzutik kentzea eragin dezakeenean.
4. Diziiplina-espedientea ebazterakoan, hutsegite larrien edo oso larriengatiko zehapenak ezartzeko organo eskudunak dira honako hauek:
 - a) Funtzio publikoaren arloko eskumena duen sailburua, kargu-gabetzea eta zerbitzutik bereiztea dakarten zehapenak ezarri behar direnean.
 - b) Toki-erakundeko udalbatza, aurreko paragrafoan ageri ez diren zehapenak direnean.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

1.- Indarrik gabe geratzen dira honako arau-xedapen hauek:

- a) 326/1994 Dekretua, uztailaren 28koa, Euskadiko Udal Kontseilua sortzen duena.
- b) 364/1987 Dekretua, abenduaren 1ekoa, toki-erakundeek ikur bereizgarriak hartzeko edo aldatzeko prozedura onartzeko dena.
- c) 271/1983 Dekretua, abenduaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izenak aldatzeko prozedura finkatzen duena.

2.- Indarririk gabe geratzen dira, era berean, lege honetan aurreikusitakoari kontra egiten dioten xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.- Autonomia-elkarte osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako foru-organoen arteko harremanetarako azaroaren 25eko 27/1983 Legeari aldaketak.

Bat.- Finantza Publikoen Euskal Kontseiluaren eta udalerrien funtzionamendua.

Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluko 1. atalari. Hauxe dio:

“Finantza Publikoen Euskal Kontseilua, halaber, Euskadiko udal-mailako erakunde guztien eta beren sektore publikoaren jardun finantzarioa Euskadiko Ogasun Nagusiarekin batera lantzeko sortu da, batez ere, baliabideak zehazteko eta udal-erakundeek hitzartutako tributuetan zenbateko partizipazio-koefizientea izango duen erabakitzeko erabiliko den metodologia bien artean finkatzeko, lege honen 63. artikulua xedatzen duenaren arabera; horrez gain, lege honetako 64. artikuluan adierazten den zeregina ondo betetzeko ere sortu da kontseilua.”

Bi.- Euskal udalerriek Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan daukaten parte-hartzea.

Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluko 4. atalari. Hauxe dio:

“Udal-mailako edozein ordezkari hala eskatzen badu ere bilduko da Kontseilua, ordezkari horri interesatzen zaion kontuaz aritzeko.”

Hiru.- Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluari. Hauxe dio:

“10. Nolanahi, artikuluko 2. eta 5. ataletan xedatutakoa alde batera utzita, euskal udalerrietako hiru ordezkari jarriko dira Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan, errotuen dauden Euskal Udalerrien Elkarrekin izendatuta. Honela jokatu behar da ordezkari horiek kontseiluan jartzeko. Euskal udalen ordezkariaren pluraltasun politikoa bermatze aldera, izendapen horiek autonomia-erkidegoko udal-hauteskundeetan boto gehien jasotako hiru indar politikoetako kideetara bideratu behar dira; edozein kasutan ere, hautatutako zinegotzi izan behar dute izendapena jasotzeko.

Udaletako ordezkariak hitz egiteko eskubidea bai baina botoa emateko eskubiderik gabe izango dira Kontseiluan, non eta ez lantzen diren kontuak ez diren zuzen-zuzenean eragiten dietenak. Alabaina, eskubide oso kide izango dira baliabideak zehazteko eta udal-erakundeek hitzartutako tributuetan zenbateko partizipazio-koefizientea izango duen erabakitzeko erabiliko den metodologia finkatzeko unean (63.3 artikulua); lege honetako 64. artikuluan jasotakoa taxutzeko unean, eta, udalerri

zuzenean eragiten badie, Lurralde Historikoen Legearen bigarren xedapen gehigarriaren hirugarren zenbakian jasotakoa betetzeko unean.

Udal-ordezkariek hitza eta botoa daukatenean, akordioak hartu ahal izateko, ezinbestekoa izango da akordiook gehiengo absolutuaz onartzea, betiere, gehiengo horrek maila instituzional bakoitzeko, gutxienez, ordezkarri bat daukala.”

Lau.- Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluari. Hauxe dio:

“11. Kontseiluak badauka aholkua eskatzerik eta beharrezko iruditzen zaizkion datuak biltzerik, bai euskal udalerrietatik bai eta ordezkaritza handiena daukan udal-elkartetik ere. Euskal udalerrak eta ordezkaritza handiena daukan udal-elkartea, biak ala biak, behartuta daude eskatutako datuak eta bestela informazio guztia emateko, artikuluko honetako aurreragoko zenbakietan Autonomia Erkidegoko Administrazioari eta Foru Aldundiei jarritako baldintza berdinetan.”

Bigarrena.- Sistema berria martxan jartzea.

Lege hau indarrean sartu eta bi hilabeteko epean, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluari dei egingo zaio udaletako aholkulari berriak izenda ditzan, eta “Ekarpenen eta partizipazioen Legea” delakoaren proposamen berria onar dezan, lege honek halaxe agintzen duenez. Lege horrek aurrekontuaren hurrengo ekitaldirako indarrean egon beharko du, gaur egun indarrean den Ekarpenen Legeari indarrean egoteko zenbat geratzen zaion alde batera utzita.

Hirugarrena.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren Erregelamendua prestatzea.

Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren Erregelamendua prestatzeko, lege hau indarrean sartu eta bi hilabete pasa aurretik, lehenengo Kontseilua eratuko da. Sei kide izango ditu lehenengo honek: hiru, ordezkaritza handien daukan Euskal Udalerrien Elkarteak izendatutakoak, euskal udalerrien ordezkarri, eta beste hiru Eusko Jaurlaritzako lehendakariak izendatutakoak. Kontseiluaren zeregina izango da Kontseiluaren Erregelamendua prestatu eta onartzea, bi hilabeteko epean.

Laugarrena.- Garatu eta betetzeko gaikuntza.

Ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege hau garatzeko beharrezkoak diren erregelamendu-xedapenak sortzeko, dagozkion eskumenen esparruan.